

Un movimiento social es siempre una acción colectiva que se constituye desde la sociedad civil, o desde lo social, para hacer visible el malestar y diversas demandas al Estado, sus instituciones y representantes, o a un oponente en la propia sociedad civil. Lo propio de los movimientos sociales es la acción colectiva de quienes buscan expresar al conjunto de la sociedad su malestar y sus proyectos de cambio.

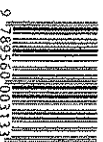
El concepto de "movimiento social" ingresó al lenguaje público a propósito de las movilizaciones de los estudiantes el año 2011, y del apoyo activo que estos han encontrado en la sociedad. Habría que indicar que su impacto opera como expresión visible del descontento acumulado por la sociedad bajo el imperio de las políticas neoliberales. Desigualdad y distanciamiento social, endeudamiento, velada o abierta discriminación de los más pobres, mercantilización del conjunto de las relaciones sociales, pero sobre todo, bloqueo al desarrollo de las nuevas generaciones de jóvenes, parecen ser algunas de las razones que mueven a los estudiantes y a quienes adhieren con ellos. Sin duda, se ha tratado del movimiento social más significativo de los últimos veinte años de la historia chilena, y el que cierra la transición a la democracia organizada por la Concertación, abriendo, tal vez, un nuevo ciclo social y político de nuestra historia: la del post neoliberalismo, que muchos de nuestros países hermanos en América Latina ya han iniciado.

Más allá de coyunturas específicas, lo que hay que tener en cuenta, desde un punto de vista histórico, es que América Latina no puede ser pensada sin la "acción colectiva" de nuestros pueblos, ya que en muchos casos, ésta es la forma en que ellos participan de las luchas políticas, especialmente si se tiene en cuenta las débiles tradiciones democráticas del continente y las también débiles estructuras institucionales que hacen posible procesar las demandas de cambio y de justicia social.

Mario Garcés, Doctor en Historia y docente de la Universidad de Santiago. Director de ECO, Educación y Comunicaciones, es autor de los libros *La explosión de las mayorías. Protesta Nacional, 1983-1984* (Ediciones ECO, 1985), *Crisis social y molinos populares en el 1900* (Lom 2003), *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970* (Lom 2002), *El golpe en la Legua* (Lom 2005).



Colección Bolsillo



Mario Garcés

MARIO GARCÉS

El despertar de la sociedad

EL DESPERTAR DE LA SOCIEDAD

Los movimientos sociales en América Latina y Chile



Lom

PALABRA DE LA LENGUA

YÁMANA QUE SIGNIFICA

Sol

Garcés Duran, Mario

El despertar de la Sociedad: Los movimientos sociales en América Latina y Chile [texto impreso] / Mario Garcés Duran. -- 1ª ed. -- Santiago: LOM Ediciones, 2012. 150 p.: 17x11 cm. (Colección de Bolsillo)

ISBN : 978-956-00-0313-3

1. Movimientos Sociales -- América Latina 2. Movimientos Sociales -- Chile I. Título. II. Serie.

Dewey : 320.98 -- cdd 21

Cutter : G214d

FUENTE: Agencia Catalográfica Chilena

MARIO GARCÉS

El "despertar" de la sociedad.
Los movimientos sociales en
América Latina y Chile



MARIO GARCÉS

*El “despertar” de la sociedad.
Los movimientos sociales en
América Latina y Chile*

© LOM Ediciones

Primera edición, 2012

ISBN: 978-956-00-0313-3

RPT: 213.120

EDICIÓN Y COMPOSICIÓN

LOM Ediciones, Concha y Toro 23, Santiago

TELÉFONO: (56-2) 688 52 73 | FAX: (56-2) 696 63 88

lom@lom.cl | www.lom.cl

IMPRESO EN LOS TALLERES DE LOM

Miguel de Atero 2888, Quinta Normal

Impreso en Santiago de Chile

Introducción

Algo pasó en Chile este año 2011 que vino a poner en duda los niveles de logros proclamados por su clase política y a interrogar en muchos sentidos la convivencia de los chilenos. Chile parecía ser, hasta hace muy poco, el país donde el orden social se percibía como el más logrado y el más *naturalizado* de todos, tanto en relación a sus vecinos latinoamericanos, vistos siempre como inestables, como también en relación a su propia historia. Una transición exitosa a la democracia le había permitido dejar atrás un pasado de conflictos, polarización, odios y, por cierto, al igual que sus vecinos, de gran inestabilidad política. Por fin el país, en expresiones de sus dirigentes políticos, alcanzaba un estadio de desarrollo envidiable, en donde la estabilidad política convivía de manera virtuosa con el crecimiento económico. Algo así como el “fin de la historia” de la cual escribió Fukuyama en los años 90, economía de mercado y democracia representativa, las dos claves del éxito eran asumidas por los chilenos como propias y bien podían ser motivo de orgullo de la élite nacional.

Pero este año 2011, parafraseando al sociólogo argentino José Nun, comenzamos a vivir algo así como una “rebelión del coro”, es decir, una parte significativa de la sociedad, en especial los más jóvenes –los estudiantes secundarios y universitarios– comenzaron a salir a las

calles para demandar un cambio en el sistema educacional. La escena clásica del teatro con sus protagonistas principales—en nuestro caso, los líderes políticos, el presidente, sus ministros, etc.—comenzaron a ser cuestionados por “actores secundarios” o, más ampliamente, por el coro, es decir por quienes no estaban invitados a subir al escenario. El impacto de los jóvenes fue de tal envergadura, que pronto comenzaron a sumarse otros: sus propios padres, que encontraban justas sus demandas; sus profesores, que sabían, desde antes que los jóvenes, que el sistema educativo chileno no funcionaba bien; pero también, en algunas ocasiones se sumaron a sus marchas los trabajadores subcontratados, los empleados públicos y cuando el gobierno comenzó a poner en práctica en mayor grado la represión, en las noches comenzaron a sonar las cacerolas en los barrios de Santiago y provincias. Fue en este contexto cuando un nuevo concepto ingresó al espacio público, en la televisión, en los diarios y en expresiones de muchos dirigentes sociales y políticos: se comenzó a hablar entonces, de “el movimiento social”.

Atendiendo a estos hechos, se podría indicar que la idea o el concepto de “movimiento social” ingresó al lenguaje público a propósito de las movilizaciones de los estudiantes, pero más que eso, a propósito del apoyo activo que los estudiantes han encontrado en la sociedad. O sea, movimiento social sería, por una parte, la “acción colectiva” de los estudiantes secundarios y universitarios, y por otra, los efectos que ha alcanzado en la sociedad el movimiento estudiantil, desde el apoyo que reconocen

las encuestas a las demandas de los estudiantes hasta las manifestaciones activas de solidaridad (la participación en las marchas de grupos sociales que no son estudiantes, los actos en la Plaza Ñuñoa; la gran manifestación en el Parque O'Higgins en agosto; hasta los caceroleos en los barrios). En este sentido, podríamos decir que el movimiento social ha tenido dos vertientes: la de los estudiantes, que en rigor podríamos definir como un movimiento social, en sentido estricto; y, la del apoyo de la sociedad, que podríamos definir como un movimiento social en sentido amplio.

A decir verdad, el concepto o la noción de “movimiento social”, desde una perspectiva histórica, es una categoría de vieja data, cuando se la identificaba, desde fines el siglo XIX, con el “movimiento obrero”. Pero cuando en los años sesenta del siglo XX surgieron otros sujetos colectivos, como los estudiantes de “mayo del 68” en Europa o los movimientos que luchaban en contra de la guerra de Vietnam o por los derechos civiles en los Estados Unidos, se comenzó a romper esta asociación: movimiento social es igual a movimiento obrero. Más tarde, en América Latina, en medio de las dictaduras, surgieron otros actores colectivos: los movimientos de Derechos Humanos, los movimientos de mujeres, los movimientos juveniles o los ecologistas. Con mayor razón, esta asociación entre lo social y lo obrero terminó de romperse. Para facilitar la comprensión de esta nueva realidad, se empezó a distinguir en las ciencias sociales entre “movimientos sociales tradicionales” (obreros y campesinos) y los “nuevos movimientos sociales”, para

nombrar todas esas formas de acción colectiva que no tenían una base clasista.

En todos los casos, sin embargo, como veremos con más detalle en las páginas que siguen, un movimiento social es siempre una acción colectiva que se constituye desde la sociedad civil, o desde lo social, para hacer visible el malestar y diversas demandas al Estado y sus instituciones y representantes, o a un oponente en la propia sociedad civil (los patrones, por ejemplo en el caso del sindicalismo). Lo propio de los movimientos sociales es la acción colectiva de quienes buscan expresar al conjunto de la sociedad su malestar y sus proyectos de cambio social. Sin embargo, a pesar de que siempre hay motivos para el malestar, no siempre hay movimientos sociales. Este será un problema del que nos ocuparemos, al menos parcialmente, en este libro.

El caso chileno es paradigmático en este último sentido, ya que cuando la transición a la democracia no era capaz de poner en práctica las tareas de democratización efectiva de la sociedad (o su consigna de que “la alegría ya viene”), el malestar se comenzó a instalar en vastos sectores sociales. Sin embargo en veinte años de gobiernos de la Concertación no se constituyeron movimientos sociales significativos, salvo el movimiento mapuche y, de manera más episódica, el movimiento de los secundarios a principios del 2000 y el “movimiento pinguino”¹ del 2006. Algo cambió, sin embargo, en el 2011, y los más diversos

¹ Denominación popular de los estudiantes secundarios, especialmente por la forma y los colores del uniforme escolar.

grupos sociales y políticos hoy reconocen no solo que los estudiantes están planteando problemas reales, que provienen del desastroso sistema educacional chileno creado en dictadura y prolongado en democracia, sino que además el “movimiento social”, en sentido amplio, obliga a pensar en cambios políticos.

La relación entre movimientos sociales y cambio político es un problema histórico en América Latina y Chile. Por esta razón, estimulado por la coyuntura, por mis estudios relativos a los movimientos sociales, así como por los debates con los estudiantes, con mis compañeros de ECO, Educación y Comunicaciones; con mis colegas del Departamento de Historia de la USACH y el Comité Editorial de LOM surgió este libro, que se organiza en cinco capítulos. El primero propone un breve análisis del movimiento estudiantil del 2011; el segundo, se ocupa de la teoría, y busca responder a la pregunta de ¿qué es en un movimiento social? El tercero trasciende nuestras fronteras y comenta sobre los nuevos y más recientes movimientos sociales en América Latina (los Sin Tierra del Brasil, los piqueteros argentinos y los movimientos campesinos e indígenas de Bolivia). El cuarto capítulo, el más extenso, propone una mirada a los movimientos sociales en Chile, con especial énfasis en el tiempo reciente (la Unidad Popular y la dictadura). Finalmente un capítulo de cierre, pero abierto al debate, busca responder a la pregunta sobre el futuro del movimiento estudiantil y los movimientos sociales en Chile. Parte muy importante de la reflexión que se propone fueron posibles gracias al

desarrollo, durante el 2010-2011, del Proyecto Fondecyt N° 1100142 "El movimiento de pobladores durante la Unidad Popular: De las "tomas de sitios" a la formación de poblaciones".

Capítulo I

El movimiento estudiantil: el despertar de la sociedad

En medio de las movilizaciones estudiantiles he sido invitado a encuentros, foros o simplemente conversaciones con jóvenes secundarios y universitarios.

En una visita a estudiantes secundarios en toma, en el barrio Las Rejas de Santiago, les propuse que luego de una vuelta de presentaciones, ya que nos veíamos por primera vez, ellos mismos me indicaran los temas que querían discutir. Era un grupo pequeño, cuyas edades fluctuaban entre los 15 y los 17 años. Se ofreció la palabra y dos preguntas llamaron más mi atención: "Queremos que nos hable del contexto histórico del movimiento estudiantil", indicó uno de ellos, y otro agregó "y del despertar de la sociedad", del "por qué hoy se expresan tantas demandas". Me pareció que eran preguntas y temas muy pertinentes, pero ciertamente complejos. Dos razones poderosas para ocuparse de ellos.

Es evidente que la mayor novedad del año 2011 ha sido el impacto del movimiento estudiantil. Pero si observamos el contexto en que este emerge, descubrimos que el gobierno de Sebastián Piñera venía enfrentando, con serias dificultades, diversas situaciones que interrogaban su liderazgo y la gestión del propio gobierno. En efecto, el año 2011 se inició con una masiva protesta en la ciudad de Punta Arenas cuando se intentó subir el precio del gas

por sobre lo prometido en la campaña electoral; en marzo tuvo que renunciar la Intendente del Bío Bío por sus dichos que agravaban la credibilidad pública; al mes siguiente, la ministra de la Vivienda, por manejos poco claros en el uso de fondos públicos en favor de empresas privadas y, además, cuando el balance de la reconstrucción —a un año del terremoto del 27 de febrero de 2010— mostraba signos negativos (solo se ha reconstruido un poco más del 20% de las viviendas dañadas). Y suma y sigue: en mayo se aprobaba el Proyecto HidroAysén, que ha sido rechazado por vastos y variados sectores ciudadanos, habida cuenta del daño al medio ambiente. Y así llegamos a mayo y junio, en que los estudiantes saltaron a la palestra.

Los problemas de gestión del gobierno, y también de credibilidad, se fueron agudizando, no solo a propósito de su propia gestión, sino porque los chilenos comenzaron a salir a las calles. Primero, como ya indicamos, fueron las manifestaciones del verano en Punta Arenas; luego, las marchas de los ecologistas y ciudadanos que rechazaban el megaproyecto eléctrico HidroAysén y que superaron a los 40 mil convocados. Más tarde, las minorías sexuales también ocuparon las calles exigiendo igualdad de derechos; paralelamente, pero con mayor persistencia, las marchas estudiantiles, que casi una por semana —aunque con intervalos— se han sucedido desde el mes de mayo hasta octubre de este año, sumando a miles de estudiantes y otros grupos sociales. Comenzaron marchando en mayo, unos 20 mil; en julio y agosto, llegaban 100 mil, y en una gran manifestación en el Parque O'Higgins, a

fin de agosto, se estima que se congregaron unas 700 mil personas. Esto, sin contar con “las tomas” de liceos y universidades, las múltiples asambleas y deliberaciones en los centros de estudio y las más diversas manifestaciones, del tipo “acción de arte”, que se han realizado en calles y plazas céntricas de Santiago.

De este modo, se fue configurando un cuadro social y político con dos componentes fundamentales: un movimiento social potente, el de los estudiantes, y un gobierno ensayando débiles estrategias de salida al conflicto, pero sobre todo, que comenzaba a ser víctima de una crisis de credibilidad (la popularidad del presidente caía al 27% en las encuestas de opinión), y más ampliamente, se comenzaba a percibir en la sociedad una crisis de legitimidad del sistema político chileno. Desde un punto de vista teórico, la cuestión podría plantearse del siguiente modo:

a) Desde la teoría de los movimientos sociales, aparentemente no es tan sorpresiva la emergencia pública de los movimientos sociales, ya que estos, podríamos afirmar, tienen su *propia temporalidad*, que no es la misma que la de la actividad política. Mientras esta última está regulada por las coyunturas electorales o ciertos ritos institucionales, también ahora, por la evaluación de la gestión que producen las encuestas, la temporalidad de los movimientos sociales se relaciona más bien con el carácter y la naturaleza de sus demandas. Por ejemplo, los estudiantes se manifestaron el año 2000, en el denominado “mochilazo”; en el 2006, en el “movimiento pingüino”; y, hoy en 2011, por la defensa de la “educación pública”. En las tres coyunturas, bajo distintos gobiernos,

hay demandas que evolucionan o se reiteran de nuevas maneras. Pero se trata del mismo movimiento, que se desenvuelve o desarrolla en su propia temporalidad.

- b) Desde la teoría política, la cuestión de la credibilidad en el gobierno y más ampliamente en el sistema político, es un asunto más complejo, ya que nos introduce necesariamente en la cuestión de legitimidad, en relación a la cual podemos plantearnos, para el caso chileno, diversas interrogantes: ¿Cuál es la legitimidad del sistema político chileno que surge de una Constitución heredada de la dictadura y débilmente modificada en el contexto de una transición a la democracia, pactada “en las alturas”? ¿Qué legitimidad puede tener el sistema binominal que solo hace posible la expresión de grandes bloques políticos y niega la posibilidad de expresión de las minorías en el sistema político? Y finalmente, ¿en qué medida pueden gozar de prestigio los políticos chilenos que han constituido su acción en un asunto mediático y retórico, separado de las dificultades de la vida de la gente común?

“Crisis de credibilidad” puede ser la mejor manera de nombrar la coyuntura política en relación al gobierno, pero si se atiende al tiempo largo de los movimientos sociales, y ya no solo al de los estudiantes, sino las demandas de los mapuche, los ecologistas, las minorías sexuales, los empleados públicos, la perspectiva de análisis varía y se puede sugerir que estamos en medio de un asunto más complejo y más de fondo: el de la *crisis de legitimidad del sistema político*. Los problemas de legitimidad del sistema político chileno, en rigor, se comienzan a configurar

en dictadura y se terminan de constituir en la transición a la democracia. Crisis en el sentido de la capacidad de la política del Estado para atender las demandas ciudadanas, algunas recientes y otras de vieja data. No hay que ser experto en ciencias políticas para saber que el sistema político chileno actual proviene de una Constitución Política neoliberal impuesta a la ciudadanía por la dictadura, en 1980, y que la transición a la democracia modificó solo parcialmente este engendro constitucional concebido como “una jaula” o un *corset* institucional que asegurara la estabilidad, inhibiendo la democracia. Adelantados o aventajados discípulos del conservador cientista político norteamericano Samuel Huntington, los dirigentes políticos chilenos de la dictadura y de la transición pensaron que mucha democracia produce poca gobernabilidad y que poca democracia produce mayor gobernabilidad.

En síntesis, en la coyuntura 2011, los problemas sociales y políticos se superponen; por una parte, los movimientos sociales adquieren nuevos desarrollos así como mayor visibilidad, y por otra parte, el sistema político, alejado de la vida cotidiana de los ciudadanos, pierde en su débil legitimidad—de origen y de ejercicio—, y es progresivamente horadado por el “sentir ciudadano”, especialmente cuando éste adquiere expresión pública.

Si la “crisis de legitimidad” puede tomar tiempo en madurar, saber cuál puede ser el camino de salida a las movilizaciones y demandas estudiantiles, es un asunto tanto más complejo, que puede ser abordado en el tiempo

corto y en el tiempo largo, según sea el campo de problemas que escojamos.²

En el tiempo corto, el de la coyuntura, es evidente que los estudiantes han alcanzado importantes logros simbólicos, por ejemplo, en el lenguaje, hoy se puede nombrar lo que hasta ayer era innombrable: "educación gratuita"; también de tipo social, han logrado que miles de chilenos, de distintas edades, oficios y posiciones sociales solidaricen con sus demandas. Y todo indica que alcanzarán logros relativos en el campo de las políticas públicas: el gobierno propondrá proyectos de ley que regulen el lucro; la creación de una Subsecretaría de Educación Superior; un nuevo estatuto de universidades, que transparente un poco el negocio; y en torno a la educación municipal, se propondrá alguna nueva forma de ampliación del mercado, con fundaciones o corporaciones. Habrá zonas críticas, que podrían traducirse en logros tanto más significativos, por ejemplo, incrementar el "aporte basal" del Estado a las Universidades Públicas o redefinir la cuestión del "crédito fiscal" y las becas para los estudiantes de escasos recursos. El asunto de fondo, sin embargo, es que la mayor parte de estas medidas no modifican estructuralmente el sistema educativo nacional, orientado y regulado por el mercado, sino que solo atienden aspectos parciales, algunos ciertamente apremiantes. El gobierno, en una primera fase, parecía no escuchar con claridad las demandas y propuestas

² Recreo parcialmente en este pasaje mi artículo "El movimiento estudiantil y la crisis de legitimidad de la política chilena", publicado por CARCAJ, Revista electrónica de LOM, 3 de julio de 2011. Ver en www.carcaj.cl y en www.ongeco.cl

de los estudiantes y no se abrían espacios de negociación, sino que diversas propuestas unilaterales del gobierno, todas de carácter parcial, que los estudiantes rechazaban. En una segunda fase, que se abre, a fines de agosto, a partir de una intervención del Presidente Piñera invitando a una Mesa de Diálogo a los dirigentes estudiantiles, la situación se parecía modificar; sin embargo, el gobierno dilata las conversaciones y finalmente se niega a atender las demandas más fundamentales del movimiento, relativas a la gratuidad de la educación y el fin del lucro con fondos públicos. El "diálogo" no prospera.

En realidad, en el desarrollo del movimiento estudiantil, en favor de la "Educación Pública", se ha hecho evidente que se confrontan dos miradas contrapuestas: la del gobierno y la de los estudiantes. La del gobierno, tributaria del modelo neoliberal, que considera la educación como un "bien de consumo" en la que los privados están invitados a cumplir un activo rol con sus debidos réditos (es decir, la educación puede ser un objeto de negocios privados) y al Estado solo le corresponde un rol regulador de los negocios educativos y subsidiario de los quintiles más pobres. Expresado de este modo, es por cierto un avance en las formas neoliberales chilenas, ya que hasta el 2011, el funcionamiento del sistema educativo nacional, con fuerte presencia del mercado, ha sido un sector, digámoslo con claridad, de negocios completamente desregulado. Las Universidades privadas, según la ley no deben tener fines de lucro y todas hacen grandes negocios con empresas inmobiliarias

creadas por los mismos dueños; los aranceles se fijan con plena libertad de mercado; los bancos se benefician con créditos abusivos que generan gran endeudamiento de los estudiantes; en la educación secundaria, crecen los colegios subvencionados, a los que no les está prohibido hacer negocios con fondos públicos, etc.

Por su parte, los estudiantes, recuperando viejas tradiciones nacionales respecto de la educación, postulan que la educación debe ser concebida como un derecho garantizado por el Estado. Y si bien sus demandas han evolucionado en el curso del movimiento, han concentrado sus propuestas en la exigencia de poner “fin al lucro”; educación gratuita; desmunicipalización; aporte basal serio y real a las Universidades Públicas. En pocas palabras: responsabilidad social del Estado para garantizar el derecho a la educación. De este modo, la oposición fundamental entre gobierno y estudiantes se podría sintetizar en la oposición negocios versus derechos.

Si así pueden ser definidas las visiones que se oponen en el conflicto, un problema adicional, pero a su vez fundamental para enfrentar el conflicto, es dónde se pueden dirimir las diferencias. La respuesta sería en el sistema político vigente, o sea, en las instituciones, ya sea porque se llega a acuerdo con el ejecutivo o porque se modifican las leyes en el Parlamento. Pero aquí volvemos al problema inicial: el sistema político chileno, organizado sobre la base de una Constitución heredada de la dictadura, obliga a altas mayorías parlamentarias para modificar las denominadas “leyes orgánicas” (la de educación es

una de ellas), lo que supone un acuerdo con la derecha neoliberal —la trampa a la que se acomodó la Concertación por 20 años en el gobierno—, pero además la Constitución tampoco hace posible convocar a un plebiscito.

Nos acercamos de este modo a un “empate catastrófico” en que el gobierno cuenta con todos los medios institucionales para bloquear al movimiento estudiantil y apostar a su desgaste en el tiempo, y los estudiantes están obligados a mantenerse movilizadas y sumar apoyos sociales para no perder visibilidad y lograr reformas significativas en el actual sistema educativo nacional, o, contribuir a que la crisis de legitimidad se transforme en crisis política. O sea, obligue al ejecutivo y al Parlamento a modificar el sistema político para hacer posible procesar las demandas que provienen de los movimientos sociales. Un enorme desafío.

Dicho de otro modo, cuando un movimiento social alcanza tal grado de desarrollo en nuestro país, inevitablemente cuestiona la legitimidad del sistema político, conduciendo a partir de las imposiciones de las élites políticas y económicas en nuestras diversas coyunturas constitucionales (1833, 1925 y 1980), ninguna de las cuales se elaboró a partir de la conformación de una Asamblea Constituyente que hiciera posible el ejercicio de la *soberanía* nacional. O más claro aún: todas las Constituciones que han regido a Chile, desde la derrota de los liberales en 1829-1830, han

sido impuestas, ninguna ha sido el resultado de un ejercicio de la soberanía popular.³

De este modo, el movimiento estudiantil ha puesto sobre el tapete el problema educacional, que nos fue impuesto por leyes de la dictadura en 1981 (Nueva Ley de Universidades) y 1990 (la LOCE, promulgada por Pinochet el día antes de dejar el poder) y todo este engendro legal fue debidamente protegido por la Constitución, también de la dictadura de 1980 y solo modificada parcialmente por los gobiernos de la transición. La verdad entonces es que los chilenos nunca han sido consultados sobre el sistema educativo que prefieren ni tampoco convocados a una Constituyente que fije las normas de la convivencia democrática.

¿Pero por qué tanta imposición y tan precaria práctica de la soberanía? Se pueden formular diversas hipótesis a este respecto. Algunas de larga data, como aquellas sentencias de los que fundaron el Estado nacional, en el siglo XIX, que consideraban que la sociedad no estaba preparada para la democracia y que era preferible “el peso de la noche” y la autoridad impersonal y obedecida (para los conservadores, la sociedad nunca está preparada para la democracia); otras, son más cercanas en el tiempo, por ejemplo, aquella de que Chile era una excepción en América Latina en el desarrollo de la democracia, que hacía pensar a la izquierda chilena, en los años setenta, que los

³ Ver el reciente libro de Gabriel Salazar: *En el nombre del poder popular Constituyente*. Santiago: LOM, 2011. Y con más detalles en Gabriel Salazar: *Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos XX y XXI)*. Santiago: LOM, 2009.

militares eran un cuerpo “no deliberante” (después del golpe de 1973, muchos aprendieron que la democracia chilena no era tan avanzada y que los militares sí deliberaban, ¡y de qué manera!). Pero hay también razones más cercanas y que se relacionan con la coyuntura actual, me refiero a la forma en que se verificó el retorno a la democracia.

En pocas palabras, la transición chilena, que se inició en los ochenta con un vasto movimiento de protesta social –tal vez, el primer movimiento social antineoliberal de América Latina– fue una “transición enajenada” o expropiada a los movimientos populares chilenos.⁴ Dicho de otro modo, los políticos chilenos se reorganizaron a partir de la protesta social para retornar al Estado, excluyendo al mundo social de los “arreglos” de la transición y sobre todo, de la participación política. En el lenguaje de la Concertación, así lo imponía la necesaria “governabilidad”. Una vez instalados en el Estado, sus críticas al neoliberalismo se moderaron, el sistema binominal mal que mal funcionaba, y algunos declararon, más de una vez, que Pinochet era necesario y una garantía para la transición como Comandante en Jefe del Ejército. Una salida “a la chilena”, un pacto en las alturas, sin pueblo, para retornar y hacer posible el viejo “Estado en forma” y una democracia restringida o, mejor aún, con realismo político; una democracia, “en la medida de lo posible”. En el fondo, en el contexto transicional, se configuró una

⁴ Agradezco al sociólogo Hugo Villela por su noción de “transición enajenada” y nuestras animadas conversaciones en ECO en torno a la nueva coyuntura política creada por los estudiantes.

forma de hacer política distante de la sociedad civil y, en consecuencia, separada de los anhelos y de las expectativas democráticas de quienes más lucharon por terminar con la dictadura y reestablecer la democracia, es decir, los movimientos sociales de los años ochenta: el de los pobladores, los trabajadores y curiosamente, también el movimiento estudiantil que luchó contra Pinochet.

Por cierto que la forma de la transición postergó en el tiempo todas las demandas de cambio que provenían del mundo social y de los debilitados movimientos sociales en los años noventa. Pero en la historia el tiempo cuenta, y sobre todo el “tiempo social”, o dicho de otra manera *el tiempo de los movimientos sociales*, que hoy comienza a re-emergir en la escena pública. En suma, es la transición enajenada lo que está en la base de la débil (o crisis de) legitimidad del sistema político chileno.

El “despertar de la sociedad” es también, desde una perspectiva histórica de más largo plazo, el retorno de lo que un grupo de historiadores hemos denominado la historicidad chilena del siglo XX:

Si bien este movimiento corresponde a un momento nuevo en la política y de la historia social posdictadura, este solo puede comprenderse desde la perspectiva más amplia de la *historicidad del siglo XX en Chile*. En el curso de esta, la equidad educacional junto a las limitaciones legales impuestas al capitalismo anárquico habían alcanzado una maduración estructural en los años '60 y '70, siendo este un proceso abortado con el golpe del '73 en su fase de plena consolidación. El movimiento social estudiantil actual es expresión de la

voluntad y del acto de recuperación de esa hebra rota de nuestra historicidad. Es la irrupción del brote de la semilla que fue pisada y soterrada por la bota dictatorial y el neoliberalismo. Es el renacimiento, en la nueva generación, del sueño y la voluntad de sus padres de fundar una sociedad basada en la democracia, la justicia social y los derechos humanos fundamentales, de los que la educación es uno de sus campos más fértiles” (Manifiesto de Historiadores, agosto del 2011).

Pues bien, para ampliar la mirada, tanto histórica y espacial, será necesario que hagamos un breve recorrido por el desarrollo de los movimientos sociales, tanto en América Latina como en Chile. Sin embargo, necesitamos precisar previamente “¿Qué es un movimiento social?”

Capítulo II

¿Qué es un movimiento social?

Existe una abundante literatura relativa a los movimientos sociales, que comenzó a constituirse en los años sesenta, en Europa y Estados Unidos, cuando emergieron los movimientos estudiantiles y juveniles de mayo del '68, en el viejo continente, y los denominados movimientos por los derechos civiles, en el país del norte. Al no existir una tradición de estudios sobre los movimientos sociales, se carecía de una "unidad lingüística".⁵ Mientras para los historiadores los movimientos sociales eran vistos como motines, revueltas o rebeliones; para los politólogos, se trataba de movimientos de protesta, y para los sociólogos, de diferentes formas de acción colectiva o de conflicto social. Sin embargo, para todos los cientistas sociales, se trataba de un fenómeno social de importancia, que hacía visibles expresiones de malestar en la sociedad, formas de actuación política no institucionalizada, manifestaciones de tensiones subyacentes o, podían representar también, el auténtico "motor de la historia".⁶

Por cierto, en estas diferentes miradas, no ocupaba un lugar central o iba quedando atrás lo que había sido

⁵ Manuel Pérez Ledesma, "Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos sociales, teoría e historia)". *Zona Abierta*, N° 69, 1994, pp. 51-120.

⁶ *Ibid*, p. 52.

prácticamente una idea aceptada desde fines del siglo XIX: que el movimiento social era sinónimo de movimiento obrero. Sin embargo, para América Latina y Chile, no podemos abandonar sin más esta noción, ya que hasta bien entrados los años setenta el movimiento obrero era considerado como el principal movimiento social chileno —los “trabajadores de mi patria”, como los nombraba el presidente Allende— y se les atribuía a ellos, al menos desde la Izquierda, el principal papel en los procesos de cambio que se estaban produciendo en Chile en los años sesenta y setenta. Esta percepción tenía un doble origen: por una parte, hacía justicia con el papel transformador que los trabajadores chilenos habían cumplido desde los inicios del siglo XX, con esas enormes movilizaciones que se verificaron en medio de la huelga portuaria de Valparaíso en 1903 y que culminaron con la huelga salitrera y la masacre de la Escuela de Santa María en Iquique en 1907. Pero, por otra parte, esta asociación de movimiento social con movimiento obrero daba cuenta también del peso de la izquierda política chilena y de su adhesión al marxismo como teoría social. Desde esta última perspectiva, la idea de “movimiento social” tenía una raíz clasista, es decir, se vinculaba a las contradicciones económicas y sociales que estaban en la base del capitalismo. Esta doble perspectiva, la histórica y la teórica, sin embargo, no hacía plena justicia con el desarrollo histórico nacional, ya que paralelamente al movimiento obrero se habían desarrollado otros movimientos sociales de gran efecto político, por ejemplo, los estudiantes en torno a la FECH en los años veinte; o los

campesinos en el contexto de la reforma agraria, pero otros aún más cercanos a los ciudadanos, el movimiento de pobladores que empezó a constituirse con la “toma de La Victoria” en 1957 y que multiplicó sus iniciativas movilizadoras, justamente antes del triunfo de Allende, en 1970. Frente a este desajuste teórico la izquierda tenía sus respuestas: el movimiento estudiantil era un “movimiento auxiliar” de las luchas clasistas, y en el caso de los pobladores, la situación era un poco más compleja, pero se podía señalar que se trataba de un movimiento organizado en torno al consumo —la vivienda— o expresivo de los problemas del trabajador en su territorio, o todavía más, cuando esta proposición no explicaba bien la realidad, ya que muchos pobladores eran desempleados o trabajadores informales, en este caso se podía indicar que se trataba del “ejército industrial de reserva” que el propio Marx había descrito en *El Capital*. Con todo, como se refería a una zona crítica para la teoría y la política, la nueva izquierda de los sesenta, en especial el MIR, optó, durante la Unidad Popular, por hablar y dirigirse en sus comunicados públicos a “la clase obrera” y a “los pobres del campo y la ciudad”. En este punto, si bien el MIR no terminaba de hacer los ajustes teóricos, sí al menos reconocía en el campo político y social a una diversidad de grupos populares en movimiento. Su propio desarrollo, además, en el campo popular, se había iniciado entre los pobres de la ciudad, los pobladores y los pobres en el campo, en especial los mapuche.

A decir verdad, a propósito de la teoría marxista en boga, en los años sesenta, sectores vinculados a la Iglesia

Católica y a la Democracia Cristiana ya habían puesto en discusión el paradigma marxista para explicar la situación de los grupos populares. Se trataba de la denominada “teoría de la marginalidad”, que buscaba comprender la situación de los más pobres. A juicio de Roger Vekemans, sacerdote jesuita de origen belga radicado en Chile, la situación de los pobres sería el resultado de una dicotomía fundamental o de una dualidad, con que nació América Latina, a consecuencia de la superposición de culturas y civilizaciones, y que en su desarrollo generó dos polos: uno supraparticipativo y otro supramarginal. De este modo, los pobres fueron excluidos o marginados del desarrollo y de la toma de decisiones. Para que la sociedad pudiera alcanzar un desarrollo más armónico, y evitar además que los pobres se sumaran a proyectos revolucionarios del tipo guevarista, éstos debían ser “integrados” a la sociedad con el apoyo del Estado.⁷ Las proposiciones teóricas de Vekemans y su equipo tomaron forma en la política del presidente Frei y estuvieron a la base de la “Promoción Popular”, que estimuló la organización de los pobladores y los campesinos en la década del sesenta y, por cierto, disputó el apoyo de estos sectores con la izquierda política.

Como se puede apreciar entonces, si bien hasta los años setenta predominaba el paradigma marxista y obrero para explicar la idea de un movimiento social, éste paradigma ya venía sufriendo críticas e interpelaciones. De cierta manera, sin embargo, la izquierda no solo chilena,

⁷ Ver más detalles en Mario Garcés: *Tomando sus sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. Santiago: LOM, 2002, pp. 252 y ss.

sino latinoamericana, lograba resolver estos problemas teóricos con otra noción más inclusiva, que se populariza en los años 80, en la expresión o la categoría de “Movimiento Popular”, como la suma o la confluencia de diversos movimientos de origen popular y que comparían un ideario de transformación socialista de las sociedades latinoamericanas.

Resulta del todo evidente que para América Latina es muy difícil imaginar movimientos sociales de base popular que no tengan una connotación clasista, habida cuenta de la historia de desigualdades, explotación económica y dominación política de unos pocos privilegiados por sobre las mayorías pobres. La izquierda –en sus diversas versiones– y el marxismo, con sus diversas corrientes, no surgieron y se desarrollaron en nuestro continente por caprichos o modas intelectuales, ni por los efectos de la Guerra Fría y el influjo del “comunismo soviético” (como les gustaba señalar a los militares, que iban a formarse en la Doctrina de la Seguridad Nacional en la Escuela de las Américas, para luego dar golpes de Estado y reprimir y hacer desaparecer a militantes sociales y políticos). No, la izquierda y el marxismo hunden sus raíces en la historia social y política de América Latina, en sus contradicciones, en sus luchas y en los afanes de justicia social de diversas generaciones de latinoamericanos, lo que no quiere decir que la izquierda y el marxismo no hayan encontrado importantes límites y contradicciones en su desarrollo en el continente.⁸

⁸ Para una mirada crítica del marxismo en América Latina, ver Michael Lowy: *El marxismo en América Latina*. Santiago: LOM, 2007 y José

Por otra parte, hay que admitir también que en la historia social, la izquierda, por decirlo de algún modo, clásica—socialista o comunista— no ha sido la única izquierda, sino que a partir de los años treinta, cuando se hicieron sentir los efectos de la crisis mundial y se desarticuló el viejo sistema exportador oligárquico, y el Estado tomó roles más activos en la economía y frente a los problemas sociales, emergieron grupos que disputaron a la izquierda histórica su influencia sobre las clases populares. Así, en los años treinta surgió el APRA, de gran influencia en la historia política peruana—su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, era peruano—, pero se trató de un movimiento político de alcances latinoamericanos; y más tarde, en los años cuarenta, el peronismo en Argentina; el varguismo en Brasil y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México. Todos estos movimientos y partidos, denominados “populistas”, tuvieron gran influencia en las clases populares, distanciándose del marxismo en muchos casos, pero en otros, siendo influidos por éste.

Reconocidos los méritos de la izquierda y del populismo, así como el prestigio del marxismo en América Latina, es también evidente que la teoría social, en diálogo o tomando distancia del marxismo, ha evolucionado en distintas direcciones, pero en particular, a propósito de los movimientos sociales. Una diversidad de autores, tanto norteamericanos como europeos, ha sugerido definiciones y modos de comprender a los movimientos sociales.

Aricó: *Marx y América Latina*. Argentina: FCE, 2010 (primera edición, Lima: CEDEP, 1980).

En la tradición norteamericana, más pragmática en cierto sentido, interrogándose sobre el “cómo” de la “acción colectiva”; mientras que la tradición europea se ha ocupado más del “por qué” de los movimientos sociales.⁹

Una primera tradición teórica, que mantuvo vigencia por mucho tiempo y de la que se debieron desembarazar tanto europeos como norteamericanos, fue la que postulaba que los movimientos sociales eran el resultado de “creencias colectivas”. Esta acepción conservadora en Europa asociaba los movimientos a las rebeliones y motines que acompañaron a la Revolución Francesa y veía en “la turba”—concepto que no desaparece hasta hoy— al actor fundamental. Esta era descrita como la acción no racional de la masa, compuesta de criminales, vagabundos y el desecho de la sociedad. El historiador George Rudé, en un brillante estudio—*La Multitud en la historia* (1971)—se encargó de desacreditar estas visiones, demostrando que en esos motines y rebeliones estaba implicada la gente común que tenía sobrados motivos “racionales” para actuar. A pesar de que el enfoque psicologizante mantuvo vigencia, comenzó a ser modificado o enriquecido por diversos sociólogos. No se trataba solo de “creencias compartidas o generalizadas”, sino que había que reconocer “determinantes sociales” para las protestas, tales como tensiones estructurales, factores precipitantes, grupos coordinados, etc. (Smelser, 1963). Diversas proposiciones teóricas en Estados Unidos buscaron explicar, desde los años sesenta, la acción colectiva; por ejemplo la teoría de

⁹ Manuel Pérez Ledesma. Op. cit. Passim.

la "privación relativa" (la disparidad que se produce entre las expectativas y las realidades); la teoría de la movilización de los grupos de intereses económicos (los sindicatos, por ejemplo) y del *free rider* (el que se aprovecha del esfuerzo de los demás); la teoría de la elección racional y la movilización de recursos (los sujetos actúan por motivos racionales en contextos de tensiones estructurales), pero además requieren movilizar sus propios recursos; entre ellos, el más importante, la capacidad para organizarse (McCarthy y Zald, 1977).

Junto a esta teorizaciones, provenientes de la sociología, Charles Tilly modificó las miradas al poner el acento en la cuestión del enfrentamiento (*contention*) e introducir la variable temporal. Este autor, que se movió entre la historia y la sociología, definió a los movimientos como la "acción colectiva" que reúne a la gente "para actuar a favor de sus quejas, esperanzas e intereses compartidos". En este tipo de acciones "la gente no solo se reúne para actuar a favor de sus intereses, sino que además lo hace en forma que afecta de una manera directa, visible y significativa a la realización por otros individuos de sus propios intereses".¹⁰ Es decir, se trata de una acción colectiva que confronta a unos oponentes para que estos realicen los intereses del grupo en movimiento. Pero además Tilly sugirió otras categorías de análisis tanto más interesantes, entre ellas, la idea de que los movimientos se desenvuelven en "series continuadas de interacción" con las autoridades y sus oponentes (más tarde Sydney Tarrow, propone la idea

¹⁰ Citado por Pérez Ledesma. Op. cit., p. 64.

de "ciclos de movilización"), y que para actuar recurren a sus propios "repertorios de acción colectiva" (podríamos traducir al lenguaje nuestro, como formas de lucha). Estos repertorios están condicionados histórica y culturalmente, es decir, los movimientos recurren a formas conocidas de acción, pero también pueden introducir innovaciones: "el pueblo tiende a actuar dentro de límites conocidos, a innovar en los márgenes de las formas existentes" y agrega también, "a perder muchas oportunidades que disponía en un principio".¹¹

Sydney Tarrow, a fines de los noventa, ha difundido y reelaborado las sugerentes proposiciones de Tilly, poniendo el acento no solo en la confrontación y los repertorios, sino que también en la noción de "oportunidades políticas". Es decir, los movimientos tienden a actuar en contextos políticos que les pueden resultar más o menos favorables. Las oportunidades políticas, en sentido estricto, se vuelven favorables cuando el contexto puede llegar a actuar como un aliado; por ejemplo, porque los oponentes se hallan divididos. Para Tarrow, los movimientos son desafíos colectivos en que se pone en juego el poder de quienes se movilizan:

El poder de los movimientos se pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales. Crear, coordinar y mantener esa interacción es la contribución específica de los movimientos sociales, que surgen cuando se dan las oportunidades políticas para la intervención de

¹¹ Ibid., p. 66.

agentes sociales que normalmente carecen de ellas. Estos movimientos atraen a la gente a la acción colectiva por medio de repertorios conocidos de enfrentamiento e introducen innovaciones en torno a sus márgenes. En su base se encuentran las redes sociales y los símbolos culturales a través de los cuales reestructuran las relaciones sociales. Cuanto más densas sean las primeras y más familiares los segundos, tanto más probable será que los movimientos se generalicen y perduren.¹²

Hemos seguido hasta aquí la tradición teórica norteamericana, conocida también como la "teoría de la acción colectiva". Consideremos ahora a algunos autores europeos que han realizado, por cierto, sus propias contribuciones al debate sobre los movimientos sociales. Entre los sociólogos europeos más conocidos en América Latina y de gran influencia en Chile se encuentra, en primer lugar, Alain Touraine, seguido tal vez por el italiano Alberto Melucci, cuyos trabajos comenzaron a difundirse en los años noventa.

Para Alain Touraine, las definiciones que asociaron los movimientos sociales a las "creencias colectivas" no resultaban de mucha utilidad, ya que podían corresponder a acciones de muy diversa naturaleza —un ataque de pánico colectivo, por ejemplo—. Para este sociólogo, los movimientos se vinculan a las clases sociales en tanto que actor social. De esta manera, los movimientos son acciones colectivas que oponen a actores sociales entre sí, "1) por el

control de los recursos más importantes de una sociedad, o 2) por el control del proceso histórico de transformación de esta sociedad. En ambos casos, un movimiento social es un conflicto entre grupos sociales, pero que va más allá de una lucha de intereses y pone en tela de juicio un sistema de poder. Lo que también supone una referencia positiva a las orientaciones culturales de una sociedad".¹³

Desde la perspectiva de Touraine, América Latina no es una tierra prolífica en movimientos sociales, ya que los movimientos del primer tipo, que llama "estructurales", son muy débiles y los movimientos del segundo tipo, que denomina "históricos", a pesar de ser muy importantes, son muy poco autónomos. Tanto la dependencia de las sociedades latinoamericanas, que impide que se constituyan clases autónomas, como el papel del Estado en la fase desarrollista (1930-1970), han completado contra el desarrollo de movimientos sociales en sentido estricto. Con todo, en sus elaboraciones más tempranas, de los años sesenta, Touraine propuso que los movimientos sociales tendían a articularse en torno a tres principios: el de la identidad (las propias elaboraciones que un grupo social hace de sí mismo); la oposición (es decir, la definición de sus oponentes), y el principio de totalidad (el proyecto global de transformación que articula a un grupo social en movimiento).

¹² Sydney Tarrow. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza, 1997, pp. 17 y 18.

¹³ Alain Touraine. "De la mañana de los regímenes nacional populares a la víspera de los movimientos sociales". XX Congreso Internacional de LASA, 1997.

Melucci, en sus primeras elaboraciones propuso definir a los movimientos como "el comportamiento conflictivo que no acepta los roles sociales impuestos por las normas institucionalizadas, anula las reglas del sistema político y/o ataca la estructura de las relaciones de clase en una sociedad dada". A pesar de que como indica Pérez Ledesma, "Melucci fue eliminando las referencias a las clases, los movimientos aparecen definidos por tres dimensiones. Se trataría de una acción colectiva a) basada en la solidaridad; b) que conduce a un conflicto; c) que rompe los límites del sistema".¹⁴ En elaboraciones posteriores, Melucci hizo avances muy significativos con relación a los movimientos en un doble sentido; por una parte, el movimiento no es una cosa dada, sino un proceso de construcción colectiva en que los actores negocian y re-negocian continuamente aspectos de su acción, y por otra parte, en ese proceso se crean nuevos códigos culturales y nuevas alternativas simbólicas que definen la *identidad* del movimiento. Esta es, por cierto, una contribución relevante de Melucci, en el sentido que vincula el proceso práctico del movimiento con la elaboración de su propia identidad. En este sentido, los movimientos suponen "creencias colectivas" pero no en la versión tradicional conservadora, sino que saberes sobre los fines, los medios y el terreno en que se desarrolla la acción; redes de relaciones sociales ("una activación de las relaciones entre los actores, que interactúan, se comunican, influyen unos sobre otros, negocian y toman decisiones"); pero también

¹⁴ Citado por Pérez Ledesma. Op. cit., p. 62.

una tercera dimensión, que permite romper con la lógica del puro cálculo, y ésta es "la realización de inversiones emocionales" que permite a los individuos reconocerse como miembros de una colectividad¹⁵ (lo que en nuestro medio llamaríamos el "compromiso" que los sujetos toman con el movimiento).

En un trabajo reciente, tres sociólogos norteamericanos nos han propuesto, como ellos han denominado, una "síntesis emergente" o un "estado de situación" en relación a la cuestión teórica de los movimientos sociales, enfatizando en tres grupos de factores: "1) La estructura de oportunidades políticas y las constricciones que tienen que afrontar los movimientos sociales. 2) Las formas de organización (tanto formales como informales) a disposición de los contestatarios. 3) Los procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción".¹⁶

En relación al primer problema, se tiende a destacar la importancia que representa el sistema político a la hora de hablar de *oportunidades políticas*. Estas últimas pueden estar relacionadas con aspectos o rasgos de una determinada coyuntura política, pero también con procesos políticos. En suma, se trata de poner la atención en la interacción entre los movimientos sociales y la política institucionalizada, lo que puede estar referido a las características de la estructura institucional, su mayor o menor porosidad

¹⁵ Citado por Pérez Ledesma. Op.cit. p. 101.

¹⁶ Dough McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (Editores). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. España: Istmo, 1999.

con relación a las demandas sociales, el tipo de relaciones de poder formales e informales, los usos de la represión, etc. En el caso chileno, como veremos más adelante, estas relaciones han estado marcadas en muchas etapas por la represión —de ahí el triste récord de masacres y matanzas en la fase oligárquica (Valparaíso, 1903; Santiago, 1905; Antofagasta, 1906; Iquique, 1907), pero también en la fase de democratización relativa del Estado (San Gregorio, 1921; La Coruña, 1925; Santiago, 1946 y 1957; Puerto Montt, 1969)—. En la etapa de la dictadura, por cierto, esa es la forma oficial de relación del Estado con los movimientos sociales, lo que explica el elevado número de víctimas, sobre todo jóvenes y mujeres, en medio de las protestas nacionales entre 1983 y 1986. Sin embargo, sería un error pensar que todo ha sido represión, ya que sobre todo en la etapa de democratización del Estado, aproximadamente entre 1932 y 1973, las relaciones capital-trabajo estuvieron reguladas por el Código del Trabajo, lo que parcialmente al menos facilitó la negociación de intereses, y lo que en el movimiento obrero se denominaba, hasta antes del golpe, las “conquistas sociales”. O en el caso del movimiento de los pobladores, la creación del Ministerio de la Vivienda, en 1965, creó una institucionalidad que interactúa con los “sin casa” y genera espacios de negociación. También es visible que la etapa de mayor movilización social en Chile fueron los años de la Unidad Popular, etapa en que la represión fue inhibida por el gobierno de Salvador Allende. Todavía, en este terreno de las relaciones entre los movimientos sociales y la institucionalidad política,

los partidos políticos jugaron roles muy activos, razón por la cual para cierto sentido común de izquierda, estos son vistos como los verdaderos organizadores y conductores, restando importancia o consistencia a la propia acción de los sujetos populares movilizados.

En relación a *las formas de organización*, diversos autores ponen el acento en el reconocimiento de las organizaciones formales e informales, en las redes sociales preexistentes, etc.

Dos corrientes son importantes en el campo de la investigación: las propuestas de McCarthy y Zald, relativas a la “movilización de recursos” que enfatiza en valorar los procesos de movilización y las manifestaciones organizativas formales de estos procesos. Para estos autores, “aunque los movimientos sociales no deban cristalizar, necesariamente, en una organización formal, extraen su fuerza, como motor del cambio social, precisamente de la organizaciones que generan”.¹⁷ Una segunda corriente enfatiza en las dinámicas organizacionales de la acción colectiva y los procesos políticos. Tilly, por ejemplo, llamó la atención sobre los entornos básicos, como la vecindad y el lugar de trabajo; Morris y McAdam, sobre las escuelas y las iglesias al estudiar los movimientos de los negros; Evans, sobre los lazos informales y de amistad que llegaron a conformar redes de mujeres, en los orígenes del movimiento feminista. En el caso chileno, como veremos con más detalle en las páginas siguientes, existen *potencias tradicionales organizativas* en la mayoría de los grupos

¹⁷ Ibid., p. 24.

sociales populares, de tal modo que varias décadas antes que se promulgaran las leyes laborales —el conjunto más sistemático se promulgó en 1924— los trabajadores chilenos habían organizado mutuales, centros de estudio, cooperativas, sociedades de resistencia, mancomunales, gremios, federaciones, etc. Algo semejante ocurrió con el movimiento de pobladores, que mucho antes que el Estado promulgara la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, en 1968, estos sabían organizarse en Ligas, Juntas de Adelanto, Comités de Sin Casa, agrupaciones comunales, etc. Incluso más, estas organizaciones fueron mucho más activas y protagonizaron las mayores movilizaciones sociales de pobladores, en la etapa de las “tomas de sitios”, entre 1957 y 1973. De este modo, ajustando la mirada a la historia concreta de los movimientos sociales en Chile, habrá que discutir sobre el tipo de relación que las organizaciones populares han establecido con los partidos políticos, reconociendo el valor y el protagonismo de los propios grupos sociales en movimiento.

Finalmente, en relación a los *procesos colectivos de interpretación*, se reconoce que si bien las oportunidades políticas y las estructuras de movilización dotan a los movimientos de un cierto potencial para la acción, resultan insuficientes para explicar la acción colectiva. Se requiere un elemento mediador “entre oportunidad, organización y acción, a saber, los significados comparados y conceptos por medio de los cuales la gente tiene

a definir su situación. Resulta imprescindible que las personas, como mínimo, se sientan agraviadas por una situación determinada y crean que la acción colectiva puede contribuir a solucionar esta situación”.¹⁸ En esta línea se enmarcan las corrientes y estudios que han puesto la atención en el tema de la “identidad”, como lo han hecho Touraine y especialmente Melucci, que, como vimos antes, ha insistido en la vinculación que existe entre la propia práctica de los movimientos y la gestación de una identidad compartida. Sin dudas en estas proposiciones cobran importancia los asuntos relativos a la cultura y el lenguaje, o como ha indicado Snow, “los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva”.¹⁹ En términos generales, estos estudios relativos a la identidad son más recientes, pero absolutamente necesarios. Manuel Castells, por ejemplo, ha sugerido que en medio de los actuales procesos de globalización, las identidades tienden a constituirse como *identidades legitimadoras*, cuando son introducidas por las instituciones dominantes; *identidades de resistencia*, por aquellos sectores que se encuentran en posiciones devaluadas o estigmatizadas y que generan trincheras desde las cuales se oponen a las instituciones; e *identidades proyecto*, cuando los actores sociales, recurriendo a su propia cultura, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y

¹⁸ Ibid., p. 26.

¹⁹ Ibid., p. 27.

al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social.²⁰

Para el caso chileno, indagar en esta dirección es más que necesario, ya que por mucho tiempo los estudios tendieron a centrarse en las movilizaciones, los liderazgos y los partidos políticos. En tiempos de la Unidad Popular, algunos de los trabajos publicados por Quimantú, en la Colección Nosotros los Chilenos, comenzaron a abrir un surco en temas relativos a la identidad cultural de las clases populares en Chile, pero probablemente, antes que la historia y la sociología, han sido la literatura social y el teatro chileno quienes más se han ocupado de estos asuntos. Con todo, en tiempos más recientes, la Nueva Historia Social Chilena ha comenzado a ocuparse de los temas de la identidad; en particular a partir del pionero trabajo de Gabriel Salazar, *Labradores, peones y proletarios* (1985), se han sucedido otros estudios de historiadores como María Angélica Illanes, Julio Pinto, Sergio Grez, Maximiliano Salinas, y el autor de estas líneas, que se han ocupado si no sistemáticamente, al menos parcialmente de estudiar los procesos de construcción de identidad asociada a los movimientos sociales.

¿Qué es entonces un movimiento social, de acuerdo con estas tradiciones teóricas?

Si se tiene en cuenta el largo camino que hemos hecho, podríamos proponer tentativamente que los movimientos

sociales son diversas formas de acción colectiva, que surgen de la sociedad civil —el verdadero hogar de la historia, como la definió Carlos Marx— y que dan cuenta tanto de contradicciones fundamentales de una sociedad, normalmente de las oposiciones de clase, pero más ampliamente de una diversidad de tensiones estructurales, relativas a la desigualdad, la discriminación sociocultural, el consumo, las relaciones de género, al medio ambiente, etc., y que dan lugar a diferentes iniciativas y proyectos de cambio social con un sentido emancipatorio.

La constitución de un movimiento social supone necesariamente el desarrollo de alguna forma de organización y redes de organizaciones sociales, así como de recursos culturales e identitarios que se irán modificando según se desenvuelve la propia acción colectiva. Movilizar recursos propios, en el sentido de la organización y de los repertorios de acción para confrontar a sus oponentes, en contextos más o menos favorables, son los derroteros más frecuentes de los movimientos sociales. En su mayor desarrollo, los movimientos sociales pueden encarnar proyectos de cambio social que afecten parcial o globalmente el sistema de dominación.

Pero, estas proposiciones, de carácter general, pueden resultar completamente abstractas si no se las pone en terreno firme, que no es otro que el de la experiencia histórica concreta de los grupos sociales en movimiento. En este sentido, son del todo relevantes las formas que ha tomado el conflicto social y político en la historia de América Latina y Chile. Se trataría de reconocer, por una

²⁰ Manuel Castells, *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad* (Volumen 2). Madrid: Alianza, 1998, p. 30.

parte, las formas de relación que se han establecido entre los Estados y los grupos y clases populares, la mayor parte de las veces con fuertes componentes represivos como producto de una defectuosa construcción del Estado, en el sentido de la democracia y de la integración social, o de formas de integración parcial y segmentada, que incluye a algunos y excluye a otros. Por otra parte, se trataría también de reconocer y valorar las diversas iniciativas de asociación y movilización de los grupos sociales populares, de las capacidades y recursos que se pusieron en movimiento, de las memorias de esas luchas y de las identidades que en esos procesos emergieron o se recrearon. Si se tienen en cuenta ambas perspectivas, lo que resulta crecientemente una certidumbre para quienes investigan y piensan la historia social de América Latina, es que una de las principales "formas de hacer política" de nuestros pueblos es a través de la constitución de movimientos sociales. En este último sentido, en contra de un sentido común dominante, nuestra historia política no es solo, ni mucho menos, la historia de los Estados, sino que la historia de las resistencias y las alternativas de cambio que emergen una y otra vez desde la sociedad civil.

En los capítulos siguientes veremos, *grosso modo*, el desarrollo de algunos movimientos recientes en la historia de América Latina y una mirada más histórica a los movimientos sociales en el siglo XX chileno.

Capítulo III

Los nuevos movimientos sociales en América Latina²¹

La cuestión de los "movimientos" ha tenido diversas acepciones. En los años sesenta, la más aceptada era la del "movimiento obrero" y la del "movimiento campesino" (en la tradición de la izquierda era justamente la alianza obrero-campesina el eje fundamental de la revolución o más ampliamente, de los procesos de liberación). Otras acepciones de los movimientos, por razones prácticas, se referían a los movimientos estudiantiles, habitualmente muy activos en la mayoría de los países latinoamericanos, y a los "movimientos políticos revolucionarios". De hecho, gran parte de los procesos de renovación política de la izquierda, que sigue a la Revolución Cubana, tomó el nombre de movimiento (movimiento de liberación nacional, de izquierda revolucionaria, etc.).

Otra novedad de los años sesenta fue la emergencia de nuevos "movimientos", asociados a los procesos de *aggiornamiento* que vivía la Iglesia Católica, en el contexto del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín. En este caso, se trataba de "movimientos" al interior de la Iglesia que radicalizaban posturas en las

²¹ En este capítulo sigo un artículo de mi autoría, "Movimientos Sociales y Educación Popular", publicado por la Revista *La Piragua*, del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAAL, N° 32, Panamá, 2010, pp. 55-68.

distintas vertientes de la Acción Católica (Juventud de Estudiantes Católicos, JEC; Asociación de Universitarios Católicos, AUC; Acción Católica Rural, ACR; Juventud Obrera Católica, JOC, etc.), entre sacerdotes y religiosas, y que con el tiempo darían lugar a vigorosos y extendidos movimientos de "cristianismo popular". La Educación Popular, en los años sesenta, también nació asociada a este conjunto de "movimientos" y en la medida que ganó en desarrollo, más de una vez fue también conceptualizada como "movimiento de educadores populares". Tal vez, con más precisión, se podría sostener que la Educación Popular nació como "la dimensión educativa" de los movimientos sociales que emergieron en los años sesenta.

En una acepción amplia de "movimiento" se podría sostener que la noción más extendida de ellos, en los años sesenta, es la que se asociaba a los más diversos procesos de cambio y transformación social, que eran conceptualizados como procesos o movimientos liberadores.

En este proceso fundante de los años sesenta, de nuevas fuerzas y procesos sociales y políticos con un sentido emancipador, tendieron a converger dos tradiciones teóricas y políticas: las de la izquierda, con vertientes anarquistas, marxistas, populistas y de liberación nacional; y las del cristianismo, que reunía también diversas vertientes, en particular el social cristianismo y luego la teología de la liberación. Simplificando mucho, en la izquierda convivían tradiciones de carácter "nacional popular", con un componente antimperialista y otro popular, que podía tener un origen campesino, indigenista o relativo a la clase

obrera en un sentido amplio (muchas veces, simplemente, clase trabajadora), y también tradiciones marxistas, que encarnaban especialmente los partidos comunistas y trotskistas. En estos últimos, la lucha de clases y el papel de la clase obrera eran fundamentales, aunque divergían en las estrategias que harían posible el cambio social.

Todas las vertientes de la izquierda sufrieron un giro crítico y fundamental luego del triunfo de la Revolución Cubana, por dos o tres razones principales; entre ellas, la más relevante de todas fue la afirmación de que la revolución era posible de realizar en América Latina (la Revolución Cubana impactó, guardando las diferencias, como en su tiempo impactó la revolución bolchevique en Europa); en segundo lugar, se instaló fuertemente la cuestión del camino de la revolución, que debía incorporar, inevitable y necesariamente, la "lucha armada" (era necesario crear uno, dos o tres Vietnam para derrotar al imperialismo); en tercer lugar, con matices, la cuestión de los medios interrogó las estrategias, afirmándose la idea de la revolución por sobre la idea de la reforma; en cuarto lugar, finalmente, impactó también como una poderosa apelación a la voluntad de los militantes para producir el cambio social y político ("el deber de todo revolucionario es hacer la revolución").

En el caso de los cristianos, que fue una verdadera "cantera" de militantes y de educadores populares, impartaba por cierto la Revolución Cubana, el ejemplo del Che Guevara y del padre Camilo Torres (¡qué más cerca del cristianismo que el que da la vida por sus hermanos!), pero

de modo tanto más significativo impactó también el propio cambio de enfoques teológicos en las iglesias cristianas. En la Iglesia Católica, en que convivían las teologías de la "cristiandad" (construir un mundo cristiano con la Iglesia al centro) con el "socialcristianismo" (la idea de reconocer un papel activo y propio de los cristianos en el mundo político, mediante reformas y un renovado humanismo), diversos grupos de cristianos comenzaron a transitar hacia un nuevo enfoque teológico, el de la Teología de la Liberación, donde el énfasis estaría puesto en la identificación de la historia de Dios con la historia de los hombres como una sola historia "de liberación".

Evidentemente, como se sabe, el acercamiento entre marxistas y cristianos se hizo no solo necesario, sino inevitable, con más voluntad probablemente de los cristianos que se sentían impelidos a ir al encuentro del pueblo (es el caso de muchos militantes cristianos argentinos que emigraron hacia el peronismo —el pueblo argentino era peronista—, o de cristianos chilenos que emigraron hacia la izquierda, habida cuenta del influjo de la izquierda chilena en su pueblo). Pero este acercamiento al pueblo por parte de los cristianos y de los primeros educadores populares conllevaba sus propios aportes teóricos, que tomarían tiempo en desarrollarse, y que tenían que ver básica y especialmente con la consideración del *pueblo pobre* como sujeto de la historia (más tarde los educadores conceptualizarían esta idea como "protagonismo popular"). De este modo, a la noción de "clase" del marxismo tradicional, los cristianos (y los educadores) agregaron la

noción de "pobres". Un aporte, sin dudas, muy latinoamericano, en un continente en que la mayoría son pobres y no necesariamente "clase obrera".²²

Nuevas prácticas, nuevos actores

El paradigma de la revolución, animado por la Revolución Cubana, produjo un doble *aggiornamento*, el de la izquierda y el de los cristianos, pero más allá de los cambios en estas tradiciones políticas y doctrinales, la historia, es decir la propia experiencia de las clases populares, abrió otros surcos e hizo emerger en la superficie otros procesos y otros sujetos o actores sociales y políticos de raigambre popular, que comenzarían paulatinamente a denominarse "movimientos sociales".

Se trata de un proceso complejo, ya que si bien se pueden establecer algunos rasgos o denominadores en común para América Latina, la realidad de los diversos países hace visibles diferencias en los tiempos y en los sujetos. Consideremos tres situaciones diferentes: a) En Brasil, en los años 70, la revolución no se dibujaba como un horizonte de corto plazo; sin embargo, en el seno de la sociedad brasileña estaban configurándose nuevos sujetos colectivos, que serían fundamentales en los años 80: un nuevo sindicalismo en el ABC paulista²³ y un cristianismo popular que hacía renacer los sentidos y sentimientos comunitarios en

²² Michael Löwy. *Guerra de dioses. Religión y política en América Latina*. México: Siglo XXI, p. 98.

²³ Los brasileños se refieren de este modo a las comunas de santo Andrés, san Bernabé y san Caetano, donde se instaló la industria automovilística en la ciudad de São Paulo.

amplios sectores de la sociedad brasileña; b) a principios de los mismos años 70, en Chile, una revolución peculiar –con contenidos democráticos y socialistas– se debatía entre la reforma y la revolución, y debía ser capaz de contener y entender a un pueblo bastante diverso de obreros, campesinos, pobladores, estudiantes, cristianos, laicos y marxistas (el presidente Allende era masón y socialista). Enredada sobre sí misma, la revolución y todos sus actores, colapsarían frente a enemigos muy poderosos en 1973; c) también en los setenta, pero ahora a fines de la década, en julio de 1979, triunfaba una “revolución popular” que congregaba a una diversidad de grupos y actores sociales que le daban justamente ese carácter, popular. Era la revolución sandinista.

En todos estos casos, con revolución derrotada (Chile, Argentina, Uruguay) o revolución triunfante (Nicaragua) o sin revolución *ad portas* (Brasil) emergían nuevos actores sociales: un nuevo sindicalismo autónomo en Brasil, el cristianismo popular que recorrería todo el continente en los años 80 (ya no solo Brasil); los pobres de la ciudad y del campo, como se les denominó en Chile (en realidad, el movimiento social de los pobladores o los sin casa y el de los mapuches en el sur del país); los campesinos, pero sobre todo, los jóvenes de la ciudad y el campo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Esta diversidad de grupos, actores o movimientos trascendieron el paradigma de la revolución y comenzaron a dominar la escena en los años ochenta, ya no solo vinculados a las luchas reivindicativas más históricas (tierras,

salarios, viviendas, salud, educación), sino que a nuevas temáticas y situaciones críticas para nuestra convivencia: Las Madres de la Plaza de Mayo y las diversas agrupaciones de víctimas del terrorismo de Estado; los movimientos de economía popular (social, solidaria) en Argentina, Perú, Chile; los movimientos socio-territoriales (como los sin tierra, en Brasil); los movimientos de mujeres que introducían temáticas transversales a la sociedad interrogando y buscando modificar las tradicionales relaciones de género; los diversos movimientos urbanos, presentes en casi todas las grandes ciudades latinoamericanas; los movimientos juveniles, que tomaron forma en el rock argentino o en el movimiento de “protestas” en contra de la dictadura de Pinochet; y hacia fines de los ochenta, los diversos movimientos campesinos y étnicos, que actualizaron las luchas del más antiguo de los movimientos sociales de América Latina, el de nuestros pueblos originarios.

En un estudio promovido por CLACSO, a mediados de los años ochenta, esta nueva realidad “movimientista” ya era ampliamente reconocida por las ciencias sociales latinoamericanas. Se indicaba entonces:

Se vive en la región un momento de inflexión. Por una parte, de potencialidades de renovación y transformación de los movimientos sociales seculares, como el movimiento campesino y movimiento obrero, o los movimientos nacionalistas (en sus diferentes orientaciones industrialistas y modernistas); por la otra, la emergencia de nuevos movimientos sociales, múltiples y diversos en sus orientaciones y en sus identidades, que se constituyen en verdaderos espacios de

reacción y de resistencia a los impactos de la crisis y que en sus diversos gritos y deseos son portadores de nuevos horizontes colectivos".²⁴

Este "momento de inflexión" dio lugar a una serie de debates acerca del significado de los nuevos movimientos, debates que en algunos casos se buscaban asimilar al de los países del norte, pero que no siempre coincidían. Tal vez en el Cono Sur el debate sugería otras pistas; los cientistas sociales se interrogaban sobre si los movimientos representaban "nuevas formas" de hacer política, habida cuenta de la situación de emergencia que se vivía en medio de las dictaduras, o si definitivamente los movimientos representaban cambios en las propias relaciones sociales fundamentales y, en consecuencia, lo que se estaba "transformando o engendrado es una nueva sociedad, más que una política nueva".²⁵ Esta nueva mirada se interrogaba, entre otros asuntos, acerca del enfoque "politicista" con que las ciencias sociales observaban y evaluaban a los movimientos sociales, perspectiva desde la cual los movimientos bien podían ser conceptualizados como acciones pre-políticas o con un uso abusivo de Eric Hobsbawm, simplemente como "rebeldías primitivas". Pero en realidad fue Tilman Evers quien radicalizó la postura, al indicar que "el potencial transformador de los nuevos

²⁴ Fernando Calderón (compilador). *Los movimientos sociales ante la crisis*. Buenos Aires: Ediciones UNU, CLACSO, IISUNAM, 1986, p. 11.

²⁵ Fernando Calderón y Elizabeth Jelin. "Clases sociales y movimientos sociales en América Latina". *Proposiciones*, 14, Ediciones SUR, 1987, pp. 173-189.

movimientos sociales no es político, sino sociocultural".²⁶ Una proposición por cierto discutible en dos sentidos, primero, el que justamente la formas de "hacer política" de los sectores populares tienen un origen y una impronta sociocultural o, dicho de otro modo, una "política popular" no puede sino arrancar de su propia experiencia social. En consecuencia, no se puede separar lo sociocultural de lo político. Sin embargo, en segundo lugar, hay que decir en favor de Evers, que sacaba la discusión del ámbito de las luchas por influir o construir Estado y las ponía en el ámbito de la "construcción de sociedad".

Este giro de lo político estatal a lo sociocultural —que en realidad, como veremos más adelante, da cuenta de un giro epistemológico mayor en las ciencias sociales— estaba haciendo visible el tránsito de la visión más tradicional de los movimientos sociales, afincada en la clase social, a una nueva visión que necesita poner el acento y hacer comprensible la experiencia de los propios sujetos en movimiento. Dicho de otro modo, admitir que los conflictos y contradicciones en la sociedad trascienden los conflictos y las contradicciones en el ámbito de la producción, y que sin negar este campo, es también fundamental atender a otros más transversales, como el género, la cultura, los derechos humanos, la ciudadanía, la soberanía política, así como también la soberanía alimentaria.

Algunos de estos rasgos fueron adquiriendo mayor visibilidad entre los analistas sociales. Criticando los

²⁶ Tilman Evers. "Identidad: El lado oculto de los movimientos sociales". *Novos Estudos CEBRAP*, Vol. 2, N° 4, Brasil, 1984, p. 12.

enfoques tradicionales, que concebían a los movimientos “como acciones predeterminadas por el orden económico o estatal, o por la acción partidaria”, se fue reconociendo que “en América Latina no existen clases puras, plenamente constituidas; que los sujetos sociales están adscritos a múltiples posiciones que corresponden a diferentes capas sociales que se jerarquizan y ordenan según los conflictos y luchas sociales, culturales y étnicas vividas”.²⁷ Y avanzando en esta dirección, se reconocía también que las dinámicas de los nuevos movimientos sociales tenían un conjunto diverso de campos de desarrollo: (a) una estructura participativa, que resultaba de su propia experiencia de organización y lucha; (b) su propia temporalidad, definida por sus acciones frente al sistema de relaciones históricas; (c) un desarrollo en forma multilateral y heterogénea en el espacio, con desarrollo desigual de la conciencia, la organización y la economía; (d) efectos sociales específicos sobre las relaciones sociales y la sociedad.²⁸

En suma, en los años ochenta se estaba produciendo una importante transformación en la realidad movimientista de América Latina, que obligaba a los cientistas sociales a modificar sus enfoques y miradas. Por su parte, los nuevos movimientos sociales exigían también ser reconocidos como tales y en la especificidad de sus demandas por el conjunto de la sociedad. Se podría sostener que este es un tiempo no solo de inflexión, sino que de cambio en las actorías y los movimientos sociales. En el caso del Cono Sur

²⁷ Calderón. Op. cit., p. 329.

²⁸ Calderón. Op. cit., p. 333.

de América Latina, la situación era del todo llamativa, ya que muchos de los nuevos movimientos emergieron paradójicamente en medio de las peores dictaduras que han asolado a nuestro continente. En esto consiste, sin embargo, la dialéctica de la historia, las dictaduras que creyeron haber derrotado a los históricos movimientos sociales —y que, en algunos casos, efectivamente lo hicieron— generaron las condiciones para que surgieron “nuevos” movimientos sociales. Algo semejante ha ocurrido con las resistencias que desde las sociedades latinoamericanas se han generado en contra de las corrientes y las políticas neoliberales, que se extendieron e impusieron en la mayoría de nuestros países del continente, en la década de los noventa.

Los nuevos movimientos sociales latinoamericanos

Entre los nuevos movimientos, uno de los que han alcanzado gran impacto y popularidad en el continente ha sido el Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil, pero también, en los años noventa, el movimiento de “piqueteros” argentinos, y al cambiar el siglo, los movimientos indígenas y campesinos en Bolivia. Cada uno de ellos ha influido de modo significativo tanto en el campo social como político, es decir, tanto hacia sí mismos —y en un sentido más amplio hacia la clase popular— como en relación al Estado. En todos ellos se han manifestado también tensiones y contradicciones con el sistema de partidos políticos nuevos o tradicionales, haciéndose necesario fortalecer y recrear formas de autonomía de las organizaciones y dinámicas sociales.

El Movimiento de los Sin Tierra brasileño ha sido descrito como uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina, en tal grado, que luego de 17 años de su fundación, y en los arbores del siglo XXI, mediante ocupaciones de tierras, como forma de presión y también de concientización política de miles de campesinos, "ha conseguido asentar por esta vía unas 350.000 familias campesinas y otras 100.000 están distribuidas en unos 500 campamentos esparcidos por todo Brasil, esperando que llegue su día".²⁹ Pero no se trata solo de la magnitud del movimiento y sus logros, sin lugar a dudas importantes, sino también de su origen y de los modos de construcción del movimiento. Como ha indicado Joao Pedro Stedile, el movimiento nació de los campesinos expulsados de los procesos de modernización de la agricultura brasileña, que los puso ante dos posibles salidas: el éxodo hacia las ciudades o hacia las fronteras agrícolas. Ello los obligó

a tomar dos decisiones: tratar de resistir en el campo y buscar otras formas de lucha más acordes con las regiones donde vivían. Esa es la base social que generó el MST. Una base social dispuesta a luchar, que no acepta ni la colonización ni la emigración hacia la ciudad como soluciones a sus problemas. Quiere permanecer en el campo, sobre todo en la región donde vive.³⁰

²⁹ Marta Harnecker. *Sin tierra. Construyendo Movimiento Social*. Madrid: Siglo XXI, 2002, p. 2.

³⁰ Brava Gente. *Entrevista a Joao Pedro Stedile, realizada por Bernardo Mancano*. Buenos Aires: Barbarroja, 2000, p. 17.

Pero también Joao Pedro subraya que si bien hay una raíz socioeconómica, hay una segunda razón de carácter ideológico, el trabajo pastoral de la Iglesia Católica y Luterana, en particular el surgimiento de la Comisión de Pastoral de la Tierra. Esta fue

la aplicación en la práctica de la Teología de la Liberación, y constituyó una contribución importante a la lucha de los campesinos desde un punto de vista ideológico... La Iglesia dejó de hacer un trabajo mesiánico y decirle al campesino: "Espera, que tendrás tierra en el cielo". Empezó a decirles lo contrario: "Tienes que organizarte para luchar y resolver tus problemas aquí en la Tierra".³¹

Con relación a la naturaleza y los principios del movimiento, Joao Pedro también ha indicado que se trata de un movimiento campesino diferente a los históricos, que se limitaban a luchar por la tierra. El MST es un *movimiento popular*, al menos en dos sentidos, en primer lugar, porque puede participar todo el mundo, en particular la familia campesina extendida, que incluye a ancianos, mujeres y niños, pero también pueden participar hombres y mujeres del campo y la ciudad que luchan por la reforma agraria (el técnico, el sacerdote). No se piden credenciales para participar, ya que el MST "supo abrirse a los que había en la sociedad. Simplemente no se cerró y no se cierra en los límites de un movimiento campesino típico". Se podía distinguir entre los "manos callosas" y los "manos suaves", pero ambos podían tomar cargos de dirección política. Por otra parte, el movimiento tuvo que aprender a combinar,

³¹ *Ibid.*, p. 20.

en sus prácticas y en su propia autoconcepción, elementos culturales, sindicales y políticos. "Comprendimos que la lucha por la tierra, por la reforma agraria, a pesar de tener una base social campesina, solamente saldría adelante si formaba parte de la lucha de clases".³² Para algunos analistas, esta combinación de prácticas y definiciones llevaría al MST a convertirse en un partido popular agrario, pero ellos desmienten esta perspectiva: "Queremos organizarnos con características populares, sindicales y políticas de otro tipo. No somos una organización partidaria, ni lo queremos ser, ni lo debemos ser".³³

Tal vez esta mirada clásica, de pensar al movimiento social como partido cuando toma en sus manos tareas políticas, deba ser contrastada con los nuevos avances que el propio movimiento ha alcanzado y que invitan a desarrollar nuevas proposiciones y a elaborar nuevas categorías de análisis para comprender a los movimientos sociales. Este es el caso de la noción de "territorialidad" del MST, una noción que comparten, en la actualidad, muchos otros movimientos sociales latinoamericanos. Cuando los dirigentes y analistas explican este principio, indican:

La territorialización de la lucha por la tierra es el proceso de conquista de la tierra. Cada asentamiento conquistado es una fracción de territorio donde los sin tierra se disponen a constituir una nueva comunidad (...) La lucha por la tierra conduce a la territorialización porque con la conquista de cada nuevo asentamiento se abre la perspectiva para la con-

³² Ibid., p. 41.

³³ Ibid., p. 43.

quista de otro (...) Cuando la lucha termina con la conquista de la tierra, no existe territorialización. Es lo que sucede a la mayor parte de los movimientos que luchan por la tierra, a los cuales consideramos movimientos aislados, porque comienzan con la lucha por la tierra y terminan con su conquista. Los sin tierra organizados en el MST, al conquistar la tierra, vislumbran siempre una nueva conquista, y por ello el MST es un movimiento socio-territorial.³⁴

Es decir, la noción de territorialidad puede ser vista en una doble perspectiva: la de las iniciativas que tienen que ver con la "construcción social" de la tierra conquistada (el asentamiento, que dará lugar a formas de producción de "ayuda mutua" o cooperativas y la organización propia o bajo control de las formas de la vivienda, la salud, la educación, etc.) así como el compromiso con el movimiento que hará posible que otros sin tierra accedan a ella.

Otra importante innovación en el MST, que lo diferencia también en algunos sentidos de los movimientos tradicionales, han sido sus prácticas relativas a las formas de organización: dirección colectiva, división de tareas, disciplina y democracia interna, lucha de masas, vinculación de los dirigentes con la base, estudio y formación de sus propios cuadros, son otros tantos de los "principios" que han articulado y permitido el desarrollo del MST. Los congresos y encuentros nacionales, que comenzaron a desarrollarse a partir del Primer Encuentro Nacional, reconocido como fundacional del 20 al 22 de enero de 1984, se han sucedido periódicamente hasta nuestros días y le han

³⁴ Ibid., p. 96.

permitido al MST ajustar y adecuar sus tácticas a los cambiantes tiempos políticos, así como a su propio desarrollo. Las consignas, que acordaban estos encuentros, dan en cierto modo cuenta de los énfasis y prioridades del MST: "La Tierra para el que la trabaja" (1984); "La ocupación es la única solución" (1985); "Ocupar, resistir y producir" (1989); "La reforma agraria es una lucha de todos" (1995).

La educación ha sido, por cierto, otro componente fundamental en el desarrollo del MST. Como ellos mismos indican, aprendieron de los viejos militantes y de otras organizaciones que "ninguna organización tiene futuro si no forma sus propios cuadros en todos los frentes del conocimiento humano" o, como reafirma Joao Pedro, recordando lo que les indicaban esos viejos militantes, que recitaban el proverbio chino de que "quien no camina con sus propias piernas no llega lejos". En la historia del MST, se pueden distinguir distintas iniciativas de formación: el Primer Seminario Nacional de Educación de 1987; la creación, en 1995, del Instituto Técnico de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria (ITERA); el Encuentro Nacional de Educadores de la Reforma Agraria (ENERA), que se realizó en julio de 1997 en la Universidad de Brasília, y que reunió a más de setecientos educadores —especialmente profesores de primaria de los asentamientos— para discutir sobre educación y reforma agraria; y la creación, en tiempos más recientes, de la Escuela Nacional Florestán Fernández (ENFF).

La ENFF, inaugurada en enero de 2005, según indica Adelar João Pizetta, surge con el propósito de pensar,

programar, planear, organizar y desarrollar la formación política e ideológica de los militantes y dirigentes del conjunto del MST. Se propone también ser un espacio de articulación de innumerables iniciativas y experiencias del MST de distintos sectores del movimiento; busca así mismo hacer primar el estudio científico "y reflexionar la práctica política y organizativa de los miembros de la organización y contribuir a elaborar tácticas y estrategias de acción en diferentes áreas".³⁵

En su devenir y desarrollo, por cierto han enfrentado diversas tensiones y contradicciones de distinta naturaleza, su relación con el PT y el gobierno de José Inacio Da Silva (relación de presión y negociación, pero sin tomar cargos en el gobierno); las propuestas de una "producción limpia" (es decir, sin uso de transgénicos y respetuosa de la naturaleza); la posición de los jóvenes, que más de una vez quieren emigrar a la ciudad; las nuevas formas de organización de la producción (tanto relativos a la propiedad —se han promovido las cooperativas—, como el acceder a formas de producción que superen la economía de subsistencia campesina).

El **Movimiento Piquetero** argentino emerge en los años noventa, en medio de los ajustes estructurales en la economía y la reforma del Estado promovida y llevada adelante por el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem.

³⁵ Adelar João Pizetta. "A formação política no MST: um processo em construção". OSAL (buenos Aires: CLACSO), año 8, N° 22, Septiembre 2007, p. 246.

Argentina comenzó a vivir el desmantelamiento del modelo de sustitución de importaciones a partir de la dictadura militar (1976-1983), pero no se consumó este proceso sino hasta la denominada “década menemista” (1989-1999), cuando se puso en vigencia un proyecto económico “orientado hacia la eliminación del déficit fiscal, la deregulación de los mercados y la privatización acelerada de las empresas públicas”.³⁶

Fue en este contexto —de transformaciones neoliberales— que emergió un movimiento *sui generis*, de desocupados que se negaron a permanecer en esa condición y demandando “trabajo” se lanzaron a los caminos y sumaron a las comunidades locales para organizar “piquetes” que cortaran las rutas y asambleas populares, que en su desarrollo dieron origen a las denominadas “puebladas”. El resultado fue que de desocupados se transformaron en “piqueteros”, y que de negados y aislados en la sociedad fueron ganando paulatinamente visibilidad, primero, a mediados de los noventa, desde las provincias del interior y, hacia el 2000, en el cono urbano de Buenos Aires. Entonces fueron un actor social relevante en la crisis de la sociedad argentina del 2001, que hizo visible el descontento con el sistema político (que se vayan todos!), fue la consigna de una diversidad de movimientos y ciudadanos argentinos), provocó la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y preparó el retorno de un peronismo que

buscaría reconciliarse con su propio pasado histórico (la “era kirchnerista”). A estas alturas la presión del movimiento sobre el Estado argentino hacía llegar los diversos planes de empleo de emergencia por sobre los dos millones de beneficiarios.³⁷

Según el acucioso y sistemático estudio de Svampa y Pereyra, los cortes de ruta y puebladas de Neuquén, Salta y Jujuy, entre 1996 y 1997, representan el punto inicial del movimiento piquetero, un movimiento diverso, pero que sin embargo compartía un nuevo formato de protesta: “el corte de ruta”; una nueva modalidad organizativa: “la asamblea”, y un nuevo tipo de demanda: “el trabajo”, que se traduciría en la presión por planes sociales. La diversidad del movimiento se relaciona no solo con las peculiaridades geográficas, económicas y culturales de las provincias y Buenos Aires, sino con las líneas políticas que recorren al movimiento piquetero. Por una parte, se puede reconocer la línea que se entronca con la tradición sindical, grupos que rompen con la histórica y subordinada CGT y que dieron origen a la CTA o que fortalecieron a la CCT, Corriente Clasista y Combativa, asociada al PCR. Esta tendencia alcanzó mayor desarrollo en distritos populares que sufrieron los efectos de la desindustrialización y descolectivización, como La Matanza. Por otra parte, la tendencia que se articula en torno a un conjunto emergente de grupos autónomos, como el Movimiento Teresa Rodríguez y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados y grupos asociados a partidos políticos de

³⁶ Maristela Svampa y Sebastián Pereyra. *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: BtBlos, 2003, p. 21.

³⁷ *Ibid.*, p. 218.

izquierda (Partido Obrero, Movimiento al Socialismo, Partido Comunista, Partido Revolucionario de la Liberación, Patria Libre). Los elementos en común de estos grupos tienen que ver con un diagnóstico de la situación argentina que los llevó a una confrontación más abierta con el gobierno. Finalmente, una tercera tendencia es la que se puede asociar al trabajo territorial y local, que reivindica un no alineamiento partidario y electoral y enfatiza en formas de hacer política más centrada en el trabajo local y microsocioal (MTD de la Coordinadora Aníbal Verón, en la zona sur de Buenos Aires; la UTD de Mosconi y Salta, el MTD La Juanita de La Matanza).

El movimiento piquetero argentino es muy expresivo de la significativa transformación que ha vivido la sociedad argentina, como producto del tránsito del modelo de sustitución de importaciones con el mayor Estado redistributivo de América Latina, hacia las nuevas formas de la economía postfordista globalizada. A diferencia tal vez de otros países, las resistencias al nuevo modelo las encarnaron movimientos sociales, como el piquetero, que da cuenta, además, de la diversidad de tradiciones organizativas y políticas, tanto de los trabajadores como de los pobres de la Argentina. De este modo, en este país conviven hoy tradicionales y nuevos movimientos sociales que buscan afanosamente redefinir sus relaciones con el Estado para asegurar horizontes fundamentales de democracia y de justicia social.

Los movimientos campesinos e indígenas en Bolivia, en la primera década del nuevo siglo, han cambiado el curso de la historia de ese país más que en ningún otro lugar de América Latina. Se movilizaron desde distintas regiones, derribaron gobiernos, hicieron colapsar el viejo sistema de partidos políticos, crearon su propio partido —el MAS—, eligieron al primer indígena presidente de la república (que creció en votación popular en su reelección, en diciembre de 2009) y han participado activamente en una Asamblea Constituyente que ha buscado modificar conflictivamente y “desde abajo” las estructuras fundamentales del Estado.

El contexto de las movilizaciones sociales en Bolivia, desde los años noventa, estuvo marcado por la crisis de legitimidad del sistema político, las instituciones y procedimientos, así como la emergencia y fortalecimiento de organizaciones sociales diferentes al sindicalismo de antaño, que asumían tradicionalmente el peso de las movilizaciones.³⁸ Esta doble perspectiva de análisis es muy interesante, ya que tiende a reproducirse en más de un país de América Latina: la crisis de legitimidad de los sistemas políticos, como estructuras impuestas a la sociedad, que reproducen y recrean formas del pasado colonial o como reformas en el Estado en clave neoliberal, que separan al Estado de la sociedad, vaciándolo de contenido social y nacional y, por otra parte, los cambios

³⁸ Patricia Chávez y Dunia Mockani. “Los movimientos sociales en la Asamblea Constituyente. Hacia la reconfiguración de la política”. *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO), año 8, N° 22, septiembre 2007, p. 108.

en las dinámicas de las organizaciones y movimientos sociales, que se fortalecen en su capacidad de movilizar y "recrear la propia sociedad" desde sus bases. Cuando estos procesos confluyen, al menos en la historia reciente de países del Cono Sur, o cae el gobierno en medio de una situación semiinsurreccional (Argentina del 2001), o emerge desde los propios movimientos la necesidad de configurar "un poder constituyente" (Bolivia, a partir aproximadamente del 2002).

De acuerdo con Chávez y Mokrani, en el proceso de la acción colectiva de los movimientos sociales en Bolivia, se pueden reconocer los siguientes hitos movilizadores: a) La Marcha por el Territorio y la Dignidad, que protagonizaron ya en 1990 los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas, que demandaban el reconocimiento de los territorios indígenas y de sus organizaciones, así como la titulación de tierras comunitarias de origen, todo lo cual llevó a una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, que reconoció el carácter multiétnico y pluricultural del Estado boliviano; b) La Marcha de los Pueblos de Tierras Bajas por la Asamblea Constituyente, en el 2002, que plantea explícitamente la demanda por una reforma estatal, la lucha por la recuperación de los hidrocarburos y la participación en la definición de una política energética; c) La Guerra del Agua en Cochabamba, que articuló a un conjunto diverso de organizaciones sociales, que cuestionaron el monopolio de los partidos sobre la política, ampliaron los espacios de deliberación, expulsaron a una empresa trasnacional e instalaron la demanda por una Asamblea

Constituyente; d) Movilizaciones indígenas del altiplano, 2000 y 2001, que hacen visibles los límites del Estado para retomar el control de las carreteras y los espacios territoriales copados por los indígenas, e) La Guerra del Gas, entre el 2000 y 2003, movilizaciones permanentes de activistas y organizaciones sociales que cuestionaban los modos elitarios en que los gobiernos encaraban la gestión de los recursos naturales. Las movilizaciones llevaron a la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Losada (reemplazado por el vicepresidente Carlos Mesa). En esta etapa, los movimientos sociales alcanzaron el *peak* de sus capacidades de movilización:

En las asambleas de barrio, los cabildos, los turnos entre vecinos para garantizar la fuerza de la movilización, las estrategias de abastecimiento de alimentos, gas y agua, ya la forma cuasi militar de organización de la defensa de la ciudad asediada por el ejército, los movimientos sociales se presentaron a sí mismos como la fuerza fáctica de un modo diferente de hacer política, con posibilidades reales de frenar y cuestionar las maneras partidario-electorales que hasta ese momento habían sido impuestas como las únicas posibles.³⁹

Evo Morales fue elegido presidente en diciembre de 2005 y en marzo de 2006 fue promulgada la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (Ley N° 3364, del 6 de marzo de 2006). Las demandas de transformación política de Bolivia encontraban ahora un cauce institucional, pleno de tensiones con el viejo sistema de partidos y el

³⁹ Ibid., p. 113.

reagrupamiento de la derecha de la denominada Medialuna, especialmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por otra parte, la gestión del nuevo gobierno instalaba también la necesidad de crear nuevas formas de relación entre los movimientos sociales y el gobierno, entre el Estado y la sociedad. De este modo, como indican Viaña y Orozco,⁴⁰ se fue instalando la cuestión de si es posible un "gobierno de los movimientos sociales", que ha tendido a desenvolverse como una tensión entre la tendencia a la subordinación de los movimientos sociales hacia el Estado y las demandas de autonomía, control y ejercicio del "poder social" en y sobre el Estado.

En esta breve descripción de algunos de los movimientos que han alcanzado mayor visibilidad en América Latina, en el cambio de siglo, podemos ver que cuando en Chile el neoliberalismo alcanzaba sus mayores niveles de consolidación, entre nuestros vecinos florecían vigorosos movimientos sociales. Si en otras etapas de la historia, en los años sesenta, Chile era observado como un referente para las luchas populares en el Continente, en los noventa se encontraba en las antípodas y más bien era promovido como un ejemplo para las clases dominantes que podían observar cómo en Chile prosperaban los negocios y el crecimiento sin la "amenaza popular", o sin la presencia

⁴⁰ Jorge Viaña y Shirley Orozco. "El cierre de un ciclo y la compleja relación movimientos sociales-gobierno en Bolivia". OSAL (Buenos Aires: CLACSO), año 8, N° 22, septiembre 2007, p. 123.

de movimientos sociales capaces de disputar con la propuesta neoliberal.

Más allá de coyunturas específicas, lo que hay que tener en cuenta, desde un punto de vista histórico, es que América Latina no puede ser pensada sin la "acción colectiva" de nuestros pueblos, ya que en muchos casos, ésta es la forma en que ellos participan de las luchas políticas, especialmente si se tienen en cuenta las débiles tradiciones democráticas del continente y las también débiles estructuras institucionales que hacen posible procesar las demandas de cambio y de justicia social.

Chile hoy retorna a sus tradiciones que lo vinculan a América Latina, cuando los movimientos sociales vuelven a ocupar las calles y a demandar no solo reformas a la educación, sino que también interrogan y ponen en tela de juicio la legitimidad del actual sistema político nacional.

Capítulo IV

Los movimientos sociales en el siglo XX chileno

Desde el punto de vista de la historia social chilena, los movimientos sociales son y han sido actores fundamentales en las luchas por el cambio, la justicia social, la ampliación de la democracia y los derechos económicos, sociales y políticos. No hay ningún capítulo importante de la historia de Chile, al menos en el siglo XX, en que los movimientos sociales no hayan participado activamente como oponentes o como impulsores de reformas políticas, de mejoras en sus condiciones de vida o de proyectos de transformación social de mayor alcance.

El curso y el sentido de la historia del siglo XX chileno están asociados al desarrollo de los movimientos sociales. Al inicio del siglo, a propósito del impacto de la cuestión social y los movimientos de protesta obrera, que alcanzaron un punto culminante en la huelga salitrera y la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, en 1907; en los años veinte, contribuyendo a profundizar la crisis del régimen oligárquico, que llevó a la reforma del Estado y a la Primera Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales, en 1925; en la década del treinta, cuando la movilización estudiantil derribó a Ibañez, y hacia mediados de esa misma década, las huelgas ferroviarias prepararon el camino para la formación del Frente Popular, que amplió las responsabilidades económicas y sociales del Estado; en

los años sesenta y setenta, en que la movilización social se multiplicó y diversificó, incorporándose nuevos grupos sociales a las luchas políticas (especialmente campesinos y pobladores) en medio de la "Revolución en Libertad" y de la Unidad Popular, que se propuso ensayar una "vía chilena al socialismo". Finalmente, bajo la dictadura, fueron los movimientos sociales populares, especialmente de pobladores, así como de trabajadores y estudiantes, quienes allanaron el camino para el retorno a la democracia, promoviendo y materializando un ciclo de Protestas Nacionales entre 1983 y 1986.

En un sentido histórico y a su vez sociológico, tendríamos que agregar que los movimientos sociales no solo jugaron roles activos en función del cambio social, sino que su acción tendió a configurar de diversos modos las relaciones entre lo social y lo político. Ciertas tendencias, así como tensiones y conflictos, se hicieron recurrentes en las relaciones con el Estado. Una tendencia reiterada fue el uso permanente de la represión, que se expresó con diversas intensidades a lo largo del siglo XX, mientras que una segunda tendencia, opuesta, pero muchas veces complementaria con la anterior, fue la generación de espacios de negociación, a través del desarrollo de agencias o instituciones que favorecieron la interlocución con los movimientos sociales. La tensa relación con el Estado, que recorre todo el siglo XX, tuvo una expresión distinta durante la Unidad Popular, pues la represión fue inhibida por decisión del gobierno de Salvador Allende. Con todo, un conjunto de tensiones

se instaló en los propios movimientos, tanto a propósito de sus estrategias y tácticas como de sus formas de organización.

Los dilemas más frecuentes y reiterados en el siglo, con su secuela de divisiones y rupturas, fue entre la reforma o la revolución, la acción directa o la acción institucional, el legalismo o la subversión del orden establecido. Estos dilemas se reiteraron desde las diferencias que separaban a anarquistas, demócratas y socialistas, a principios del siglo, hasta las profundas diferencias que dividieron a la izquierda durante la Unidad Popular y que contribuyeron a su derrota. También en la actualidad, en el movimiento estudiantil, se pueden percibir estas viejas y tradicionales divisiones.

Otra tensión de naturaleza distinta, pero relacionada con los problemas de estrategia y táctica, que también recorre la historia de los movimientos sociales chilenos, tiene que ver con las relaciones que se han establecido entre las organizaciones sociales y los partidos políticos, relaciones variables de cooperación o imbricación recíproca, de autonomía o de dirección, también de cooptación, y en el peor de los casos, de manifiesta manipulación o instrumentalización.

Finalmente, desde el punto de vista del impacto y de los logros de los movimientos sociales, éstos han sido también variables, desde su evidente derrota, cuando la represión se impuso sin posibilidades de resistirla (Santa María de Iquique, o el golpe de Estado de 1973) hasta evidentes logros, como las denominadas "conquistas sociales" de los

trabajadores, en el ciclo 1932-1973 o la construcción de poblaciones definitivas que los pobladores alcanzaron en el ciclo 1957-1973. Dos factores parecen haber contribuido en las etapas de mayores logros: la mayor porosidad del Estado en un sentido democrático, es decir, el mayor desarrollo de lógicas democráticas en el Estado, pero al mismo tiempo, las mayores capacidades de presión y de acción transformadora de los propios movimientos en sus entornos más inmediatos. Valgan dos ejemplos que illustren esta última afirmación: el movimiento obrero fue más fuerte cuando ganó en unidad por arriba y capacidades asociativas por la base; y el movimiento de pobladores se impulsó cuando le indicó y le demostró al Estado que si no construía poblaciones, ellos mismos “tomarían sitios” y levantarían sus poblaciones (La Victoria dio el ejemplo, en 1957).

Tal vez el mayor desafío histórico de los movimientos sociales chilenos, ha sido el de articular su propio desarrollo, el de sus propias capacidades de cambio en la sociedad civil, con las capacidades para ejercer presión sobre el Estado para transformarlo y democratizarlo. La FOCH lo intentó y lo indicó en su Declaración de Principios, en los años veinte, cuando afirmó que “una vez que la Federación Obrera sea poderosa, determinará la abolición del sistema de explotación”, es decir, traducido al lenguaje de hoy, solo movimientos sociales poderosos en su propia constitución pueden hacer avanzar los procesos de cambio y persistir en sus luchas emancipatorias.

La cuestión social y el movimiento obrero

Desde la perspectiva de los movimientos sociales, el siglo XX se abrió con el mayor recrudescimiento de la denominada “cuestión social” y en relación con ella, con un primer ciclo de movilizaciones obreras y populares. La “cuestión social”, una expresión europea relativa al “problema obrero”, hacía referencia en nuestro país a un doble fenómeno: por una parte, al deterioro de las condiciones de vida y de existencia de las clases populares, y por otra parte, a la emergencia de la protesta social obrera encaminada a superar esa situación de deterioro.⁴¹ La situación social crítica con que se abrió el siglo XX fue interpretada o leída por la oligarquía como una “crisis moral”, sin embargo, desde la clase popular, la perspectiva era más bien social y económica. Y aunque a regañadientes, así lo tuvo que admitir la Comisión Consultiva, creada por el gobierno, que visitó la región del salitre, en 1904:

Muchos obreros se quejan con insistencia de que su condición es poco holgada, a pesar de los elevados salarios que reciben. Se quejan del monopolio del comercio ejecutado exclusivamente por los patronos en las pulperías de su propiedad, cuyos artículos son malos o alterados en peso y medida; de la emisión de fichas o vales que solo les habilitan para adquirir consumos en dichas pulperías a precios demasiado altos, o que son cambiados con descuentos en el caso de haberlos usado como moneda para adquirir mercaderías de comerciantes extraños. Se quejan también de las

⁴¹ Mario Garcés, *Crisis Social y motines populares en el 1900*. Santiago: LOM, 2003, p. 131 (segunda edición).

hostilidades de que son víctimas por el hecho de comprar a estos últimos; de la mala o deficiente administración de justicia que no alcanza a corregir las injusticias que sufren ni reparar sus agravios; de la insalubridad de sus habitaciones, y en fin, de otros abusos que parecería inoficioso enumerar.⁴²

Si esas eran algunas de las quejas de los obreros salitreños, sometidos a las condiciones laborales y de monopolio comercial de las compañías mineras, el panorama nacional no era más halagüeño. Según Alejandro Escobar, dirigente social y político de la época, que militó en el Partido Demócrata y en el anarquismo, cuando finalizaba el siglo XIX, a las diversas clases y capas sociales nacionales "las distanciaba una atmósfera de incomprensión de impermeable orgullo y de retraimiento recíproco. Esta atmósfera se hacía más densa en escala descendente, hasta llegar a pesar como un manto de plomo sobre el nivel inferior de la clase obrera y campesina". En este contexto, agrega Escobar, entre los más pobres, la situación era ruinosa "pues en las clases bajas no existía porvenir para las nuevas generaciones".⁴³ Otros observadores, como el escritor Alejandro Venegas, también hacía notar en sus cartas al Presidente, la distancia entre ricos y pobres:

La impresión más viva que recibe el viajero observador al estudiar nuestra organización social, es la que produce el contraste entre la gente adinerada y la clase trabajadora; porque en Chile hay solo dos clases sociales, ricos y pobres, esto es, explotadores y explotados; no existe la clase media: los que

⁴² Ibid., pp. 76 y 77.

⁴³ Ibid., p. 84.

no somos ricos ni menesterosos y aparentemente formamos el estado llano, somos gentes de tránsito, salida del campo de los explotados y en camino para el de los opulentos.⁴⁴

Se podrían señalar una serie de indicadores, relativos a los efectos de la inflación sobre los salarios, los problemas de la vivienda popular, la salud pública, la mortalidad de infantes y recién nacidos, todos los cuales reforzaban esta visión de una sociedad escindida, de la que nos dejaron testimonios diversos chilenos de aquellos años. Solo algunos datos fuertes relativos a las clases populares: las relaciones capital-trabajo las fijaban los dueños de las faenas, ya que no existía una legislación laboral y social sistemática (solo algunas leyes parciales, como la Habitación Obrera de 1906, pero en realidad las primeras leyes laborales se dictaron en 1924 y el Código del Trabajo, en 1931); más de un 30% de la población en Santiago vivía en ranchos y conventillos; la salud pública se veía afectada por recurrentes pestes y epidemias (entre 1905 y 1910, la viruela afectó a unas 18 mil personas y la fiebre tifoidea condujo a la muerte a otras 25 mil), mientras que hacia fines del siglo XIX, todavía cerca de un tercio de los recién nacidos morían antes de cumplir un año de vida y más de la mitad de los que sobrevivían morían antes de cumplir los siete años. Estas y otras razones son las que hicieron decir a Recabarren que no había motivos para sumar al pueblo a los regocijos del primer centenario de la República, en 1910.⁴⁵

⁴⁴ Ibid., p. 83.

⁴⁵ Luis Emilio Recabarren. "El balance del siglo: ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana", en: Hernán Godoy, *Estructura social*

Fue en este contexto de crisis social, que tenía expresión en una extendida pobreza urbana y rural y precarias condiciones de trabajo en la minería, los puertos y una naciente industria local, que creció tanto la organización como la protesta obrera. Un verdadero ciclo de movilizaciones, huelgas y motines populares se verificó entonces entre 1903 y 1907. Primero fue la huelga portuaria de Valparaíso, en abril y mayo de 1903, que se inició demandando mejoras salariales y modificación de horarios de trabajo, pero que ante la negativa de las compañías navieras y la oposición del *El Mercurio*, culminó el 12 de mayo de ese año en una suerte de levantamiento popular en el puerto, fuertemente reprimido por el gobierno, que envió fuerzas militares desde Santiago. Según informes oficiales, 35 trabajadores perdieron la vida y unos 600 quedaron heridos, luego de que los saqueos se extendieron por el plano y el malecón. Solo entonces, luego de la "acción directa", proclamada por Magno Espinoza y los anarquistas, las compañías y el gobierno cedieron, constituyéndose un Comité arbitral que finalmente acogió las demandas obreras. La tendencia de la élite política de entonces, a pesar de la protesta, era negar la existencia del problema social y así lo estimó el Congreso, que rechazó la idea de formar una Comisión que estudiara la cuestión social. Pero muy pronto, en octubre de 1905, la cuestión social estallaba en el mismo Santiago, en la conocida "semana roja" o "huelga de la carne". Diversas sociedades y agrupaciones de obreros y artesanos convocaron a una gran manifestación

de Chile. Editorial Universitaria, 1971.

en la Alameda con el objeto de hacer entrega al gobierno de un petitorio social, que entre otras medidas solicitaba rebajar el impuesto al ganado argentino. El gobierno se hizo el desentendido y cuando el rumor se extendió entre los manifestantes, la protesta cambió de carácter y la ira popular se dirigió en contra de los Bancos, de oficinas públicas, las casas de empeño, y los símbolos del orden, entre otros, las estatuas de la Alameda. El gobierno recurrió a la represión, pero la policía resultó insuficiente, por lo que ordenó al ejército, que se encontraba en maniobras fuera de la ciudad, volver a Santiago mientras se reparaban rifles entre jóvenes de la élite, en el Club de la Unión, para conjurar el peligro, eliminando "rotos". Se estima que en esa semana de represión el número de víctimas subió a 200, mientras los heridos, a unos 500. Los detenidos sumaron 800, la mayor parte de ellos gañanes o peones, es decir, los trabajadores más pobres, pero también había obreros y artesanos, muchos de ellos vinculados a gremios de orientación anarquista.

La protesta era, en rigor, obrera y popular, en el sentido de que si bien la huelga o el petitorio podía comenzar en los gremios de trabajadores y artesanos, cuando éstos salían a la calle se sumaban los más pobres (así fue en Valparaíso y en Santiago).

En el norte minero, por su parte, las organizaciones obreras fueron tanto o más poderosas que en Santiago, sobre todo entre 1900 y 1907, en que surgieron las Mancomunales, organizaciones *sui generis*, que agrupaban a todos los trabajadores de un territorio y que combinaban en su

quehacer tareas mutualistas (que fue la primera forma de organización popular en el siglo XIX) con tareas "sindicales" (cuando aún no existían legalmente los sindicatos) y además desarrollaban tareas educativas y políticas a través de conferencias y la edición de sus propios periódicos.

Dos huelgas alcanzaron gran desarrollo en el norte en estos años: la iniciada por los caldereros del ferrocarril de Antofagasta, en febrero de 1906, que solicitaban aumentar de una hora a una hora y media el tiempo para almorzar, demanda a la que se sumó luego la petición de un aumento en los salarios de los trabajadores del salitre.

Frente al paro decretado en la ciudad, el gobierno local jugó a dos bandas: aceptó la formación de un Comité arbitral, pero al mismo tiempo solicitó el envío de tropas y autorizó la formación de "guardias blancas", es decir, que jóvenes de la élite se armaran para defender la propiedad si esta se veía amenazada. El desenlace fue brutal, ya que reunidos en la Plaza Colón de la ciudad, las guardias blancas atacaron a la multitud, que se limitó a insultarlos gritándoles "Abajo los pijes armados". La tropa, por su parte, confundida con los incidentes, disparó también en contra del pueblo y 48 trabajadores perdieron la vida en la Plaza antofagastina. Más masiva y de mayor represión fue la huelga salitrera de Iquique, de 1907. Esta movilización es ampliamente conocida por la Cantata de Santa María de Iquique, que popularizó Quilapayún en los años setenta; nos basta solo indicar que se trató del mayor movimiento social de obreros salitreros —se estima que involucró a 37 mil trabajadores— y al mismo tiempo el suceso de mayor

violencia del Estado en contra del pueblo de Chile, al menos en estos años bajo la dictadura de Pinochet la violencia del Estado en contra de la sociedad y el mundo popular superó todo lo conocido.

En este ciclo de movilizaciones, la principal estrategia obrera fue la huelga y la búsqueda de instancias de negociación —así fue en Valparaíso, Antofagasta e Iquique— cuando no existía legislación social que protegiera a los trabajadores. Sus demandas apuntaban a mejorar sus deterioradas condiciones de existencia social, que en realidad afectaban al conjunto de la clase popular, desde la segunda mitad del siglo XIX.⁴⁶ Cuando las demandas populares no fueron escuchadas por el Estado liberal de entonces, y no se generaron las condiciones para la negociación, vino el copamiento urbano, que devino en violencia y represión. La violencia social tomó la forma de "estallido" o de motín, mientras que la represión estatal tomó la forma de ocupación de la ciudad y en más de un caso, de masacre de los sectores populares.

⁴⁶ Hoy contamos con diversos estudios de la corriente de la Nueva Historia Social Chilena, relativos a la clase popular en el siglo XIX. Entre otros, se puede consultar a Gabriel Salazar: *Labradores, peones y proletarios*. LOM Ediciones, 2000 (1ª edición, 1985, Ediciones SUR); Mario Garcés: *Crisis social y motines populares en el 1900*, Santiago: Documentos, 1991, y LOM, 2003; Sergio Grez: *De la "regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*. Santiago: Ediciones DIBAM, 1997; Julio Pinto: *Trabajos y rebelión en la pampa salitrera*. Santiago: Ediciones Universidad de Santiago, 1998; María Angélica Illanes: *Chile Descentrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (1810-1910)*. Santiago: LOM Ediciones, 2003.

La oligarquía chilena de principios de siglo se llenó de temor frente a los trabajadores y el pueblo, y extremó la represión, confiando en la “paz de los cementerios”. Los sectores populares, por su parte, una vez que recompusieron sus fuerzas, radicalizaron sus posturas y ensayaron la constitución de sus propias formas de organización y expresión política. Entre ellas, los anarquistas, que habían tenido una actuación de primera línea en las grandes movilizaciones de principios de siglo, siguieron sus propios derroteros hasta dar lugar en 1913, en Valparaíso, a la Federación Obrera Regional de Chile (FORCH), mientras que los trabajadores de orientación socialista rompieron con el Partido Demócrata y dieron origen, en 1912, al Partido Obrero Socialista, donde adquirió nuevos bríos el liderazgo de Luis Emilio Recabarren.

Recabarren y un conjunto de líderes obreros, demócratas, socialistas y anarquistas, realizaron en esos años un enorme esfuerzo organizativo, pedagógico y político entre sus pares para dar vida a lo que se puede denominar el origen de una “política popular” en el siglo XX. Los fines estratégicos de la clase popular debían ser transformar la sociedad, pero ello no sería posible si no se producía una gran transformación en la propia clase popular que diera lugar a una nueva “sociabilidad obrera”. La organización y la unidad de la clase, así como “el despertar obrero” a través de la “ilustración”, es decir, la educación del propio pueblo, fueron los principales instrumentos en que confiaron.

Las luchas por la “Alimentación Obrera y Nacional” y la reforma el sistema político en los años veinte

Los turbulentos años veinte son recordados por la emergencia del liderazgo populista de Arturo Alessandri y porque se dictó una nueva Constitución Política del Estado, la de 1925. Sin embargo, la denominada crisis del régimen oligárquico, que recorre los años veinte, encuntra uno de sus antecedentes en el mayor éxito organizativo obrero, que se verificó entre 1917 y 1920. Como ha indicado Peter DeShazo:

Entre 1917 y 1920, durante el período de expansión del movimiento, un gran número de trabajadores no calificados y trabajadoras se unió a los sindicatos, generalmente bajo el mando de organizaciones de oficios calificados (...). La influencia política de los trabajadores urbanos aumentó considerablemente, conforme los sindicatos se hacían más efectivos. Los políticos comenzaron a reconocer el poder de los trabajadores de diferentes maneras, las que iban desde los proyectos para una legislación social hasta el aumento de la represión. La ola de huelgas que se inició en 1917 impulsó al gobierno a establecer procedimientos para solucionar las disputas laborales.⁴⁷

Y así como crecían las organizaciones de base y las demandas de los trabajadores, también se ampliaron las redes asociativas en que convivirían, no sin tensiones y disputas, las tradiciones mutualistas, que venían del siglo anterior, con las nuevas orientaciones socialistas y

⁴⁷ Peter DeShazo, *Trabajadores urbanos y sindicatos de Chile: 1902-1927*. Santiago: Ediciones DIBAM, 2007, p. 215.

anarquistas (sobre esta última hay que reconocer diversas vertientes, tal vez, la más importante entre los obreros, fue el anarcosindicalismo). En este contexto, las mayores movilizaciones sociales se estructuraron en torno a la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), creada a instancias de la Federación Obrera de Chile (FOCH) en 1918. Los problemas sociales que afectaban al pueblo, como vimos en las páginas anteriores, eran múltiples, sobre todo en el campo de la salud pública y la vivienda; sin embargo, tanto más sensible para la vida cotidiana eran los efectos de la inflación, sobre todo en relación al alza de los precios de los alimentos, que subían como consecuencia de la mayor exportación de cereales. Así lo hacía ver la AOAN en el Memorandum que envió al Presidente Sanfuentes, en noviembre de 1918:

“Excelentísimo señor:

La aspiración general del ser humano es mejorar su condición de vida; esto es una ley natural que las ciencias han demostrado en sus investigaciones, y a la cual debe rendir tributo toda colectividad de hombres, todo pueblo (...)

Un pueblo que tiene hambre, un pueblo que siente el aguijón de la miseria no responderá jamás a los llamados del patriotismo, ni podrá guardar respeto a los hombres e instituciones que cree son los causantes de su mal.

Las instituciones obreras de Santiago y del país en general, patriotas de por sí, porque trabajan en el levantamiento moral y material del pueblo que las forma, conocedoras del sentir popular, vienen en tocar el resorte constitucional para hacer oír sus quejas, para sentar su protesta si se quiere, por

la falta de atención de los encargados de velar y defender la vida ciudadana.

No se defiende la vida de un pueblo creando ejércitos y comprando buques; se defiende también, y en más alto grado, procurando a este pueblo alimentación barata, impulsando el progreso industrial, dando garantías de verdadera libertad en las fuentes de trabajo (...)

El pueblo de Chile cree que es un medio de abaratar la vida la supresión del impuesto al ganado argentino, y cree esto no por mero capricho, sino porque ya en el hecho se ha probado, pues cuando se suspendió por dos años este impuesto, la carne abarató en un 40 por ciento y pudo llegar este artículo a la mesa del pobre en cantidad relativa para mantener su estómago (...)

Prima en la familia y en los pueblos la alimentación de sus hijos, y no habrá pueblo consciente que pueda tolerar que, a pretexto de amparar la libertad de comercio, se atente contra su vida.

Es patriótico, es humano que los cereales no sean exportados mientras los necesitan los habitantes del país.

Es más de sentido común que de ley económica que los países den entrada a los artículos que no producen. (...)

Aquí no se produce azúcar, solo se refina, y le imponemos un impuesto; aquí donde solo se produce el papel para envolver, imponemos un impuesto para el papel de obras; aquí donde se produce en grande escala la lana, permitimos que ella salga y vuelva tejida en forma y precios irritantes, y en que se denota la mano del gestor de casas extranjeras que, cual pulpo, estruja la savia nacional del industrialismo (...)

El sentir nacional es que los artículos que no produce el país, como son los azúcares, té, café y otros, deben entrar libremente a nuestro suelo, y no como hoy, que, a pretexto de protección a la industria nacional, se prohíbe su entrada, privando al pueblo de adquirir a precios equitativos hasta su alimento más indispensable".⁴⁸

A la AOAN concurrieron variados sectores, no solo los obreros, sino que también los estudiantes, agrupados en la FECH, los artesanos que participan del Congreso Social Obrero, sectores medios de la Federación de la Clase Media (que se definía como apolítica) y diversos partidos políticos, entre ellos, el Partido Obrero Socialista, la Agrupación Demócrata de Santiago, el Centro de Propaganda Radical, el Centro Liberal y la Asamblea de Propaganda Conservadora. Es decir, un abanico bastante amplio de organizaciones sociales y políticas, que incluía también a los anarquistas. De hecho, el presidente de la AOAN fue el fochista Carlos Alberto Martínez y el vicepresidente, el ebanista y anarquista Moisés Montoya.

Para enfrentar la carestía, la AOAN elaboró propuestas y exigió al gobierno, entre otras medidas, un alto a las exportaciones de cereales, la abolición del impuesto a la carne argentina, la constitución de un Consejo de Subsistencia Nacional, así como el establecimiento de "mercados libres" (ferias libres) que permitieran a los campesinos la venta directa de sus productos al consumidor.⁴⁹ Las peticiones de la AOAN fueron acompañadas

⁴⁸ Primer Memorial al Presidente de la República, *El Mercurio*, Santiago, 23 de noviembre de 1918.

⁴⁹ DeShazo. Op. cit., p. 232.

de grandes desfiles públicos, el primero de ellos el 22 de noviembre de 1918, que se estima reunió entre 60 mil a 100 mil manifestantes en la Alameda, entre las calles San Diego y San Martín. El escenario, donde tomaron posición los dirigentes y los estandartes de las organizaciones obreras, se ubicó entre San Martín y Amunátegui. Según el relato que hizo *El Mercurio*:

Las sociedades obreras llevaban, además de sus estandartes, gran número de inscripciones, en las cuales significaban sus peticiones. Así, abundaban las que decían: "El pueblo pide pan".⁵⁰ Terminados los discursos, se inició el desfile, amenizado por una banda de músicos jóvenes de la Maestranza de los Ferrocariles". Según la misma fuente, "el desfile de los obreros presentaba frente a La Moneda un aspecto imponente y demoró más de una hora y media en terminar, lo que permite calcular el número de los obreros concurrentes al mitin en la apreciable cifra de 50.000 o más personas".⁵¹

Concluido el desfile, los dirigentes de la AOAN fueron recibidos por el presidente en La Moneda, el que junto a su ministro del Interior escucharon la lectura que el secretario hizo del Memorando de la AOAN. En realidad, el gobierno, que estaba al tanto de la manifestación y de las peticiones, no solo escuchó, sino que accedió a algunas de las peticiones, como la creación de ferias libres, la organización de un comité especial que estudiara la

⁵⁰ Citado por Patricio de Diego, Luis Peña y Claudio Peralta. *La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional: un hito en la historia de Chile*. Santiago: Sociedad Chilena de Sociología y Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2002, p. 75.

⁵¹ *Ibid.*, p. 76.

disminución del costo de los alimentos y el envío de diversos proyectos de ley al Parlamento. La AOAN, cuando había transcurrido una semana del desfile estimó insuficientes las medidas, ya que no se acogía la demanda para la creación de un Consejo de Subsistencias Nacionales y otras medidas, como alzas en los impuestos a la propiedad y la renta, comidas gratuitas para los escolares, ley sobre salario mínimo, campaña contra el alcoholismo y reformas a la exportación de alimentos. En realidad, la estrategia del gobierno había consistido en acoger algunas de las peticiones de los obreros, derivar otras al Congreso y en la medida que el movimiento persistía, poner en acción el aparato represivo del Estado.

En efecto, al comenzar el año 1919, la presión de la AOAN continuó, reuniendo a 50 mil personas en Valparaíso, el 27 de enero, y anunciando una nueva manifestación en Santiago para el 7 de febrero; sin embargo, el gobierno, con el apoyo del Congreso, decretó el estado de sitio el día 3 de ese mismo mes para las provincias de Santiago, Valparaíso y Aconcagua. La prensa alabó las medidas, sosteniendo que la nueva manifestación de la AOAN buscaría favorecer acciones de violencia de los "subversivos".⁵² La convocatoria para el 7 de febrero de la AOAN debió ser suspendida; sin embargo, las movilizaciones continuaban todavía por todo el bienio 1919-1920, alcanzando en estos años su *peak* el número de huelgas obreras, los niveles de asociación autónomos de los trabajadores y los "mítines del hambre", a los que convocó la AOAN en agosto de

⁵² DeShazo. Op. cit., p. 235.

1919. Como indicó un testigo de esta época: "Las huelgas estallaban casi diariamente y a veces en forma violenta. No se trataba solo de adoptar determinadas medidas: la revolución social hervía en los hogares de los pobres, en las fábricas y talleres y en las asambleas populares".⁵³ En este contexto, la Federación Obrera de Chile (FOCH), que se había fundado como un agrupación mutualista entre los obreros ferroviarios, en 1909, amplió su convocatoria a otros gremios para constituir "consejos federales", radicalizó sus posturas y aprobó en la Convención de diciembre de 1919, realizada en Concepción, una declaración de principios en la que sostenía que "una vez que la Federación Obrera sea poderosa, determinará la abolición del sistema de explotación, basado en la propiedad privada, y será reemplazado por una nueva organización dirigida por todos los Consejos Federales de la República".⁵⁴ Y si la FOCH crecía en esta etapa, los trabajadores que desde principios del siglo habían dado vida a "sociedades de resistencia", como una organización autónoma para enfrentar al capital, donde predominaban las ideas libertarias y anarquistas, se reorganizaron en esta etapa en diversas federaciones —del cuero y del calzado, ebanistas, de la construcción, etc.— para dar vida, también en 1919, a la Industrial Workers of the World, IWW. Esta nueva

⁵³ Manuel Rivas Vicuña. *Historia política y parlamentaria de Chile*. Citado por Hernán Ramírez N. en *Origen y formación del Partido Comunista de Chile*. Editorial Progreso, 1984, p. 121.

⁵⁴ Mario Garcés y Pedro Milos. FOCH, CTCH, CUT. *Las Centrales Unitarias en la historia del sindicalismo chileno*. Santiago: ECO, 1988, p. 25.

organización se proponía, al igual que la FOCH, la destrucción del capitalismo y su reemplazo por una sociedad basada en los sindicatos industriales en la agricultura, la minería, el transporte marítimo, transporte terrestre, manufactura y construcción y servicios públicos.

A pesar del incremento de las movilizaciones obreras y populares, así como de sus niveles asociativos y de sus orientaciones anticapitalistas, "el movimiento social" debió enfrentar la más cruda represión. Como ha indicado el historiador Hernán Ramírez, entre fines de 1918 y mediados de 1920 hubo matanzas obreras en Puerto Natales, Punta Arenas y en las Oficinas de Coya y Domeyko. En el asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes, se estima que perdieron la vida treinta y cinco personas; agentes del Estado asaltaron y destruyeron diversas imprentas que editaban periódicos obreros; más de 500 trabajadores fueron detenidos en el "proceso a los subversivos"; se atacó el local de la FECH y el poeta Domingo Gómez Rojas murió en la cárcel como efecto de la tortura; las empresas elaboraron "listas negras" para impedir que los despedidos que tenían algún papel político fueran contratados por otras empresas. En muchas de estas acciones, actuaban "Ligas Patrióticas" estimuladas por el gobierno, que promovía el nacionalismo a propósito de las tensas relaciones diplomáticas con Perú y Bolivia.

La coyuntura social y política crítica de 1919 y 1920 tomó forma, finalmente, en la campaña electoral de 1920, que llevó a la presidencia a Arturo Alessandri. Este representaba un liderazgo populista, que admitía la necesidad

de la reforma del gastado sistema político parlamentario. Dotar de más poder al ejecutivo y generar una moderna legislación social eran parte de las propuestas alessandristas, que no prosperaron como producto de la oposición que éste encontró en el Parlamento, dominado por la oligarquía. Agudizada la crisis, vinieron las intervenciones militares de 1924 y 1925, la primera dominada por los viejos oficiales conservadores, que desplazó a Alessandri del poder, y la segunda, por la denominada "oficialidad joven", que trajo de vuelta a Alessandri para que dirigiera el proceso que debía dar lugar a una nueva Constitución Política del Estado. Las organizaciones obreras y populares se reanimaron en esta etapa y confiaron, en buena medida, en la voluntad reformadora de la oficialidad joven y frente a la promesa de una Constituyente, convocaron a una Asamblea de Obreros e Intelectuales para que elaborara "principios constitucionales" que debían ser incorporados al debate político en ciernes.

La Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales, que congregó a más mil delegados, se reunió en el Teatro Municipal de Santiago entre el 7 y el 11 de marzo de 1925, convocando a todas las organizaciones y movimientos sociales, a la FOCH, la IWW y gremios autónomos, a los profesores, los empleados, los mutualistas, las mujeres y los estudiantes. El debate fue animado y controversial, ya que convivían entre los participantes diversas tendencias ideológicas: anarquistas, socialistas, marxistas, radicales positivistas y mutualistas, amén de temáticas en que había posiciones encontradas, como los derechos de la mujer y

los asuntos relativos a la educación.⁵⁵ Con todo, lo más importante es que se trata de la primera y única vez en la historia de Chile que los movimientos sociales se han congregado en una Asamblea para dirimir y afirmar sus puntos de vista en relación al ordenamiento institucional. Las principales recomendaciones de la Constituyente de Obreros e Intelectuales fueron las siguientes:

- 1.- El gobierno político de la República tiene por objeto coordinar y fomentar la producción económica y todas aquellas actividades que tiendan al mejoramiento de la sociedad dentro del territorio nacional;
- 2.- La tierra es propiedad social en su origen y su destino. La tierra y los instrumentos de producción y de cambio deben ser socializados;
- 3.- Los elementos culturales y los capitales socializados deben concurrir a la producción (...)
- 4.- La distribución de los productos corresponde igualmente al Estado por medio de sus órganos;
5. Debe asegurarse a cada persona lo necesario para la vida y su desarrollo integral;
- 6.- El producto excedente se destinará al bienestar general y al fomento de las ciencias y las artes;
- 7.- La República de Chile será federal;
- 8.- El gobierno de la República, de los Estados federados y de las comunas se organizarán con arreglo al principio del sistema colegiado;

⁵⁵ Oscar Ortiz. *Crónica anarquista de la subversión olvidada*. Santiago: Ediciones Espíritu Libertario, 2002, pp. 57 y ss.

9.- El Poder Legislativo de la República y de los Estados residirá en Cámaras funcionales compuestas por representantes elegidos por los gremios organizados del país. El mandato de estos representantes será siempre revocable;

10.-El Tribunal Supremo Federal de Justicia será elegido por los gremios organizados y sus funciones serán temporales;

11.- Se procederá a la absoluta separación de la Iglesia y el Estado;

12.- La finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre para bastarse a sí mismo y darle cultura desinteresada que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad, el bien y la belleza.

El Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la universidad.

A los consejos de maestros, padres y estudiantes corresponde la plena dirección de la enseñanza (...)

13.- Debe declararse igualdad de derechos políticos y civiles de ambos sexos;

14.- Debe suprimirse el ejército permanente; y

15.- Todos los funcionarios del Estado deben tener responsabilidad efectiva y no simplemente nominal.⁵⁶

Las recomendaciones de la Constituyente de Obreros e Intelectuales no fueron consideradas en la elaboración de la nueva Carta Fundamental, cuando Alessandri en

⁵⁶ Diario *Justicia*, 14 de marzo de 1925.

acuerdo con la alta cúpula militar desestimó la formación de una genuina Asamblea Constituyente y terminó por encargar a un grupo de expertos la elaboración de un texto constitucional, que fue votado el 18 de septiembre de 1925 y al que concurrieron menos del 50% de los inscritos.

La nueva Constitución de 1925 no logró encauzar la lucha política ni recrear un clima político estable para Chile.⁵⁷ Carecía de la legitimidad suficiente habida cuenta de su origen, que había desestimado el poder constituyente de los ciudadanos. En realidad, ninguna de las Constituciones de larga duración —la de 1833, 1925 y 1980— han sido el resultado del ejercicio del poder constituyente de los ciudadanos, razón por la cual todas han sido objeto de sucesivas reformas hasta la nueva crisis política e institucional. La duración de esas constituciones y la estabilidad política relativa alcanzada en algunos períodos no han sido sinónimos de legitimidad.⁵⁸

Los movimientos sociales y el Frente Popular

La reforma del sistema político de los años veinte no logró garantizar el desarrollo democrático ni tampoco poner en práctica las reformas económicas y sociales, que requerían de un activo rol del Estado, temas a los cuales Ibáñez atendió parcialmente. Sin embargo, la crisis mundial de los

⁵⁷ A la nueva Constitución de 1925 le siguió un débil gobierno de derecha, desplazado por la dictadura de Ibáñez, y a éste, los efectos de la crisis mundial de 1930, que se tradujo en una sucesión de gobiernos —incluida la República Socialista de los 12 días— hasta que Alesandri fue reelegido a fines de 1932.

⁵⁸ Ver en Gabriel Salazar y Julio Pinto: *Historia contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía*. Santiago: LOM, 1999. Passim.

treinta afectó en tal grado la economía chilena, que terminó por desarticular el viejo modelo exportador de materias primas e hizo estallar las finanzas públicas, desencadenando una crisis política que reanimó a los movimientos sociales y llevó al derrocamiento de Ibáñez. En los momentos culminantes de la crisis, grupos de civiles y militares de orientación socialista proclamaron una “república socialista” de tan solo 12 días de duración (del 4 al 16 de junio de 1932).

La siempre anhelada “estabilidad” política, por parte de los grupos sociales dominantes, solo se reestableció con formas autoritarias, bajo el segundo gobierno de Alesandri (1932-1938). Tanto al inicio de su gobierno como en su etapa final, el Congreso le concedió facultades extraordinarias, que buscaban reestablecer el orden político interno así como mantener el control y la subordinación de los movimientos sociales populares, especialmente de obreros y campesinos. En el caso de estos últimos, no solo se les impedía sindicalizarse, mediante una interpretación interesada de las leyes laborales aprobadas en 1924, sino que además fueron víctimas de una cruel represión en Rancú y Lonquimay, en 1934.

Los obreros, por su parte, que habían sido víctimas de la represión ibañista, especialmente los militantes de la FOCH y del PC, fueron recomponiendo sus fuerzas con nuevas formas de organización y agrupaciones sociales y políticas. La mayor transformación en relación a los años veinte, es que luego de promulgadas las primeras leyes laborales, en 1924, y del Código del Trabajo, en 1931, era posible la constitución de “sindicatos legales”,

que crecieron a fines de los años veinte y a lo largo de la década del treinta. El sindicalismo legal fue promovido por el Estado con un doble propósito: por una parte, reconocer derechos básicos de los trabajadores (contrato, negociación colectiva, previsión, etc.) y, por otra parte, controlar política e institucionalmente al movimiento obrero, impidiendo, entre otras medidas, la posibilidad de generar federaciones para la negociación colectiva así como inhabilitando a los empleados públicos para formar sindicatos. Esto llevó a las viejas organizaciones obreras chilenas —que hundían sus raíces en el mutualismo, pero que habían generado, en las dos primeras décadas del siglo XX, sociedades de resistencia, mancomunales, gremios y federaciones por ramas de la producción— a rechazar el sindicalismo legal. Sin embargo, a mediados de la década del treinta, los sindicatos legales eran una realidad y las viejas organizaciones se habían debilitado.⁹⁹ En esta misma etapa se podían distinguir tres grandes asociaciones mayores con sus respectivas orientaciones políticas: la Federación Obrera de Chile, FOCH, comunista; la Confederación General del Trabajo, CGT, anarquista; y la Coordinadora Nacional de Sindicatos, CNS, socialista. Ninguna por separado era capaz de garantizar un mayor desarrollo del movimiento obrero, amén de que muchos sindicatos

⁹⁹ La tendencia al crecimiento del sindicalismo legal en la década del 30 fue manifiesta, de tal modo que si en 1932 existían 421 sindicatos legales con 54.801 afiliados, en 1936 llegaban a 670 con 84.699 afiliados. Luego de la unificación sindical de 1936 y del triunfo del Frente Popular en 1938, esta tendencia creció aún más, y en 1942, los sindicatos legales alcanzaban a 1.593, que sumaban a 194.049 afiliados. Garcés y Milos. *Op cit.*, p. 51.

mantenían sus propias agrupaciones o federaciones. La unidad se imponía como una tarea ineludible, aunque tomaría tiempo en materializarse.

La oposición a Alessandri, gobierno al que muchos dirigentes sociales y políticos calificaban como una verdadera "dictadura legal" (por el uso de la represión y el uso de "facultades extraordinarias" para gobernar), así como el impacto que provocaron dos grandes huelgas ferroviarias, en enero de 1935 y febrero de 1936, sumado al reordenamiento político, que llevó a la alianza de socialistas, comunistas y radicales para dar vida el Frente Popular, fueron todos factores que coadyuvaron a generar la unidad sindical, que se tradujo en la formación de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) en diciembre de 1936.

El 13 de enero de 1935 una asamblea de trabajadores ferroviarios acordó declarar una huelga por 48 horas, luego de fracasados los intentos de acuerdos relativos a salarios y otras peticiones con la empresa y el gobierno, que realizaba un Comité de Organizaciones Ferroviarias Unidas. Los trabajadores del riel, como se les denominaba, contaban con dos factores a su haber: por una parte, con largas tradiciones organizativas —la FOCH había nacido de este gremio, en 1909— y por otra parte, con una posición y número de trabajadores estratégicos para el transporte de carga y de pasajeros. De este modo, una huelga de envergadura de los ferroviarios no podía pasar desapercibida en un país tan largo como Chile y en que su principal medio de comunicaciones y transporte, en aquellos años, eran los trenes. El origen de la huelga de 1935, bien podía remontarse a

los días de la República Socialista, de 1932, ocasión en la cual los ferroviarios buscaron alcanzar participación en el Consejo de Administración de la Empresa, demanda que fue acogida por los socialistas; sin embargo, cuando Grove fue desplazado de la Junta Militar y los obreros fueron a la huelga, la nueva Junta, encabezada por Dávila, los repitió, tomando el control de la empresa los militares y pro-cesando a varios de sus dirigentes. En los años siguientes, las demandas de participación y por mejoras económicas continuaron, con logros parciales, pero sin que fueran atendidas el conjunto de las demandas de los ferroviarios. El último intento fue un "pliego de insistencia" presentado en septiembre de 1934, que debía ser resuelto por una comisión integrada por dirigentes de los ferroviarios, el Director de la empresa y un representante del Ministerio de Fomento. Según expresaron los trabajadores, poco antes de acordar la huelga, esta comisión no funcionó porque fue obstaculizada por el Director de la empresa y "porque el gobierno no tuvo la menor energía ni la voluntad política para hacerla funcionar".⁶⁰ Fracasada esta gestión, se declaró la huelga acompañada de un petitorio que solicitaba, "una gratificación general hasta del 25%; aumento general de sueldos y jornales; devolución de descuentos y rebajas al personal de Vías y Obras; incorporación a la planta de trabajadores considerados "accidentales" o separados de sus cargos por "asuntos sociales".⁶¹

⁶⁰ Mario Garcés, "Movimiento Obrero en la década del treinta y el Frente Popular". Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia. Santiago: PUC, 1985, p. 82.

⁶¹ Ibid., p. 83.

La huelga fue rechazada por el gobierno, por considerarla ilegal y desmedida en sus peticiones. En un comunicado público, el ejecutivo declaró que los ferroviarios carecían del derecho a la huelga, según disposiciones del Código del Trabajo. El artículo 335 del Código establecía que los trabajadores estatales no podían sindicalizarse, y el artículo 540, que la huelga solo procedía después de realizarse todas las gestiones de arreglo y para los sindicalizados. Habida cuenta de estas razones, la huelga era ilegal y quienes participaban en ella incurrían en delito, sancionado por el Código Penal, pero además, el gobierno amenazaba con la aplicación del Decreto N° 50 del 21 de junio de 1932, que consideraba "enemigos de la República, en su letra f, a los que promuevan, estimulen o sostengan huelgas con violación de las disposiciones legales que nos rigen". La represión se puso en marcha entonces de modo inmediato, la Empresa fue puesta bajo control militar con efectivos del Regimiento de Ferrocarrileros, bajo la dirección del coronel Manuel Campos. Con todo, el día 15 el funcionamiento era bastante irregular y la huelga comprometía a unos 1.400 trabajadores, desde Valparaíso y La Calera por el norte hasta Puerto Montt por el sur. En ese contexto, vino una ola de detenciones de los dirigentes y Comités de Huelga: 47 en Santiago; 48 en Valparaíso; 5 en San Bernardo; 3 en Rancagua; 5 en Talca y Linares; 7 en Parral; 8 en Chillán; 3 en Concepción y 8 en Temuco. A ello se sumó una detención masiva de más de 300 participantes de una asamblea en el local de la Federación Santiago Watt y otro grupo en la Fraternal

Ferrovial, lo que hizo que al anochecer del día 15, unos 500 trabajadores ferroviarios detenidos fueran trasladados a la Penitenciaría de Santiago.⁶²

Solidarizaron con los ferroviarios la Federación de Maestros y la Asociación General de Profesores, el Sindicato de Obreros Papeleros, el Comité Único de la Construcción, la Federación de Trabajadores de la Medicina, La FOCH, la Unión Industrial de Metalúrgicos, el Sindicato de Sastrés y otros gremios. Y todavía el día 18 se declararon huelgas de adhesión al movimiento, convocadas por el gremio de enfierradores, la Unión de Obreros Municipales, la CGT, la CNS, la construcción, los sindicatos de Imprenta, los gásters asociados a la IWW y los trabajadores del Rodado a Tracción Animal de los barrios Chuchunco, San Eugenio, Independencia y Matadero.

La huelga ferroviaria, de solo 48 horas, provocó éstas y otras reacciones de apoyo en el Parlamento y en la prensa, lo que era bastante revelador del clima social que se vivía en el país, y en especial en la capital. De hecho, una vez liberados los trabajadores ferroviarios, se les obligó a firmar nuevos contratos, fue impedida la circulación del Diario *La Opinión* y destruida parte de su imprenta y clausurado un local del Partido Socialista, y en el Parlamento se debatió una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, que no prosperó.

Cuando las organizaciones de los trabajadores, especialmente las federaciones y centrales, como la CNS o la FOCH, debieron realizar el balance del movimiento,

⁶² Ibid., p. 86.

reconocieron que la legislación laboral era insuficiente y la unidad obrera era una condición fundamental para hacer avanzar sus demandas. Durante 1935, se realizaron diversos encuentros e intercambios sindicales para abordar estos asuntos; por ejemplo, la Convención Extraordinaria de Sindicatos, convocada por la CNS, inmediatamente después de la huelga ferroviaria puso en debate la cuestión de la legislación e invitó a los delegados a debatir sobre las siguientes interrogantes:

¿La legislación social se cumple en la actualidad con toda eficiencia? ¿Es la organización a base legal una garantía para que los trabajadores puedan desenvolverse libremente en torno a sus múltiples necesidades? ¿Habría necesidad de preparar una nueva estructuración orgánica para que los sindicatos puedan defenderse más ampliamente? ¿Qué organización nos daríamos? ¿Estaría dentro de la ley? ¿O al margen de la ley? ¿Podríamos, con una organización al margen de la ley, imponer el imperio de nuestra fuerza organizada, de un extremo a otro del país... nuestras aspiraciones de mejoramiento y el respeto que como obreros se nos debe? ¿Respondería el proletariado a tal posibilidad?⁶³

Todas estas eran preguntas acuciantes, que interpe- laban en tal grado a los sindicatos agrupados en la CNS, que el voto de mayoría abogó por el "repudio a la organización societaria estatal" y el de minoría, por "abandonar la legalidad" para gestar en breve plazo una nueva central obrera en un congreso de unidad sindical. Sin embargo, la FOCH aún no estaba dispuesta para una iniciativa de esta

⁶³ Ibid., p. 97.

naturaleza; primaba la desconfianza entre comunistas y socialistas, amén de una política sectorial de los primeros,⁶⁴ y, por otra parte, una nueva Central Obrera implicaba que las antiguas abandonaran su condición de tales. Con todo, hacia el segundo semestre de 1935, el PC y la FOCH comenzaron a revisar sus posturas y a considerar no solo que podían disolverse en una nueva central unitaria, sino que, además, esa nueva estructuración orgánica debía considerar las "normas que más le convienen y que permuta armonizar, sin abandonar el principio de la lucha de clases, estas normas con las imposiciones del Código del Trabajo". Es decir, ya el mismo año 1935, en que se rechazaba la legislación, por ineficiente desde el punto de vista obrero, se comenzaba a insinuar una fórmula intermedia: hacer cumplir las disposiciones del Código del Trabajo en aquellos aspectos que favorecerían a los trabajadores, dictar nuevas leyes, pero sin renunciar "al principio de la lucha de clases".

Los sucesos de 1936 se fueron inclinando en esta dirección. Una nueva huelga ferroviaria, de mayor magnitud que

⁶⁴ El año 1935 es muy importante en la historia de los comunistas, ya que todavía primaba entre ellos la denominada política de "frente único", que suponía la unidad por la base, pero desechando a los dirigentes que los comunistas estimaban negativos para la clase obrera: los anarquistas, socialistas, trotskistas, etc. Esta política sufrió un giro fundamental en el VII Congreso de la III Internacional, de agosto de 1935, que evaluando el desastre de los comunistas alemanes y el avance del fascismo en Europa, propuso defender la democracia a través de la formación de "frentes populares" en todo el mundo. Esta política implicaba moderar su política anterior y aliarse con sus antiguos enemigos o competidores.

la de 1935, alteró el verano de 1936, cuando en febrero de ese año cientos de trabajadores del riel fueron a la huelga, comprometiéndose más activamente las regiones sureñas, de Talca a Temuco, incluido San Rosendo y Concepción. El gobierno, al igual que en 1935, intervino militarmente la empresa de ferrocarriles, pero además denunció un "complot comunista", detectado en la filial de la III Internacional de Montevideo, que habría alentado el desarrollo de "huelgas revolucionarias" tanto en Chile como en Argentina y Brasil. Con este argumento, el gobierno clausuró el periodo extraordinario de Sesiones del Congreso; dictó "estado de sitio"; nombró jefes militares en Santiago, San Rosendo, Concepción y Temuco; amenazó a los huelguistas con tribunales militares; allanó sindicatos y casas particulares y detuvo y relegó a la zona sur del país a 25 dirigentes sociales y políticos, considerados claves en el desarrollo del movimiento.⁶⁵

Si bien el movimiento ferroviario se mantuvo por más de una semana, sumándose al movimiento diversos sindicatos, el miércoles 12 de febrero, la CNS instruyó a su afiliados, indicándoles que había llegado "la hora de la retirada".

Hemos cumplido una jornada que ha llenado de terror a la burguesía; no hemos alcanzado la victoria, pero debéis estar seguros que ella vendrá en los meses próximos. No será total, pero vendrá... Es la hora de la retirada, y cada militante está obligado, en estos momentos más que nunca, a mantener estrecha cohesión en sus filas, la más férrea disciplina y un

⁶⁵ Mario Garcés. Op. cit., p. 132.

sentimiento vivo de solidaridad hacia los hermanos caídos, los presos y sus mujeres e hijos.

En su parte final, el comunicado agregaba: "Aparte de la indisciplina de algunos sindicatos, que serán tomados muy en cuenta, nuestra grave falla ha sido la falta de una Organización Central del proletariado y de una sólida unión de base. Esta es la tarea próxima".⁶⁶

En realidad, la huelga de 1936, antes que la unidad sindical, que todavía tomaría algún tiempo en materializarse, estimuló la unidad de la oposición política al gobierno de Alessandri, cuyo mayor resultado fue la constitución del Frente Popular, en una asamblea realizada el 9 de marzo en el Congreso Nacional. De la fundación del Frente Popular participaron los siguientes partidos: Socialista, Radical, Radical Socialista, Democrático, Comunista y la Izquierda Comunista. La constitución del Frente Popular, en lo inmediato tenía dos significados políticos: alejaba a los radicales del gobierno de Alessandri y hacía posible la unidad de la izquierda.

La unidad sindical, por su parte, no se materializó sino hasta el Congreso Constituyente de la Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH, realizado entre el 25 y el 27 de diciembre de 1936. En el voto de mayoría se zanjaba la cuestión de la unidad indicando que la CTCH se proponía "la organización de todos los obreros de la ciudad y el campo, sin distinción de credos políticos o religiosos, de nacionalidad, sexo, ni edades para la lucha contra la explotación del régimen capitalista hasta llegar al socialismo

⁶⁶ Ibid., pp. 134 y 135.

integral". Y en términos más específicos, con relación a la vieja distinción entre sindicatos libres y sindicatos legales, el Congreso acordó que:

La Confederación de Trabajadores de Chile estará constituida a base de organizaciones legales o libres de obreros y empleados organizados en Uniones o federaciones industriales, de acuerdo con los siguientes Estatutos:

Todo afiliado a la Confederación de Trabajadores de Chile debe tener un medio de vida conocido.

El principio fundamental de la CTCH es la organización industrial en cada fábrica o en cada empresa un sindicato; en cada industria una Federación, más los organismos profesionales de obreros y empleados que las necesidades exijan.⁶⁷

Sin embargo, el problema de fondo, de cómo convivir con la autonomía obrera y el Código del Trabajo se tendió a resolver con lo que podríamos llamar una fórmula intermedia (o que también podríamos denominar como una fórmula "a la chilena") y que expresó el representante de la FOCH, Salvador Guevara, del siguiente modo:

(que la FOCH) acepta con todas sus fuerzas el informe de mayoría porque él reconoce la lucha de clases y continuará su acción por las reivindicaciones inmediatas de las masas obreras (...) A las masas obreras tenemos que tomarlas tales como son y no como quisiéramos nosotros que fueran; por lo

⁶⁷ Ibid., p. 175.

tanto hay que hacer la unidad de los obreros revolucionarios con los obreros legalistas.⁶⁸

A esta tendencia de mayoría se opuso el bloque anarquista, que concurrió a la fundación de la CTCH, y que proponía la formación de una "Alianza Sindical" que debería cohesionar al proletariado; valorar la táctica de la "acción directa"; recomendar a los sindicatos legales el abandono progresivo del legalismo; y que los organismos firmantes de la Alianza no deberían perder su independencia y su nombre.

Unidad sindical, en la CTCH, y unidad política en el Frente Popular, contribuyeron al triunfo de Pedro Aguirre Cerda, en octubre de 1938, y se abrió de ese modo una nueva etapa en la historia política de Chile, la del Estado desarrollista y redistributivo en lo económico y social,⁶⁹ y también "de compromiso" en lo político (la izquierda política finalmente ingresaba a las diversas instancias del Estado, ya no solo a los municipios y el Parlamento, sino que también al gobierno). Esta etapa, que se inicia en 1938 y se cierra en 1973, se puede caracterizar como una etapa de progresivos y al mismo tiempo limitados *procesos de democratización* de la sociedad chilena. En un contexto de

⁶⁸ Ibid., p. 175.

⁶⁹ Es frecuente en ciencias sociales el uso de "Estado Benefactor", asimilando en cierto modo esta noción a la "Estado de bienestar" de los países desarrollados del norte. Parece más prudente, desde el punto de vista económico y social, la noción de Estado desarrollista, por el rol más activo del Estado en la economía y Estado redistributivo, por el impacto de las políticas públicas en ámbitos con la salud y la educación.

mayor apertura política, el Frente Popular inició una serie de reformas que le dieron un rol más activo al Estado en la economía, con la creación de la CORFO, en 1939, la que estimuló y apoyó el proceso de industrialización nacional; que permitiría, en los años siguientes, la creación de la ENAP, la ENDESA, IANSA y la industria del acero, con la fundación de Huachipato. También el Estado expandió, en el mediano plazo, y siempre de modo insuficiente, sus "roles sociales" en el campo de la salud, la educación y en menor grado de la vivienda popular ("pan, techo y abrigo" fue una de las consignas del Frente Popular que acogía simbólicamente las demandas populares).

La participación de la izquierda en la alianza de gobierno fue siempre tensa e inestable, a propósito de los compromisos que implicaba estar en el gobierno y atender al mismo tiempo las demandas de sus bases populares. Los socialistas se dividieron muy pronto entre "colaboracionistas" e "inconformistas", y los comunistas fueron expulsados del gobierno de Gabriel González Videla, cuando éste decidió alinearse con los Estados Unidos en los inicios de la Guerra Fría, amén de que el PC había crecido más de lo esperado. Por otra parte, el modo de relación entre lo social y lo político tendió a constituirse con un fuerte predominio de la acción de los partidos políticos, que se erigieron como representantes de la clase popular. De este modo, cuando la alianza frentista declinaba y los comunistas no solo eran expulsados del gobierno, sino que puestos fuera de la ley en 1947, las relaciones entre socialistas y comunistas se habían roto y, con ello, la propia unidad sindical.

Entonces, se constituyeron, de modo práctico, dos CTCH: una comunista y otra socialista. La unidad sindical como unidad o alianza político-partidaria tocaba su fin.

Los animados años del cambio social: desde la "Revolución en Libertad" a la "Unidad Popular"

Los inicios auspiciosos del Frente Popular, en 1938, terminaron una década más tarde, en 1948, en un clima político y social confuso, represivo y con visibles formas de corrupción y clientelismo estatal desde los partidos políticos. El predominio mesocrático de los presidentes radicales había contribuido a reforzar los roles económicos y sociales del Estado, atendido algunas demandas de la clase obrera organizada, de las mujeres "sufragistas", de los ingenieros de la CORFO, pero había excluido a los campesinos, procesado débilmente las demandas de vivienda de los más pobres de la ciudad (los pobladores) y manejaba con grandes dificultades los problemas económicos, sobre todo el impacto de la inflación, que deterioraba permanentemente el valor de sueldos y salarios. Ibáñez capitalizó el descontento social y político y ganó holgadamente la presidencia en 1952, para encabezar un gobierno errático, con fases populistas y autoritarias, que culminó con una crisis social en 1957, cuando diversos grupos sociales, de estudiantes, trabajadores y pobladores coparon las calles de Santiago, el 1 y 2 de abril. Se había gestado una amplia movilización social que culminó con más de 10 víctimas fatales, cuando el gobierno recurrió al ejército para reprimir a los animados movimientos sociales. Todavía, ese

mismo año, el 30 de octubre de 1957, los pobladores de la zona sur de Santiago tomaron sitios, para dar origen a la emblemática Población La Victoria.

En la etapa ibañista, sin embargo, el movimiento obrero se reunió para dar origen a la CUT, en 1953; y la izquierda también, para dar origen al Frente de Acción Popular FRAP, que reunía a comunistas y socialistas y que estuvieron muy cerca de ganar el gobierno, en 1958, con Salvador Allende como candidato. No ocurrió de ese modo, y el nuevo presidente fue Jorge Alessandri, el que si bien representaba a la derecha, con cierta independencia, buscó ajustar el desarrollo capitalista nacional con mayor apertura a la inversión extranjera y un cierto equilibrio entre la planificación estatal y la iniciativa privada. Sus logros relativos en una primera fase de gobierno fueron opacados por el rebrote de la inflación, la represión a los movimientos reivindicativos de la CUT y el reordenamiento del cuadro social político, que preparaba "nuevos tiempos" para Chile: los animados años sesenta.

Los años sesenta fueron especialmente activos desde el punto de vista social y político, y si bien la izquierda no logró repetir la hazaña de 1958 con Allende de candidato, un nuevo fenómeno marcó la década: la Democracia Cristiana propuso al país una "revolución en libertad", que se hacía eco de la doctrina social cristiana y de las propuestas de la Alianza para el Progreso surgida en los Estados Unidos, bajo la administración de John F. Kennedy, que buscaban conjurar los "amenazantes" efectos de la Revolución Cubana (evitar una nueva Cuba en América Latina).

La Revolución en Libertad consistía en un conjunto de reformas económicas, la chilenización del cobre, la reforma agraria y nuevos apoyos a la industria nacional; cambios sociales, la sindicalización campesina, un ambicioso plan de construcción de viviendas y la Promoción Popular; y, culturales, como la reforma del sistema educativo. Este conjunto de transformaciones buscarían superar el estancamiento económico, modernizar la sociedad y favorecer la integración social de los más pobres.

Las propuestas de la DC, que enfatizaban en el cambio social, se asemejaban bastante a las propuestas populistas frecuentes en América Latina, a mediados del siglo XX, en el sentido de la apelación al pueblo, el liderazgo carismático, las políticas redistributivas y las reformas económicas, como la chilenización del cobre y la reforma agraria, que en el mediano plazo llevaría inevitablemente a la DC a enfrentarse con la vieja oligarquía, de raíz agraria. Por cierto, el ritmo de las reformas y del cambio social generaban tensiones en el gobierno, en el que convivían dos orientaciones: “una de sesgos reformistas genuinos, y otra, más conservadora, que buscaba poner límites a las reformas, reproduciendo la ambigüedad clásica de los populismos—el cambio sin el cambio—pero, al mismo tiempo, esa ambigüedad desataba o liberaba fuerzas sociales, que al ganar en autonomía terminarían por volverse en contra de la propia Democracia Cristiana”.⁷⁰ Desde esta

perspectiva, para muchos analistas la DC fue víctima de una explosión de expectativas o de demandas, pero si se observa el fenómeno con mayor profundidad, habría que señalar que la DC fue víctima de sus propias contradicciones, que le hicieron perder apoyo popular, agudizaron las tensiones al interior del partido, pero sobre todo, desde el punto de vista de la historia social, hicieron emerger nuevos actores y movimientos sociales, que fueron ganando en autonomía, tomando distancia crítica de la DC y afirmando sus propias culturas y demandas. Este fue el caso de los campesinos y pobladores.

En consecuencia, el rasgo más peculiar de los años sesenta fue que el campo de los movimientos sociales se amplió y diversificó: a las luchas obreras clásicas de la CUT, que declaraba agrupar al 34% de la clase trabajadora, se sumaron pronto los campesinos, que de 22 sindicatos reconocidos a principios de los años sesenta, con unos 1.500 socios, se llegó en 1970 a la constitución de 400 sindicatos, con más de 100 mil socios. Por su parte, los pobladores, agrupados en Comités de Sin Casa, locales y con articulaciones comunales, se comenzaron a expandir por Santiago y provincias. Y por si no bastara, los estudiantes universitarios iniciaron vigorosas movilizaciones para reformar sus casas de estudio, y en el mundo de la Iglesia Católica, diversos movimientos y grupos de presión dieron origen a la “Iglesia Joven”, y más tarde, durante la Unidad Popular, a los “Cristianos por el Socialismo”. De este modo, cuando se vincula la movilización social, especialmente a la Unidad Popular, en realidad hay que admitir que ésta se

⁷⁰ Mario Garcés, “Chilean social movements in confrontation with neoliberalism”, en Ximena de la Barra (ed), *Lieden-Boston: BRILL, Neoliberalism's Fractured Showcase. Another Chile is Possible*, 2011, pp. 219–247.

gestó y activó previamente al triunfo de Salvador Allende. De esta manera, la UP es, en muchos sentidos, el resultado de esta mayor movilización social sesentista. Y si quedan dudas, considérense los siguientes datos duros: en el trienio 1967-1970 y la coyuntura electoral, 1969-1970, todas las movilizaciones de base se incrementaron: los campesinos pasaron de 10 tomas de fundos en 1967 a 28 en 1968 y a 456 en 1970;⁷¹ los pobladores, solo en Santiago, de 4 tomas de sitios en 1968 subieron a 35 en 1969 y 103 en 1970.⁷² En el caso de los trabajadores sindicalizados, también expandieron los movimientos huelguísticos: en la minería, de 162 huelgas en el bienio 1965-1966 subieron a 306 en el bienio 1967-1969, y en la industria, de 324 en el primer bienio indicado a 1.364 en el segundo.⁷³ En suma, estos fueron años en que las "oportunidades políticas" favorecieron a los movimientos sociales y los repertorios de acción se expandieron y masificaron, haciendo de "la toma" (de sitios, de fundos, etc.) una de las formas más recurridas para presionar y modificar las relaciones sociales preexistentes. El triunfo de la UP, reiteremos, fue precedido por, y también el producto de, las mayores movilizaciones sociales.

Referirse a la Unidad Popular será siempre un asunto conflictivo para los estudios y los ejercicios de memoria de los chilenos. Hay sobradas razones e intereses en juego para hacer de esta etapa una "zona crítica" de la historia

⁷¹ Crisóstomo Pizarro. *La huelga obrera en Chile*, Santiago: SUR, 1986, p. 166.

⁷² Mario Garcés. *Tomando su sitio*. Op. cit., p. 350.

⁷³ Pizarro. Op. cit., p. 152.

nacional; por supuesto, los procesos de cambios estructurales que animó y estimuló la UP (nacionalización del cobre, reforma agraria y creación de un área de propiedad social), pero sobre todo las oposiciones que generó, entre los viejos latifundistas, la gran burguesía, los norteamericanos, las fuerzas armadas, y ciertamente en las clases medias, genuinamente opuestas al socialismo o movilizadas por la derecha.

Pero hay más: la experiencia de la UP es crítica por su trágico final, que superó la "imaginación histórica" de los chilenos cuando los militares, cual "ejército de ocupación", coparon las ciudades para iniciar la más violenta, radical y sistemática violación de los Derechos Humanos del pueblo y de la izquierda. Era el fin de la democracia, de la Unidad Popular, pero más que eso, el golpe de Estado era la manera de conjurar la "revolución popular" que se venía gestando en la sociedad chilena, revolución que tenía un doble contenido, socialista, en el sentido de las reformas que se buscaban materializar en la economía y en el Estado, con manifestas ambigüedades en la dirección política de la UP y de la izquierda, siempre divididas entre reformistas y revolucionarios.

Pero un segundo contenido del proceso UP era de carácter eminentemente democrático, en el sentido de la movilización y las demandas de los movimientos sociales populares. En efecto, todos los actores y movimientos sociales, nuevos y tradicionales, que habían comenzado a copar la escena en los años sesenta, expandieron y multiplicaron sus iniciativas de movilización y participación

social: en la CUT, que a enero de 1971 reconocía a 350 mil trabajadores asociados, para mayo de 1972, cuando había que elegir nueva directiva, los inscritos llegaban a cerca de 600 mil y hacia fines de la UP, se estimaba que los trabajadores organizados llegaban a 940 mil, el más alto nivel de asociación de toda la historia conocida. Pero, además, la promesa de generar un área de propiedad social movilizó a cientos de trabajadores, que mediante las "tomas" de sus empresas esperaban que el gobierno decidiera la intervención: solo a julio de 1971 había 339 empresas tomadas con este objeto, tomas que crecieron en el contexto del "paro patronal" de octubre de 1972. En el caso de los campesinos, la organización de nuevos sindicatos también se expandió durante la UP, y de los 100 mil organizados a fines de los sesenta, el número se elevó a 282 mil en 1972, y se estima en unos 400 mil sindicalizados hacia fines de la UP. Y la mayor organización se conectaba con mayores movilizaciones para acelerar el proceso de reforma agraria o para conseguir mejoras en los "salarios, goces o regalías", de tal modo que si en 1970 se habían producido 456 tomas, en 1971 éstas subieron a 1.278 tomas de predios y 307 en 1972. Las "huelgas campesinas", por su parte, habían alcanzado su punto más álgido en 1970 con 1.580 huelgas que bajaron a 1.054, en 1971.⁷⁴ En relación a los pobladores, las tomas de sitios habían alcanzado su punto más alto en 1970, de tal modo que los investigadores Duque y Pastrana estimaron

⁷⁴ Hugo Cancino. *Chile. La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo, 1970-1973*. Dinamarca: Aarhus University Press, 1988, p. 158.

que entre 1969 y mayo de 1971 se habían verificado en el Gran Santiago un total de 312 tomas de sitios en las que vivían 54.710 familias.⁷⁵ Nuestras propias investigaciones nos han demostrado que *las tomas* de sitios y además, las movilizaciones para obtener la urbanización de los sitios adquiridos, no solo crecieron durante la UP en Santiago, sino que también se trasladaron a las provincias. En un registro de prensa de tres periódicos de Santiago, Valparaíso y Concepción hemos reconocido 1.000 movilizaciones de pobladores entre 1970 y 1973, con alta incidencia de éstas en la Región del Bío Bío (Concepción, Talcahuano, Chillán y Los Ángeles), donde solo las tomas de sitios llegaron a 172.

Es decir, la Unidad Popular que ha sido analizada por las ciencias sociales y la historiografía conservadora, especialmente por sus efectos políticos e ideológicos, en el sentido de la "polarización", la confrontación de proyectos globales y excluyentes, el intento equivocado de pretender cambiar la sociedad sin tener la mayoría electoral, etc., esconde o invisibiliza el hecho capital: que es ésta la etapa de mayor movilización social y popular que se haya vivido en la historia de Chile. O sea, desde la perspectiva de la historia social y del desarrollo de los movimientos sociales en Chile, la UP es, en primer lugar, una etapa de grandes movilizaciones sociales, pero, además en segundo lugar, de las mayores transformaciones en *las relaciones sociales de poder* que organizaban la *sociedad civil* en Chile. Sin

⁷⁵ Joaquín Duque y Ernesto Pastrana. "La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares de Chile: 1964-1972". *Revista latinoamericana de Ciencias Sociales*, FLACSO N° 4, 1972, pp. 259-293.

embargo, la mayor parte de los estudios y los análisis de la UP, se organizan en torno a la *sociedad política*, o sea, en relación al Estado, las dinámicas de la clase política, los partidos políticos y las instituciones, y por supuesto, los medios de comunicación, que fueron actores interesados en el conflicto, al punto que el Diario *El Mercurio* fue sostenido económicamente, en toda esta etapa, desde los Estados Unidos.⁷⁶

Los inicios del gobierno fueron francamente exitosos para la Unidad Popular, con la aplicación de una política redistributiva que mejoró los ingresos de la clase popular, la nacionalización del cobre, la construcción masiva de viviendas para el pueblo y un resultado electoral histórico que superó el 50% de los escrutinios en una elección municipal, en abril de 1971, y una larga y animada visita de Fidel Castro que recorrió el país de norte a sur. Sin embargo, cada tanto una conspiración cívico-militar ponía en alerta al gobierno, Estados Unidos reducía los créditos y manipulaba el precio del cobre, mientras que la oposición ensayaba un doble camino para debilitar la gestión de la Unidad Popular: por una parte, el boicot económico, y por otra, la obstrucción parlamentaria. Mediante el primero, se estimulaba el mercado negro y desabastecimiento de productos básicos, que se volvió inmanejable para el gobierno. Mediante el segundo, se acusaba constitucionalmente a los

⁷⁶ Para una mirada de conjunto y sistemática de la intervención norteamericana en Chile, debidamente actualizada, luego de la desclasificación de documentos de fines de los años 90, véase Peter Kornbluh: *Pinochet: los archivos secretos*. Barcelona: Editorial Crítica, 2004.

ministros de Allende, separándolos de sus cargos y obstaculizando la acción del ejecutivo. Esta doble estrategia de desestabilización sumó un tercer componente, que poco a poco se constituiría en el detonante de la crisis social y política, la acción callejera y el *lock out*, que tomó diversas formas, primero fue la "marcha de las cacerolas vacías" de las mujeres de la clase media; luego, las manifestaciones de estudiantes de oposición a la UP, hasta culminar, en octubre de 1972, en el denominado por la izquierda "paro patronal" (paralización y bloqueo de carreteras por los camioneros, apoyado por los gremios del transporte público y del comercio, así como por los "colegios profesionales" de médicos y abogados).

El "paro de octubre de 1972" marcó un verdadero punto de inflexión en el gobierno de Salvador Allende, haciendo visibles todos los límites del proyecto político de la Unidad Popular y los dilemas históricos de la izquierda. En efecto, en primer lugar, la oposición de centro derecha le disputaba a la izquierda sus clásicas formas de movilización callejera (constituyendo sus propios movimientos de orientación antisocialista); en segundo lugar, la burguesía recurría al paro como estrategia para desarticular la economía y movilizar a las clases medias propietarias y profesionales; en tercer lugar, el ejecutivo contaba con pocos recursos institucionales para hacer frente a un "paro" con visos insurreccionales. En este contexto crítico, la mayor respuesta al "paro de octubre" vino de los grupos sociales populares, que pusieron en movimiento las industrias sin sus dueños, articularon nuevas formas de distribución

de la producción y pusieron todos sus medios al servicio del transporte público. Pero en la epopeya de ganarle la mano a la oposición burguesa y de las clases medias no solo crearon nuevas formas de organización (comités de producción, comités de vigilancia, etc.), sino que trasladieron el programa de la Unidad Popular, ocupando más industrias que las que se preveía debían pasar al área social; aceleraron la reforma agraria y constituyeron Comandos Comunales Campesinos; disputaron la conducción de los dirigentes políticos y de la Central Única de Trabajadores e iniciaron procesos de vinculación con las organizaciones de pobladores y campesinos en sus territorios. Una respuesta exitosa, en un sentido, que se expresó como la emergencia y la demanda de un "poder popular", que no se encontraba o no coincidía necesariamente con los ritmos y con las estrategias de contención que ensayaba Allende en el Estado, que una vez conjurada la fase crítica del "paro de octubre" integró a un grupo de generales a su gabinete.

Las tensiones del proceso en curso y los dilemas que enfrentaba la Izquierda, tanto en el Estado como en sus propias bases sociales, la llevaron a separar aguas en un absurdo e insoluble dilema: "consolidar para avanzar" o "avanzar sin transar". La división de la izquierda, trágica por cierto si se juzga por lo que vino más tarde, daba cuenta de un proceso que resultaba difícil de articular para los partidos políticos: las lógicas y los ritmos del Estado versus las lógicas y los ritmos de los movimientos sociales. Los debates políticos devinieron entonces en debates ideológicos

y de principios, mientras "la realidad" seguía sus propios derroteros; la más importante de todas, la que el general Prats llamó más tarde la "vertebración institucional" del golpe de Estado.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 sorprendió a las fuerzas populares y a la izquierda sin lograr una salida a sus propios dilemas: ni salida por el Estado y el sistema político con una Democracia Cristiana que se negaba a negociar con Allende y la Unidad Popular; ni salida por la base, con un "poder popular" que representaba un conjunto de aprendizajes de autonomía social y política, pero que estaba lejos de constituir un poder alternativo, capaz de enfrentar la asonada golpista. Esta, muy pronto actuaría en los dos frentes, el del Estado de derecho, destruyéndolo, y de las organizaciones populares reprimiéndolas sin límite. De este modo, la derrota de la izquierda y los movimientos sociales fue estratégica, al quedar sin capacidad de acción sobre el Estado y con débiles capacidades de autodefensa, que no fuere la sobrevivencia social (el repliegue sobre la familia y redes de solidaridad popular) y la sobrevivencia política de los militantes que lograron generar alguna forma de clandestinidad o semiclandestinidad.

Los "nuevos" movimientos sociales y la lucha en contra de la dictadura

La dictadura destruyó la democracia alcanzada hasta esos años, en todas sus formas, cancelando las libertades y derechos ciudadanos, cerrando el Parlamento, declarando

en receso a los partidos políticos, suspendiendo el Código del Trabajo, estableciendo control sobre los pocos medios de comunicación permitidos, pero sobre todo, reprimiendo y anulando toda acción posible de los partidos de izquierda y los movimientos sociales populares. Las fuerzas armadas coparon entonces ciudades y pueblos a lo largo y ancho del país para disciplinar al pueblo a través del terror como arma de acción política. Allanamientos a fábricas, universidades y barrios populares, con ejecuciones en la vía pública, tratos crueles y humillantes y la detención de miles de chilenos en estadios, regimientos, bases navales y otros recintos militares y policiales. Se estima que en los primeros tres años de dictadura el número de detenidos alcanzó a unas 82 mil personas. Por otra parte, el número de víctimas, de acuerdo con el Informe Rettig y el posterior trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, ha permitido acreditar un total de 2.905 muertos y detenidos desaparecidos por obra de agentes del Estado, datos aún incompletos, si se tiene en cuenta que en muchos casos los familiares no han informado o no cuentan con los datos suficientes que permitan acreditar la muerte o desaparición de sus cercanos. Por esta razón, el historiador norteamericano Steve Stern, que ha hecho notables contribuciones al estudio de la memoria en Chile, sugiere que siguiendo una metodología conservadora, se puede estimar entre 3.500 y 4.500 el número de muertes y desapariciones.⁷⁷ Finalmente, en relación a la tortura,

⁷⁷ Steve Stern. *Recordando el Chile de Pinochet. En vísperas de Londres* 1998. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2009, p. 202.

recientemente en el 2005, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura acreditó un total de 27.255 víctimas, la mayor parte de ellas perpetradas en los primeros años de la dictadura, pero que recrudecieron en los años ochenta, en medio de las "protestas nacionales".

En este crudo y adverso panorama, el movimiento popular tomó años en rearticularse y elaborar respuestas para la nueva situación creada por la dictadura. La mayor novedad, sin embargo, es que nuevos movimientos y nuevas prácticas asociativas comenzaron a abrirse paso lentamente en las poblaciones populares y entre los sectores medios, que contaron con el apoyo de las Iglesias Cristianas, las ONG y los partidos políticos que lograban reorganizarse en la clandestinidad. Como indicamos en un trabajo anterior:

Entre los nuevos movimientos, las Agrupaciones de Víctimas de la Represión, las Iglesias cristianas y profesionales de clase media fueron fundamentales para el desarrollo de un movimiento de Derechos Humanos; los pobladores animaron variados movimientos culturales juveniles, así como de comunidades cristianas de base; profesionales de clase media y diversas organizaciones de mujeres de población fueron también fundamentales para el desarrollo de un "movimiento de mujeres", ahora con poderosos contenidos feministas; finalmente, el sindicalismo, en medio de enormes dificultades —provenientes tanto de la represión como del nuevo modelo de desarrollo neoliberal—, buscó nuevas formas asociativas y hacer también visible su malestar.⁷⁸

Mario Garcés. *Chilean social movements*. Op. cit., p. 230.

En suma, una vez más la “sociedad civil” se mostró como un espacio diverso y creativo para rearticular el “tejido social”, roto por la dictadura, y preparar los nuevos combates en contra del autoritarismo.

Desde el punto de vista de las capacidades asociativas y de los movimientos sociales, se pueden distinguir diversas fases de resistencia, oposición y lucha en contra de la dictadura. Una primera fase, entre 1973 y 1978 aproximadamente, de repliegue y solidaridad con los perseguidos y los que perdían sus empleos. Las Iglesias jugaron aquí un papel fundamental a través del Comité Por Paz, para apoyar a los extranjeros residentes en el país, que eran víctimas de una campaña xenófoba por parte de los militares (se crearon refugios en locales de la Iglesia Católica, mientras se les reubicaba en otros países); a ello se sumaban los primeros recursos de amparo por quienes sufrían detención y se les perdía el paradero, y el apoyo social a los más pobres. La Iglesia, de hecho, creó programas de apoyo alimenticio (comedores infantiles); programas de salud, de apoyo escolar, para los desempleados (talleres y bolsas de cesantes), diversas iniciativas que iban reconstruyendo las redes sociales en las poblaciones.

Junto a la acción de la Iglesia, que además actuaba como “espacio” en donde reencontrarse, fueron surgiendo o reencontrando otros grupos, centros juveniles y culturales, agrupaciones informales de trabajadores y de militantes de la Izquierda, todos los cuales comenzaron a convivir en las “comunidades cristianas populares”. En 1978, estas informales redes sociales pudieron reconocerse

en la solidaridad con las huelgas de hambre de la Agrupación de Familiares de los Detenidos Desaparecidos y en la celebración del 1º de Mayo de esos mismos años. Eran tiempos difíciles, pero sin embargo pequeños grupos podían hacer ya visibles el descontento y el malestar.

Una segunda etapa es la que va desde 1978 a 1983, en que sin dudas el régimen militar se propuso las mayores transformaciones económicas y políticas. Desde los anuncios de Pinochet en el cerro Chacarillas, en que planteó la creación de un nuevo régimen político que definió como “una democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”, pasando por la dictación de una nueva Constitución Política, en 1980, hasta la puesta en marcha de las denominadas “modernizaciones”, que no eran otra cosa que la aplicación del más completo programa neoliberal (apertura al comercio exterior; privatización de los servicios públicos —salud, educación y transporte—, descentralización autoritaria del Estado o municipalización, y la más completa transformación del sistema de relaciones laborales, que abrían paso a la liberalización y flexibilización del mercado laboral). En esta etapa, los movimientos de base y los partidos políticos lograron hacer visibles diversas acciones, como los “caceroleos” en El Teniente; la “huelga de Panal”; los primeros movimientos estudiantiles en la Universidad de Chile; la ampliación de redes e intercambios en el ámbito poblacional, con fuerte protagonismo de las ONG, los educadores populares y las comunidades cristianas. Los diversos actores implicados en esta etapa, en que se

comenzó a hablar del "fin del reflujo", se movieron en distintas direcciones: los educadores populares apostaron a la "reconstrucción del tejido social" y la emergencia de un nuevo protagonismo popular, mientras que en el plano de los partidos políticos se ponían en movimiento dos procesos: el de la Renovación Socialista, que junto con evaluar críticamente el pasado y poner en valor la democracia, se proponía la generación de nuevas alianzas políticas (que en el mediano plazo, hacia fines de los 80, llevarían a los socialistas a ser parte de la Concertación de Partidos por la Democracia) y el "giro comunista", que ya frente al fraudulento plebiscito de 1980, se pronunció por validar "todas las formas de lucha", y el "derecho a la rebelión" que en el corto plazo los llevaría a la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, hacia fines de 1983.

Una tercera etapa de acción y movilización, ahora sí de carácter nacional, es la que se comenzó a constituir con la convocatoria a las Protestas Nacionales, a partir de mayo de 1983. Un congreso de trabajadores del cobre, realizado en el verano de 1983, había llegado al convencimiento de que no bastaba "una ley más o una ley menos" para resolver sus problemas, en medio de la nueva legislación laboral. Se requería de una acción más contundente, que hiciera posible la recuperación de la democracia. Había que ir hacia la paralización de actividades, audaz resolución que no era fácil de consensuar entre todas las zonales del cobre ni con las federaciones y agrupaciones sindicales. El resultado fue que de "paro" se fue evolucionando a una idea más vaga de convocar a una "protesta nacional" para

hacer visible el malestar acumulado por la sociedad. Y contra todo lo previsto, el llamado a protestar fue exitoso tanto en la forma como en la magnitud del movimiento. En la forma, había que evitar la confrontación, razón por la cual se invitó a no enviar a los niños al colegio, no hacer trámites en el centro y hacer sonar las cacerolas a partir de las 20:00 horas en los propios domicilios. Una convocatoria sencilla pero eficiente, ya que logró que vastos sectores se expresaran sin mayores riesgos represivos, y de paso generara un fenómeno no previsto de "comunicación social" de gran envergadura, cuando los ruidos se multiplicaron en la noche y se podía conocer la actitud política del vecino, de la cuadra y del barrio. Otro efecto no previsto fue que los aparatos represivos fueron lo suficientemente sorprendidos y no pudieron evitar diversas manifestaciones públicas en el centro de la ciudad, las universidades y sobre todo en los barrios durante la noche, pero no solo en los barrios populares, sino que también en barrios de clase media, como en Providencia, Ñuñoa y La Reina.

El éxito alcanzado en la Primera Protesta, inauguró un ciclo de movilizaciones que sumó 22 jornadas de "protestas", entre 1983 y 1987. Los sectores sociales implicados que se pusieron en movimiento fueron diversos: estudiantes universitarios, trabajadores, profesionales de la clase media, pero sobre todos los "pobladores" de los barrios populares de Santiago, especialmente jóvenes y mujeres de pueblo. En realidad, la protesta social fue siempre más amplia y masiva en las poblaciones; en especial, cuando los jóvenes descubrieron que podían establecer mayor

control sobre sus acciones o enfrentar en mejores condiciones a la policía y los militares en sus propios territorios. La "protesta" en las poblaciones no era solo "caceroleo" o toque de bocinas de los automóviles, como en los barrios de la clase media, sino que también marchas, fogatas, barricadas, cortes de luz, paralización del transporte público; en algunos casos, saqueo al comercio local, pero sobre todo enfrentamientos con la policía y en algunos casos con el Ejército.

Durante las jornadas de protesta, que podían durar de uno hasta tres o cuatro días, en su fase más activa, la ciudad de Santiago y las capitales de provincias veían completamente alterada su cotidianidad:

En el caso de Santiago, durante la mañana, mientras carreteras y rotondas amanecían copadas militarmente, disminuía sensiblemente la actividad comercial y escolar, y el transporte público iniciaba sus recorridos más tarde que lo habitual. Al mediodía, las manifestaciones de la Oposición (marchas *sitting*, etc.) se multiplicaban en las universidades y en el centro de la ciudad, a las que Carabineros respondía atacando mediante gases, golpizas, perros amestrados, con carros lanzaaguas ("el guanaco") y lanzagases ("el zorrillo") y deteniendo al mayor número de manifestantes. Y cuando caía la tarde, se hacía crítica la disminución de la locomoción colectiva, la que definitivamente retiraba de circulación sus vehículos; el comercio cerraba también sus puertas y las oficinas públicas y las empresas se veían obligadas a autorizar el retiro de sus funcionarios a tempranas horas.

Al llegar la noche finalmente, la protesta alcanzaba su clímax en los barrios y poblaciones. A estas horas, el sonar

de objetos metálicos recorría extensas zonas de la ciudad, mientras jóvenes pobladores salían a las calles para organizar marchas y desfiles, levantar barricadas y fogatas con neumáticos viejos y enfrentarse a las fuerzas militares y policiales que atacaban y reprimían sus iniciativas. Buses y tanquetas de carabineros, así como jeeps de militares recorrían las calles lanzando bombas lacrimógenas y disparando balines, pedrigones y ráfagas de grueso calibre—en algunos casos—sobre los manifestantes, las barricadas y también las viviendas. Los jóvenes respondían a estos ataques con pedradas, objetos contundentes—bombas molotov en algunos lugares—y gritos y consignas, que era lo que más abundaba. Civiles no identificados, de los aparatos de seguridad del régimen, aprovechaban también la oscuridad de la noche para disparar a mansalva sobre los manifestantes, ocasionando de este modo el mayor número de víctimas fatales.⁷⁹

La represión se fue incrementando a medida que la protesta crecía, especialmente durante 1983, alcanzando su punto más alto la represión en agosto de 1983, cuando Pinochet dispuso que 18 mil uniformados patrullaran la ciudad de Santiago y toque de queda a las 18 horas. En esa ocasión, los ataques y allanamientos a las poblaciones produjeron 29 muertos, un centenar de heridos y un millar de detenidos.⁸⁰

⁷⁹ Mario Garcés y Nancy Nicholls. *Para una historia de los Derechos Humanos en Chile*. Santiago: LOM, 2005, p. 148.

⁸⁰ El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (también conocido como Informe Rettig) reconoció para el período 1983-1985 un total de "141 situaciones relativas a personas fallecidas a consecuencia de hechos ocurridos en días de manifestaciones políticas colectivas". Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo 2, p. 701.

La protesta social de los ochenta era expresiva del descontento y del rechazo que provocaba la dictadura —que ejercía un poder sin límites— pero al mismo tiempo de los estragos sociales que provocaban las medidas neoliberales, que se hacían más agudas en medio de una crisis que se inició en el segundo semestre de 1982, cuando el sistema bancario se volvió insolvente y el Estado fue en su auxilio, las empresas que habían sobrevivido a las políticas de ajuste quebraron, la moneda fue devaluada y el desempleo superó el 20% de la fuerza de trabajo.

Las Protestas Nacionales de 1983-1986 modificaron por completo el cuadro político dictatorial y prepararon el retorno de la democracia. Este fue, sin embargo, un proceso largo y complejo, que dio cuenta de la emergencia de “nuevos” movimientos sociales y de una reorganización de los partidos políticos, que disputaron y terminaron por imponer sus propias formas para hacer la transición a la democracia.

Desde el punto de vista social, la protesta fue amplia y diversa en sus orígenes, pero en la medida que la represión persistía y se endurecía, se fue concentrando en las poblaciones. En estos espacios, quienes más se movilizaban eran los jóvenes y las mujeres que ingresaban a las luchas sociales y políticas. Los movimientos más tradicionales, de obreros y campesinos, se hallaban francamente debilitados, tanto por efectos de la represión como por el nuevo modelo neoliberal, que había desindustrializado el país y transformado las relaciones de producción en el campo. Por su parte, los nuevos actores que surgían

entre los pobladores habían multiplicado sus iniciativas de asociación. Así lo confirmaba ECO*, cuando buscó realizar un balance de la organización popular durante los años ochenta:

- Redes de economía popular, conocidas como Organizaciones Económico-Populares, Ollas Comunes, Comprando Juntos, Huertos Familiares, Talleres para el Consumo, Organizaciones de Vivienda, Grupos de Salud, que beneficiaban a más de 100 mil personas.
- Comunidades Cristianas de Base en los más diversos barrios pobres de Santiago, organizadas en una Coordinadora de Comunidades Cristianas y un Movimiento de Laicos, que reunía a unas 8 mil personas cada año en la conmemoración del “Vía Crucis” cristiano.
- Iniciativas y movimiento de Derechos Humanos, que emergieron a partir de las Iglesias Cristianas (Vicaría de la Solidaridad y FASIC), las Agrupaciones de Víctimas de la Represión, el comité de defensa de los derechos del pueblo, CODEPU, y los Comités de Base vinculados a la Comisión Chilena de los DDHH.
- Movimiento de Mujeres, que articulaba a diversas organizaciones sociales, como el MEMCH, alianzas políticas “Mujeres por la Vida”, ONG, coordinadoras sectoriales en los barrios y comunas populares.

ECO, Educación y Comunicaciones, ONG que trabaja desde 1980 con organizaciones sociales de base. Interviene en la acción educativa, la comunicación y la investigación en Ciencias Sociales, con el fin de apoyar el fortalecimiento de la organización social y la presencia del mundo popular.

- Movimientos juveniles, como el Movimiento Juvenil Poblacional (MJL), de instalación más difusa en el sentido de la "juventud popular", pero que contaba con coordinaciones bien articuladas en la zona sur de Santiago (La Granja, San Ramón, La Pintana).

- El movimiento poblacional en sentido amplio, que logró una importante articulación en el CUP, Comando Unitario de Pobladores, que hacia mediados de los 80 estimaba en unos 3.000 los dirigentes agrupados en alguna coordinadora poblacional y en unas 200 mil las personas organizadas.⁸¹

La mayor dificultad de estas diversas dinámicas movi-mientistas es que no lograron proyectar políticamente sus demandas y sus proyectos de cambio social. Animaron y dieron vida a la protesta social en los barrios y poblacio-nes al igual que los estudiantes y los trabajadores, que jugaron un papel más débil en las movilizaciones, sobre todo estos últimos, pero no lograron constituir o incidir en las "propuestas políticas" que emergieron al calor de las protestas nacionales.⁸² En efecto, el reordenamiento del cuadro político entre los opositores a la dictadura tendió a estructurarse en torno a dos bloques políticos: la Alianza Democrática (AD) y el Movimiento Democrático Popular (MDP), que daban cuenta de dos orientaciones estratégicas divergentes. Mientras la AD se proponía es-timular la movilización para abrir diálogo político con la

dictadura y negociar una salida pactada para el retorno a la democracia, el MDP postulaba la necesidad de ampliar y radicalizar la movilización, recurriendo a todas las fór-mas de lucha, hasta dar paso a una "rebelión aguda de masas" que derribara a la dictadura. Esquemáticamente, en el primer caso, al pueblo no le tocaba más papel que seguir a sus dirigentes democráticos, en roles claramente secundarios (cuyos resultados se verían en el largo plazo con la Concertación); en el segundo, sumarse a las luchas y las propuestas de cambios revolucionarios al que los conduciría la vanguardia, esta vez un PC que dejaba atrás su pasado reformista.

Una vez más, como en el pasado, había que escoger bien las vías o los caminos para poner fin a la dictadura, dejando en un manifiesto segundo plano las propias expe-riencias de organización y de proyectos de cambio social que venían madurando en las prácticas de las organiza-ciones populares: dinámicas de economía popular, nuevas relaciones de género, creación cultural, democracia local, defensa de los DDHH, nuevas relaciones con el medio ambiente, educación popular, etc.

El viejo y reiterado problema de articular los ritmos, contenidos y aspiraciones de las bases con las represen-taciones político-partidarias volvía a manifestarse como en el pasado, aunque ahora con nuevos actores, mucho más diversificados y con un fuerte arraigo local y territo-rial. Las relaciones entre lo social y lo político, que podían confluir en el momento de la movilización, no seguían un curso semejante en el momento de las propuestas políticas

⁸¹ Taller de Análisis de Movimientos Sociales y Coyuntura, Nº 1, ECO, Educación y Comunicaciones, enero de 1988.

⁸² Conzalo de la Maza y Mario Garcés. *La explosión de las mayorías. Protesta Nacional, 1983-1984*. Santiago: ECO, 1985, p. 102.

que buscaban afectar al Estado y el orden político. Y cuando las movilizaciones no lograban derribar a la dictadura porque el régimen se atrincheraba haciendo recrudescer la represión y la línea de confrontación del PC no alcanzaba todos los rendimientos esperados, entonces la AD encontró un camino favorable para imponer su política de transitar por la propia institucionalidad prescrita por los militares. En realidad, ya en 1983, cuando el ministro Jarpa abrió diálogo con la AD y se negó a poner en discusión siquiera la continuidad de Pinochet, se insinuó que la transición debía hacerse sin tocar la legitimidad de la Constitución de 1980.⁸³ La AD podía ahora hacer ese camino, pero necesitaba realizar una operación política, que sus dirigentes vieron como imprescindible: había que transformar la “movilización social” en “movilización político-electoral”, con un candidato incluido. Se preparaban entonces las condiciones para participar en el plebiscito de 1988, que animó grandes movilizaciones callejeras y de propaganda, pero donde el pueblo y los movimientos sociales jugarían roles secundarios, depositando su confianza en una clase política debidamente reconstituida, que pronto retornaría al Estado para conducir el proceso de recuperación democrática. Un proceso en el cual la política se fue haciendo un oficio de representación, con fuertes formas mediáticas, pero manifestamente distante de la sociedad civil, es decir de los movimientos sociales y de la vida cotidiana de la gente. Una transición política con altas cuotas

⁸³ Rafael Orano. *Nueva crónica de la transición*. Santiago: LOM (segunda edición), 2006, p. 17 (primera edición, Planeta, 1995).

de realismo y acomodos en el poder, pero con muy poco de “transición social” que favoreciera procesos sustantivos de auténtica democratización de la sociedad. Los límites de esta transición son los que el 2011 se han tomado las calles para cambiar el sistema educativo nacional, pero ahora con el retorno de los porfiados “movimientos sociales”.

Capítulo V

¿El futuro del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales en Chile?

El futuro del movimiento estudiantil, que se iniciara en mayo de 2011, es difícil de predecir, ya que aún se encuentra en desarrollo. Sin embargo, algunos hechos se han ido imponiendo y ciertas tendencias históricas parecieran reemerger bajo nuevas formas y nuevos actores. El primer hecho macizo es que el movimiento, en sus fases iniciales, tendió al crecimiento tanto en sus demandas y adherentes como en el impacto en la sociedad chilena. Me parece que no hay dudas de que se ha tratado del movimiento social más significativo de los últimos veinte años de la historia chilena. En el lenguaje sísmológico, que cada tanto usamos los chilenos, este movimiento ha sido algo así como una placa tectónica que acumuló fuerzas sociales durante años, hasta romper todas las inercias conocidas y, en cierto sentido, establecidas por la transición concertacionista. En pocas palabras, este movimiento cierra la transición a la democracia organizada por la Concertación y abre un nuevo ciclo social y político.

Aún más, con relación al impacto del movimiento estudiantil del 2011, habría que indicar que opera como expresión visible del malestar acumulado por la sociedad bajo el imperio de las políticas neoliberales. Desigualdad y distanciamiento social, endeudamiento, velada o abierta discriminación de los más pobres, mercantilización

del conjunto de las relaciones sociales, pero sobre todo, bloqueo al desarrollo de las nuevas generaciones de jóvenes, parecen ser algunas de las razones que mueven a los estudiantes y a quienes adhieren con ellos. Tal vez con una cuota de optimismo histórico, los chilenos estamos iniciando una nueva etapa de nuestra historia: la del post neoliberalismo que muchos de nuestros países hermanos en América Latina ya han iniciado.

Sin embargo, antes de imaginar los cursos futuros de la política chilena, es necesario insistir sobre los logros y también los límites del movimiento estudiantil. Tal vez, el principal logro del movimiento es que puso al centro del debate la necesidad de reformas al propio sistema educativo nacional, moldeado en claves neoliberales, es decir como fuente de negocios. Al oponer una noción de "derechos", los estudiantes cuestionaron el conjunto del sistema educativo —por ello, plantean reformas estructurales—, pero, llegado a este punto, en la medida que confrontan a un gobierno de derecha, de orientación neoliberal, las luchas de los estudiantes trascienden su campo específico —la educación— e ingresan al campo de las luchas políticas en un sentido más amplio. Podríamos formular lo aún de otra manera: en la medida que los estudiantes ponen en cuestión las "bases" mismas del actual sistema educativo, sus luchas adquieren un carácter antististémico, es decir, anti-modelo neoliberal, pero la oposición podría extenderse aun más, y como algunos insisten, entender al movimiento estudiantil como parte de una lucha anti-capitalista. Esta perspectiva complejiza las cosas y pone

a los estudiantes ante un desafío que probablemente los supere, no en sus capacidades y deseos de un cambio mayor de la sociedad chilena, sino porque supone otras tareas, sumar a otros actores y movimientos sociales, que en conjunto sean capaces de producir cambios políticos mayores, pero también colaborar en el desarrollo de iniciativas que contribuyan a hacer surgir las formas de una sociedad alternativa a la existente.

Ciertamente, la dinámica que ha adquirido el movimiento estudiantil, con ya seis meses de movilizaciones, no está determinada solo por sus acciones (y su "voluntad" de lucha), sino por las respuestas que encuentran en el gobierno y el actual sistema político. El gobierno es refractario al cambio de fondo en el sistema educativo; en consecuencia, refractario al movimiento estudiantil, y todas sus cartas se han inscrito en la dirección de dilatar las soluciones, desgastar al movimiento e introducir mejoras parciales que mejoren su imagen pública y atiendan, en algún grado, el descontento de la endeudada clase media. Por su parte, las instituciones y, en un sentido más amplio, el sistema político tampoco favorecen a los estudiantes, ya que producir reformas depende en gran medida del Ejecutivo o de mayorías parlamentarias inviables con el actual sistema binominal. En este contexto, el margen de negociación y de logro se estrecha para los estudiantes, ya que las reformas que se pueden alcanzar son parciales y están lejos de sus propuestas de cambio estructural, lo que se revierte sobre el propio movimiento en una doble perspectiva, que puede llevarlo

a: 1) radicalizar el movimiento y prepararse, como indicó uno de sus dirigentes, una vez fracasado el diálogo con el gobierno, para "tiempos difíciles"; 2) ampliar el campo de las alianzas, sumando más activamente a otros sectores de la sociedad. Estas opciones no son necesariamente contradictorias, pero colocan un tercer problema, tanto más difícil de encarar y resolver, este es el relativo a las propias capacidades "movimentistas" de los estudiantes.

Los estudiantes han mostrado una enorme energía, compromiso, creatividad y capacidad para persistir en sus movilizaciones. Ello representa, a mi juicio, un valor absoluto. Es más, me parece que los estudiantes, junto a su aguda percepción de sus problemas y del momento escogido para actuar, parecieran encarnar una novedad "generacional". Ya no son los "hijos de la dictadura", sino que los "hijos de la transición", es decir, de una democracia a medio camino o en "la medida de lo posible" para la propia élite, pero no para la sociedad civil.

Es altamente novedoso e interpelador para los chilenos que hayan sido los más jóvenes, los que necesitan construir algún futuro, los que hayan constituido el más vigoroso movimiento social antineoliberal luego de veinte años de administración de la herencia dictatorial. Sin embargo, reconocidos todos los méritos del movimiento, en su propio desarrollo han crecido los desafíos, que interrogan, como adelantábamos, las propias capacidades del mismo. Esto quiere decir, que interroga las tácticas y estrategias de cara al curso político probable del movimiento, lo que inevitablemente agudiza las diferencias entre los propios

estudiantes, diferencias que además dan cuenta de las diversas corrientes y tradiciones políticas nacionales (unos más reformistas, otros más revolucionarios, unos más moderados, otros más radicales, unos más negociadores, otros más confrontacionales, etc.). Estas diferencias, sin embargo, que parecen ocupar el centro de muchos debates, esconden o evitan enfrentar un problema más de fondo: las demandas de los estudiantes son tremendamente dependientes del sistema político vigente, incluso más, de la voluntad de producir cambios desde el propio Ejecutivo, en manos de la derecha política.

La pregunta que entones hay que hacerse, es la siguiente: ¿Puede el movimiento estudiantil producir cambios en el sistema educativo nacional independientemente del gobierno? ¿De qué naturaleza serían esos cambios? Si nos hacemos cargo de las metas que se han propuesto los estudiantes, como el fin del lucro, la gratuidad, la desmunicipalización, etc., muchas de ellas no son posibles sin cambios en el Estado, pero hay zonas en que sí los estudiantes pueden provocar cambios recurriendo a sus propias capacidades. Pienso, por ejemplo, en los asuntos relativos al "gobierno universitario", retomando los avances de la reforma universitaria de los años sesenta, cancelados en la dictadura (la participación tri-estamental, las relaciones con el medio social y más ampliamente de la universidad con la sociedad, la "extensión" universitaria, el debate curricular, etc.); también se puede pensar en ir estableciendo, tanto en la educación media como universitaria, criterios y formas de control público —desde

los propios estudiantes, los padres y la comunidad local, relativos a la gestión y la calidad de la educación que hoy se imparte—. En suma, se trataría de admitir que el cambio del sistema educativo nacional no solo depende de las formas de financiamiento y de las políticas públicas, sino que también de la definición de sus sentidos y de sus formas de gestión en la que los estudiantes sí pueden intervenir. Pero no se trataría solo de que el movimiento se vuelque hacia adentro de las aulas, campus universitarios, escuelas y liceos, para cambiar lo que sí el movimiento puede cambiar, sino que también estimular y sumar aliados: a) para dar continuidad a las luchas frente al Estado por la Educación Pública, gratuita y de calidad; y b) para hacer crecer las luchas por un cambio político mayor, aquel que haga posible la reforma del sistema político, a través de un proceso que tienda —como han propuesto diversos actores— al desarrollo de un “proceso constituyente” que permita, por una vez en la historia de Chile, un auténtico y genuino ejercicio de soberanía popular y nacional a través de una Asamblea Constituyente.

Ciertamente, en el campo de la política, todo está sometido al debate y depende de los actores institucionales y no institucionales, formales o informales, las decisiones que tomen y busquen poner en práctica. En este sentido, mi punto de vista sobre el movimiento estudiantil no tiene más valor que el de un punto de vista que puede ser contrastado con otros más eficientes y realistas. Con todo, me he atrevido a sugerir pistas de salida o nuevos desarrollos del movimiento estudiantil atendiendo a una reflexión de

tipo histórico: los movimientos que no desarrollan capacidades propias para producir cambios en las relaciones de poder —local, sectorial, regional o nacional— terminan siendo dependientes del poder político institucional y pueden agotar sus energías en esa confrontación. Sin embargo, los movimientos que pueden sostener sus luchas por largos períodos son aquellos que desarrollan capacidades propias para producir cambios sociales aun *antes o independientemente* de las instituciones políticas dominantes.

Tal vez un ejemplo de nuestra propia historia reciente puede ilustrar mi argumento: el movimiento de pobladores en Chile, que ha recorrido diversas etapas, alcanzó una fase culminante en sus luchas por la vivienda en el ciclo 1957-1973, cuando miles de chilenos pobres buscaron con ahínco y esfuerzo conseguir un sitio o una casa propia. Se organizaron en Comités de Sin Casa, contaron con el apoyo y como aliados a los partidos políticos y la Iglesia, pero lo más importante es que fueron capaces de presionar al Estado para que estableciera “planes nacionales de vivienda”. Sin embargo, si el Estado no lo hacía, los pobladores “tomaban sitios”, es decir, ellos mismos podían iniciar la construcción de sus poblaciones. La Victoria dio el ejemplo, en 1957, cuando “la toma” resultó exitosa, en el sentido de que el gobierno no los pudo desalojar, y los pobladores, con escasos recursos y variados esfuerzos, se dieron a la tarea de levantar la Población. Allí se produjo un giro histórico, que dio pistas al movimiento e hizo emerger una nueva identidad entre los pobres de la ciudad. Más tarde, Alessandri inició los mayores planes masivos de vivienda,

en 1959, pero no alcanzaban para absorber el abultado déficit de vivienda popular; entonces se produjo la toma de Santa Adriana en 1961. Y la historia continuó: Frei creó nuevos y mayores planes de vivienda, en 1965, que también se mostraron insuficientes; entonces se generó el mayor ciclo de tomas, desde Herminda de la Victoria, en 1967, hasta Villa El Rodeo, en Huechuraba, en 1973.

Cuando Allende asumió en 1970, cerca del 20% de los santiaguinos pobres vivían en campamentos resultados de tomas u operaciones sitios (según estudios de la época, unas 312 tomas se produjeron solo en Santiago entre 1969 y 1971). A estas alturas, la capital había sido transformada y nuevos barrios populares, con viviendas definitivas, estaban surgiendo en los cuatro puntos cardinales de ella. El movimiento se había desenvuelto en una doble dirección: hacia el Estado y hacia sí mismos. Es verdad que el Estado fue más poroso y atendió más la demanda de los pobladores, tanto que hasta el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo se creó en medio de las movilizaciones de los pobladores, pero la capacidades de acción propia de los pobladores fueron fundamentales para sus grandes logros. Dejar atrás los conventillos, las poblaciones callampas, el subarriendo o la condición de “allegados”. Este mismo pueblo, que había conseguido “un lugar en la ciudad y en la sociedad”, fue el mayor escollo para la dictadura y fue el que mayor resistencia opuso al régimen militar, cuando se pusieron en marchas las “Protestas Nacionales”, entre 1983 y 1986, que prepararon el retorno a la democracia.

En el caso de América Latina, la tendencia de muchos movimientos sociales ha venido siguiendo estos derroteros, de acuerdo, por cierto, a las especificidades de cada contexto social y político. Los Sin Tierra del Brasil toman tierras y crean campamentos para organizar la producción, pero también crean escuelas y sistemas de salud, que administra y gestiona el propio movimiento. Los piqueteros, en sus fases iniciales al menos, demandaban “Planes Trabajar” para organizar ellos mismos en cada localidad programas de trabajo, atendiendo a la situación de los desempleados. Los movimientos campesinos e indígenas bolivianos derribaron gobiernos hasta instalar su propio presidente y una Asamblea Constituyente, que cambió el curso de la historia de este país hermano.

Un segundo problema que han enfrentado diversos movimientos sociales en los últimos años se relaciona con su autonomía y con la constitución de sus propias formas de “representación social y política”. Por cierto, este es un problema tanto más complejo porque interroga las relaciones que tradicionalmente se han establecido entre los movimientos sociales y el sistema político. En la tradición latinoamericana hay mucho que estudiar y que aprender, pero en el caso chileno, la tradición tendió a constituir, sobre todo en el período 1932-1973, a los partidos políticos como el principal “representante” de las clases, los grupos sociales y sus demandas. Esta tendencia si bien se quebró en el tiempo de la dictadura, se mantuvo como tradición y de hecho la transición a la democracia, si bien tuvo su origen en la protesta social de los ochenta, fue organizada y

conducida por el sistema de partidos. La transición, por su parte, tomó tanta distancia de la sociedad, que sobrevino el descrédito de los partidos y de "los políticos". Este no ha sido un dato menor para los estudiantes movilizados, cuya mayoría desconfía y no confía en los partidos políticos. En consecuencia, si la representación política no debe quedar en manos de los partidos políticos, queda abierta la pregunta de quién y cómo se constituye una representación política de los movimientos sociales.

Una respuesta posible a ese problema, que está presente en nuestra cultura política, es que si un movimiento social busca producir transformaciones revolucionarias, entonces requiere de la constitución de una "organización política revolucionaria", o sea "un partido revolucionario". Volvemos a la tradición, pero con una distinción, no se trata de un partido sistémico, sino que de un partido antisistémico. Esta perspectiva, aceptada por muchos como un axioma, representa al menos dos problemas: por una parte, que se trata de una historia conocida, hemos contado con asociaciones de revolucionarios o partidos revolucionarios, en los años veinte, pero sobre todo en los sesenta, incluso en los años ochenta, y todos ellos, por diversas razones, no hicieron la revolución, no triunfaron, fueron derrotados. En los años sesenta y setenta, esta situación no solo se dio en Chile, sino que también en Argentina y Uruguay, y en ambos casos, la revolución tampoco triunfó. Evidentemente requerimos estudiar estas situaciones —en Argentina hay decenas de estudios y publicaciones a este respecto; en Chile, muy pocas— pero se puede adelantar

que los problemas de las vanguardias sesentistas no fueron problemas de "voluntad revolucionaria" (la hubo y de sobra); tampoco de debilidades ideológicas (tal vez hubo una sobreideologización), menos de compromiso con la causa (muchos jóvenes sesentistas se hicieron profesionales de la revolución). Entonces, ¿los problemas que las vanguardias revolucionarias no resolvieron no fue acaso su relación de representación con los sujetos y grupos sociales que debían protagonizar la revolución?

Pero hay un segundo problema tan agudo y complejo como el anterior. El modelo y el axioma de que la revolución requiere de una "organización de revolucionarios" proviene de la experiencia bolchevique, la primera revolución socialista triunfante en el siglo XX. Sin embargo, tanto en el caso soviético como en otras revoluciones socialistas triunfantes, la organización de los revolucionarios condujo al "partido-Estado" a terminar ahogando a la sociedad y negando los ideales emancipatorios del socialismo. Su peor versión es, por cierto, el de la propia Unión Soviética, bajo Stalin, que no solo eliminó a millones de ciudadanos, sino que a todo el Comité Central del partido revolucionario que hizo la primera revolución socialista en el mundo. Es verdad que más de una vez la revolución devora a sus hijos, sin embargo ¿era ello inevitable? Pero, agreguemos todavía, ¿es posible seguir pensando una sociedad alternativa sin hacernos cargo de este hecho catastrófico? Tal vez hay que admitir que tenía razón Rosa Luxemburgo cuando, junto con saludar el triunfo de la revolución bolchevique, advertía a Lenin y a Trotsky, a propósito de la disolución de la Asamblea Constituyente, en noviembre de 1917:

Con toda seguridad, toda institución democrática tiene límites e inconvenientes, lo que indudablemente sucede con todas las instituciones humanas. Pero el remedio que encontraron Lenin y Trotsky, la eliminación de la democracia como tal, es peor que la enfermedad que se supone van a curar, pues detiene la única fuente viva de la cual puede surgir el correctivo a todos los males imatos de las instituciones sociales. Esa fuente es la vida política activa, sin trabas, enérgica, de las más amplias masas populares.⁸⁴

Si el resultado conocido de las revoluciones socialistas, que fueron posibles por la existencia de "una organización política revolucionaria", condujo a la dictadura del partido-Estado o a la centralización en el Estado de todas las decisiones y el quehacer político (haciendo inevitable el predominio de la "razón de Estado"), algo no funciona, o algo funciona mal, pues ese resultado es justamente la negación de "la vida política activa, sin trabas, enérgica, de las más amplias masas populares". En suma, no parece posible, a estas alturas de la historia, separar el camino de la revolución de sus instrumentos. La revolución y el cambio social, siguiendo la aguda observación de Rosa Luxemburgo, ya no puede ser pensada centralmente asociada a la existencia de una "organización política revolucionaria", sino que a "la vida activa" de los más diversos actores sociales y políticos interesados en el cambio.

Entonces, la cuestión de la "representación social y política" de los movimientos sociales sigue siendo un

⁸⁴ Rosa Luxemburgo. "La Revolución Rusa", en: *Obras Escogidas*, Buenos Aires: Antídoto, pp. 217-237.

problema abierto, incluso para la tradición revolucionaria. La razón probablemente estriba en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, una relación completamente problemática en América Latina y Chile, habida cuenta de las arraigadas tradiciones "Estado céntricas" que han predominado en la izquierda política y que resultaron funcionales para la etapa de los Estados desarrollistas, entre 1930 y 1973 aproximadamente. Pero, admitámoslo, estamos en una nueva etapa histórica, la de la globalización, en que los Estados se debilitan en su carácter de Estados nacionales, y la iniciativa retorna a la sociedad civil. La emergencia de nuevos movimientos sociales es justamente una expresión de este cambio histórico, y en consecuencia, los movimientos sociales requieren generar sus propias formas de representación que diversifiquen las expresiones de la sociedad civil y que den lugar a nuevas formas de representación política.

La experiencia de la CONFECH es altamente interesante y novedosa, a propósito de las cuestiones relativas a la representación, ya que ha significado para los estudiantes universitarios hacer un ejercicio democrático de articulación, debate y toma de decisiones de diversas federaciones estudiantiles. Por cierto, aquí los partidos políticos no están ausentes, pero las principales decisiones acerca del movimiento no las toman los comités centrales o las direcciones de los partidos, sino que una instancia de representación plural de los propios estudiantes. Es un ejercicio complejo, costoso, pero tal vez allí radique una de

Índice

Introducción	7
Capítulo I	
<i>El movimiento estudiantil: el despertar de la sociedad</i>	13
Capítulo II	
<i>¿Qué es un movimiento social?</i>	27
Capítulo III	
<i>Los nuevos movimientos sociales en América Latina</i>	47
Capítulo IV	
<i>Los movimientos sociales en el siglo XX chileno</i>	73
Capítulo V	
<i>¿El futuro del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales en Chile?</i>	137

las razones de por qué el movimiento estudiantil pudo y ha podido persistir por tanto tiempo en sus luchas.

Finalmente, sobre el futuro de los movimientos sociales en Chile, probablemente éstos se multipliquen, ya que la emergencia de un movimiento social vigoroso tiende a dinamizar a la sociedad y a generar una suerte de "efecto demostración". Sin embargo, cualquiera sea el desarrollo de movimientos sociales sectoriales, con más o menos logros específicos, se van a encontrar con un sistema político refractario al cambio, lo que inevitablemente los enfrentará —en corto o mediano plazo— al problema de imaginar y proponer cambios políticos mayores. La experiencia de los estudiantes, en ese sentido, es emblemática: por más que se movilicen se enfrentan con barreras infranqueables, a menos que generen una crisis política de tal envergadura, que obligue a la reforma política. Pero, en verdad, una crisis política en Chile no madura si no son muchos y variados los sectores sociales involucrados, y aún en estas circunstancias, esa diversidad de sectores movilizados requiere generar sus propias formas de articulación social (formas propias de representación e instancias de resolución democrática en diversos tipos y formas de asambleas) y de articulación política (horizontes de cambio compartidos) que les permitan superar su propia fragmentación.